

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ECUADOR
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
CONVOCATORIA 2010-2012**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
SOCIALES CON MENCIÓN EN SOCIOLOGIA**

ECONOMÍA Y POLÍTICA EN GUANGAJE

FRANCISCO JOSÉ GACHET PAREDES

Septiembre 2013

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ECUADOR
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
CONVOCATORIA 2010-2012**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
SOCIALES CON MENCIÓN EN SOCIOLOGIA**

ECONOMÍA Y POLÍTICA EN GUANGAJE

FRANCISCO JOSÉ GACHET PAREDES

ASESORA DE TESIS: VALERIA CORONEL Ph.D.

LECTORES/AS:

Cristina Cielo Ph.D.

Santiago Ortiz Ph.D.

Septiembre 2013

DEDICATORIA

A los comuneros de Tingo Pucará
A Cesar, Francisco, Andrés, Marco, Alberto, María, Juliana, Cecilia....
A los dirigentes de la Parroquia de Guangaje
A mis padres

Por su infinito apoyo y su admirable paciencia

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a todos los hombres y mujeres de la parroquia de Guangaje que colaboraron activamente en la elaboración de esta tesis, especialmente a los comuneros de Tingo Pucará, amigos entrañables y referentes personales de lucha. A mis padres, por su apoyo y comprensión en mi extenso y complicado período de formación como sociólogo. A la Jose, mi compañera de vida, de amores, de risas y llantos. Y a todas aquellas personas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que directa o indirectamente han contribuido en la elaboración del presente documento, en especial a Valeria Coronel y los colegas sociólogos de la convocatoria 2010-2012, amigos con quienes pude aclarar innumerables dudas y apaciguar angustias inevitables.

ÍNDICE

Contenido	Páginas
INTRODUCCION.....	7
CAPÍTULO I: LA CUESTION AGRARIA EN EL ECUADOR.....	15
Ecuador: ¿un caso de las revoluciones “campesinas” del siglo XX?	15
Los debates “clásicos” y contemporáneos sobre la cuestión agraria:.....	22
Notas Teórico-Metodológicas:	35
CAPÍTULO II: REFORMISMO, NEOLIBERALISMO Y ORGANIZACIÓN INDIGENA EN COTOPAXI.....	42
Aspectos particulares de la cuestión agraria en el Ecuador: el caso de la provincia de Cotopaxi	42
La lucha campesina por las tierras altas de Cotopaxi.....	49
El fin de la reforma “desde arriba” (¿y de la presión “desde abajo”?): ajuste estructural y “reprimarización modernizada” en Latinoamérica.	60
Movimiento Indígena y el Regreso del Estado en el siglo XXI:.....	63
Movimiento Indígena: ¿en crisis o en transición?.....	68
CAPITULO III: LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA IRRESUELTA CUESTION AGRARIA EN EL ECUADOR: EL CASO DE LA “FRAGMENTADA” PARROQUIA DE GUANGAJE	73
Aspectos sociodemográficos y territoriales de Guangaje:.....	73
Las redes de la construcción a través del tiempo: experiencias de vida de cuatro maestros mayores de Guangaje.	87
Jerarquías, lazos y conflictos en las redes de la construcción.	94
Un conflicto intraparroquial: abigeato, motocicletas indocumentadas y los jóvenes de Guangaje.....	101

CAPITULO IV: POLÍTICAS PÚBLICAS, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LOS JÓVENES DEL MICC.....	108
Políticas Públicas en el gobierno de la Revolución Ciudadana: ¿hacia un nuevo intento de industrialización interna?.....	108
Procesos de fortalecimiento del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi..	116
CONCLUSIONES.....	122
ANEXOS:.....	141

INTRODUCCION

La “cuestión agraria” ha sido uno de los paradigmas teóricos más revisados dentro de las ciencias sociales modernas. Las diferentes vías históricas de consolidación del capitalismo y del modelo Estado-Nacional en el mundo, desde los casos “clásicos” de Inglaterra y Francia, pasando por las variantes comunistas en Asia (Moore, 1966), los violentos enfrentamientos sociales en África (Moyo y Yeros, 2005) y las experiencias vividas en distintas regiones latinoamericanas (Kay, 2002; Zamosc, 1990), generaron jerarquías sociales modernas justificadas en las aparentes contradicciones duales entre el campo y la ciudad, la agricultura y la industria, lo antiguo y lo nuevo, el retraso y el progreso. Aunque en un inicio se suponía, con una fuerte carga eurocéntrica, la existencia de un proceso lineal, universal de desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo (mayor industrialización y proletarización, tecnificación de la actividad agrícola, rápidos procesos de urbanización, etc.) los teóricos de la dependencia supieron poner en duda muchos de los fundamentos epistemológicos y empíricos sobre los cuales dichas lecturas históricas se sostenían (Cardoso y Faletto, 1971; Wallerstein, 1974; Velasco, 1981). Lo que se encontró fue más bien una extensa lista de experiencias irresueltas de transición agraria e industrialización interna, donde la semi-proletarización del campesinado resultaba más una constante que una excepción a la regla. Experiencias históricas que dependieron de las relaciones de fuerza políticas internas y externas que se enfrentaron en cada sociedad, en momentos determinados.

Para Henry Bernstein (2004; 2008; 2011), un importante analista de las transiciones agrarias en el mundo, las consecuencias sociales de dichas experiencias truncas de “modernización” se profundizan con la globalización y el advenimiento del neoliberalismo a fines del siglo XX, lo que le motiva a suponer la pertinencia de la discusión alrededor de una nueva cuestión agraria en el siglo XXI. A diferencia de la cuestión agraria clásica, que motivó el estudio de las exigencias de acumulación del capital para con el sector agropecuario, Bernstein argumenta que el dilema central al que nos enfrentamos durante el siglo XXI no se ubica tanto en las contradicciones o complementariedades entre la industrialización y la tecnificación de la agricultura, sino más bien en la “fragmentación” laboral que ahora aqueja a los grandes y crecientes

colectivos de campesinos desposeídos alrededor del planeta, concentrados en el vasto y dependiente Sur global (Moyo y Yeros, 2005).

En efecto, el Estado ecuatoriano transitó por una etapa reformista durante las décadas de los 60s y 70s durante las cuales la “cuestión agraria” fue comprendida desde una perspectiva “clásica”: las políticas dirigidas hacia la ampliación de la frontera agrícola y la colonización amazónica, la tecnificación de ciertos cultivos, algunos intentos de industrialización interna y la entrega de tierras y modernización de las relaciones de producción en el agro (abolición del precarismo y del huasipungo) son ejemplo de ello. Siguiendo la tesis de Zamosc (1990), un débil proceso de modernización *por la vía junker* no viabilizó a las economías campesinas serranas que recibieron, en su gran mayoría, tierras marginales de poca aptitud agrícola. La presión de grupos de poder con intereses en el agro permitieron la supervivencia de un sector terrateniente volcado progresivamente hacia nuevos agronegocios como el cultivo de flores, brócoli y la acumulación de tierras productivas, al tiempo que el “boom” petrolero dinamizó la economía interna ofreciendo diversos trabajos asalariados (muchas veces inestables y escasos) a los campesinos minifundistas.

Con el neoliberalismo las tendencias sociales hacia la fragmentación laboral, esto es, a la variedad de trabajos que emplean a buena parte de los campesinos con poca o nada de tierra, se profundizaron (Guerrero y Ospina, 2003). Este período histórico provocó el aumento de las migraciones internas e internacionales que expulsaron a las poblaciones sobrantes del “nuevo” modelo de acumulación, sostenido, otra vez, en la exportación de bienes primarios, sean petroleros o agroindustriales (Acosta, 2006: 157). Pero esta tendencia nacional no fue aceptada de manera pasiva por la sociedad, sobre todo por parte de los sectores rurales indígenas de la sierra ecuatoriana.

Así, a fines del siglo XX surge un nuevo actor político articulado alrededor de una demanda que exigía no solo espacios y oportunidades económicas para los campesinos indígenas de la sierra, sino también la construcción de una democracia más inclusiva y un modelo Estado-Nacional alternativo: el Estado Plurinacional. Después de casi dos décadas de duros enfrentamientos, movilizaciones, caídas presidenciales, y una tortuosa conversión monetaria en el torna siglo, el Estado regresa a escena con una nueva Carta Magna que dio cabida a diversas demandas populares. Durante la elaboración de la constitución de Montecristi se recogieron las exigencias de los

sectores populares (indígenas y campesinos) del país, lo que a su vez motivó a académicos y activistas políticos a discutir abiertamente sobre la posibilidad de una nueva forma de pensar y actuar frente a la cuestión agraria en el Ecuador, ahora más cercana a la lucha por la soberanía alimentaria y la construcción de una economía posindustrial (una “biopolis ecoturística”, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013). Postura ciertamente distanciada de la forma clásica en cómo había sido comprendida la transformación agraria durante el siglo pasado, pero que no concuerda necesariamente con las políticas promovidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, especialmente en lo que respecta al sector agrario y extractivo (Carrión y Herrera, 2012; Sacher y Acosta, 2012).

La presente investigación, de manera general, intentará discutir la propuesta teórica de Henry Bernstein (2004; 2008; 2011) acerca de los límites y posibilidades de una vía alternativa de transición agraria en el siglo XXI en un contexto desfavorable para el campesino. El problema que observa Bernstein es que la ya histórica diferenciación interna de los sectores campesinos en diversas y escasas actividades laborales dificulta la formación de un actor político capaz de luchar por vías campesinas (clásicas) de modernización agraria. Como podremos constatar, esta tesis arroja luces sobre las posibilidades o limitaciones del actual momento histórico para resolver la irresuelta cuestión agraria en el Ecuador. A la vez, la tesis de Bernstein nos permitirá analizar el momento crítico por el que está transitando uno de los actores colectivos más importantes en la disputa por la soberanía alimentaria y la construcción del Estado Plurinacional en la actualidad, el Movimiento Indígena Ecuatoriano, en tanto sus bases organizativas se están fragmentado, tanto en la variedad de actividades laborales y fuentes de ingresos disponibles como en la propia organización comunitaria y parroquial.

Para ello se seleccionó un caso de estudio en la provincia de Cotopaxi (uno de los bastiones político del Movimiento Indígena), cantón Pujilí, donde las luchas campesinas de la segunda mitad del siglo XX liberaron a la población indígena del poder del hacendado y consiguieron la titulación de tierras marginales, ubicadas en las zonas altas de origen volcánico en la cordillera occidental. Para observar los contornos de la nueva cuestión agraria del trabajo de Bernstein se seleccionó a la parroquia de Guangaje, una de las parroquias más pobres del país (Larrea, et al., 2011) donde

todavía se mantiene vínculos relativamente fuertes con el Movimiento Indígena y con el Estado. Las condiciones climáticas adversas del páramo, las limitadas extensiones agrícolas viables, en adición al crecimiento población y a una marcada escasez de recursos hídricos han provocado que en esta parroquia (y en una buena parte del occidente de la provincia de Cotopaxi) la economía campesina no logre, por sí sola, sostener a la población que allí habita. Como consecuencia de la irresuelta cuestión agraria en el Ecuador, Guangaje es hoy en día una parroquia con altas tasas de migración joven y masculina, es, en definitiva, un espacio social donde la “fragmentación” laboral de su población resulta evidente.

Pero como lo advertía Luciano Martínez (1988 [1985]) al observar la fragmentación laboral de los campesinos indígenas hace dos décadas, es posible intuir que el grado de diversificación laboral estaría en función de los sectores de la economía regional que fueron capaces de absorber a las poblaciones expulsadas. La industria de la construcción, vinculada a la minería de piedra pómez alrededor del volcán Cotopaxi y al crecimiento urbano de la cercana capital, ha sido uno de los sectores económicos locales más “adaptados” a las necesidades económicas y sociales del campesino indígena de la sierra. Por ello, y reconociendo que también existe un nivel de fragmentación laboral al interior de una misma actividad económica, nos concentraremos en conocer las experiencias laborales y organizativas de oficiales, albañiles, maestros mayores y bloqueros que residen en la parroquia de Guangaje.

El primer capítulo ampliará el debate sobre la cuestión agraria y las vías de modernización tanto a nivel internacional como para el caso concreto del Ecuador. Se resaltan los hallazgos de algunos analistas que observaron directamente el proceso de modernización desarrollista y la llegada del neoliberalismo, así como la progresiva fragmentación laboral de los sectores campesinos e indígenas de la sierra ecuatoriana que no encontraron espacios estables en el mercado agrícola o laboral. Allí se plantean las preguntas de investigación de manera más clara para pasar a proponer la pertinencia de utilizar una estrategia metodológica relacional para comprender el “campo de fuerzas” que moldea actualmente la cuestión agraria en la parroquia de Guangaje, en donde los oficios relacionados con la industria de la construcción se han extendido considerablemente.

En el segundo capítulo se describe el proceso de modernización de la provincia de Cotopaxi durante las décadas de los 60s y 70s, prestando especial atención a las circunstancias por las que atravesaron los poblados indígenas de la cordillera occidental. También se describe brevemente a la parroquia de Guangaje, especialmente a aquellas comunidades y grupos familiares afiliados a la Unión de Organizaciones Indígenas Rumiñahui de Guangaje (UNOIRG), una organización de segundo grado filial del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El capítulo finaliza con una revisión general de la trayectoria política del Movimiento Indígena ecuatoriano, su lucha contra las medidas de ajuste estructural, su actual “crisis relativa” y el cansancio organizativo de sus bases (Ospina, 2009; Tuaza, 2011), su rol durante el regreso del Estado, los acercamientos y enfrentamientos que el Movimiento ha tenido con el gobierno de la Revolución Ciudadana y las propuestas políticas novedosas plasmadas en la nueva constitución.

El tercer capítulo describe las redes laborales de la industria de la construcción que se han extendido en el territorio de Guangaje. En primer lugar se presentan los resultados arrojados por el Censo Nacional de población y vivienda entre 1990 y 2010, en paralelo con los resultados de una encuesta realizada a sesenta trabajadores del sector de la construcción de distintas comunidades de la parroquia. Luego se describirá la experiencia laboral de tres maestros mayores contratistas de diferentes edades, el puesto más alto al que estos trabajadores pueden llegar, para mostrar cómo se han ido construyendo las redes laborales de la construcción en el tiempo. Con ello se reconstruirá un tipo ideal de red laboral que posibilita la migración temporal, así como sus respectivas jerarquías internas, tanto para el sector de la construcción (de vivienda, alcantarillado, etc.) como en la fabricación de bloques en la ciudad de Latacunga. Por último se describe un conflicto interparroquial entre comuneros de Guangaje y la comunidad de Maca Grande (Cantón Latacunga, parroquia Poaló) que tuvo profundas repercusiones durante los meses en los que se realizó el trabajo de campo (de Febrero a Junio de 2012) y que muestra la forma en que la migración temporal y sus consecuencias sociales reconfiguran las relaciones de fuerza a nivel local. En pocas palabras, este capítulo tratará de describir los conflictos que se derivan de la diferenciación laboral en la parroquia, tanto al interior de los oficios de la construcción

(conflictos entre ingenieros, maestros mayores, albañiles, etc.), como a nivel parroquial (conflictos entre comuneros).

El cuarto y último capítulo observa el rol del gobierno de la Revolución Ciudadana como actor determinante en la economía nacional actual, el cual, como se tratará de mostrar, no está respondiendo a las necesidades campesinas de la parroquia: los grandes proyectos del Estado en construcción y ampliación de carreteras que facilitan la movilidad del migrante temporal, los nuevos canales de crédito público hacia el sector de la construcción, los mayores controles alrededor de la afiliación al seguro social para con los trabajadores del sector o incluso ciertos proyecto turístico en la cordillera occidental de la provincia (alrededor del cráter del volcán Quilotoa) muestran diferentes posturas políticas y económicos desde el Estado hacia el problema de la pequeña economía campesina de la sierra ecuatoriana. También se describe la forma en que el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), sobre todo por parte de un incipiente colectivo de jóvenes indígenas involucrados en la organización, está afrontando la desarticulación de las bases producto de la migración hacia las urbes.

Aunque el Consejo de Jóvenes del MICC es una agrupación todavía pequeña e incipiente, se advierte que estas nuevas capas de dirigentes jóvenes indígenas están interesadas en intervenir políticamente sobre las condiciones laborales y la situación laboral fragmentaria de una parte de sus bases organizadas. Esto nos motivaría a suponer que tanto el Estado como el Movimiento Indígena están actuando frente a una nueva cuestión agraria en el occidente de Cotopaxi, menos interesadas por incentivar una nueva reforma agraria, menos vinculada a las intenciones de modernización y tecnificación de la agricultura campesina o al incentivo de la industrialización local; pero aparentemente más cercanas a los problemas derivados de la precarización laboral de los migrantes internos, a la ampliación de mercados locales alrededor del turismo comunitario, a ciertos incentivos para los agro empresarios provinciales por parte de las autoridades estatales, etc.

En las conclusiones se presenta una relectura de la propuesta teórica de Bernstein acerca de la nueva Cuestión Agraria del Trabajo y la manera en que la ampliación de las redes laborales de la construcción ha afectado la articulación política a nivel parroquial. Con la información obtenida en el cuarto capítulo podremos tener una idea general de los contornos de la cuestión agraria del siglo XXI en el Ecuador,

visto desde las particularidades históricas de uno de los poblados campesinos más afectados no solo por la inclemencia climática del páramo, sino sobre todo por la inevitable fragmentación laboral interna derivada de procesos de modernización capitalista incompletos/periféricos. Dado que el debate teórico acerca del rol de la agricultura en momentos de modernización económica nos obliga a observar procesos nacionales y globales más amplios, la situación actual de la parroquia de Guangaje aquí descrita, y la disputa política observada en la provincia de Cotopaxi (entre el gobierno y el MICC), ofrecerán únicamente una mirada parcializada sobre la cuestión agraria en el Ecuador.

Sin embargo el caso de Guangaje que presentaremos en las siguientes páginas muestra que la problemática agraria contemporánea, y el conflicto social por medio del cual se desarrolla, nos obliga a ver más allá de la (aún necesaria) distribución de medios de producción en el agro, del aumento de la productividad del sector o de la capacidad de transferencia de excedentes productivos desde el agro hacia la todavía añorada industria nacional (todas perspectivas clásicas para entender el destino de la producción agrícola bajo condiciones capitalista). El territorio de los “campesindios” de Guangaje (Bartra, 2010) es, más que un espacio productivo, una construcción social en la cual las relaciones familiares y los vínculos fuertes son de fundamental importancia para la reproducción social y la organización política, aunque están en constante peligro de descomposición y fragmentación como producto de las presiones implícitas en el trabajo precario del migrante interno, así como por la diferenciación entre aquellos indígenas “más campesinos” y aquellos “más proletarios” al interior de las parroquias. Bajo estas condiciones sociales analizadas en la provincia de Cotopaxi, ¿qué posibilidades tiene la demanda por la soberanía alimentaria y la importancia de las pequeñas economías campesinas para convertirse en un proyecto cohesionador y movilizador? Este es precisamente el reto político que está enfrentando el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, sin duda el actor político colectivo más relevante de la provincia que está disputando las oportunidades, y aguantando los golpes, del regreso del Estado.

En definitiva, la presente tesis argumenta que la cuestión agraria del siglo XXI en el Ecuador podría tener resultados favorables para el conjunto de campesinos ecuatorianos (viables o no en términos de mercado) en caso de que las organizaciones

de la sociedad civil se fortalezcan y extiendan las presiones políticas por la soberanía alimentaria, por la construcción de una economía pos-extractivista y por la formación del Estado y su novedoso (aunque aún incierto) carácter Plurinacional. Para el Movimiento Indígena ecuatoriano esta rearticulación es particularmente compleja debido a la situación laboral fragmentaria y precaria de sus bases, pero su lucha histórica demuestra la enorme capacidad organizativa y propositiva de este marginado sector de la población ecuatoriana, que necesita ahora incorporar en sus reflexiones e intervenciones a otras experiencias laborales y de vida por las que atraviesan sus propias bases. Esta tesis también pretende aportar con información y reflexiones particulares alrededor de problemáticas que han generado incertidumbres, intereses y acciones concretas por parte de algunos jóvenes organizados del MICC, agrupación con un enorme potencial para enfrentar la altamente disputada, sobremanera compleja y todavía prometedora cuestión agraria en el Ecuador del siglo XXI.

CAPÍTULO I: LA CUESTION AGRARIA EN EL ECUADOR

Ecuador: ¿un caso de las revoluciones “campesinas” del siglo XX?

Algunas naciones latinoamericanas en el siglo XXI parecerían estar cambiando de rumbo con respecto a los lineamientos políticos y económicos trazados por el neoliberalismo en décadas pasadas. Muchos gobiernos progresistas de la región, con amplio apoyo popular, han sido capaces de reconstruir a un Estado que, en su intento por retirarse de la escena política nacional desde la década de los setentas, dejó a casi todas las sociedades latinoamericanas en profundas crisis estructurales, o bien las contuvo con un elevado grado de autoritarismo y violencia. Frente a las recetas fondomonetaristas de ajuste estructural, una serie de levantamientos y movilizaciones populares en la región, pero sobre todo provenientes de los sectores rurales del “Sur” global (Moyo y Yeros, 2005), pusieron en duda al modelo neoliberal y posibilitaron el retorno del Estado en la actualidad. Con demandas de contenidos diversos, tomas de tierras, cierre de carreteras, apropiación de empresas privadas quebradas, etc., dichos movimientos consiguieron frenar el avance del neoliberalismo como proyecto político hegemónico (Moyo y Yeros, 2005; Auyero, 2003; Razeto, 2007). Su lucha mantuvo la demanda por un Estado y una sociedad más incluyentes, fueron contrarias a los intentos de privatización de empresas públicas e incluso llegaron a liderar la resistencia (y lo siguen haciendo) frente a las intenciones neoimperialistas de los Tratados de Libre Comercio por parte de las grandes potencias. En Latinoamérica, algunos países lograron la refundación nacional a través de verdaderas asambleas populares constituyentes sobre las cuales se erigió un nuevo intento por consolidar a la estructura Estatal, eso sí, bajo nuevos términos (Acosta, et al., 2008; Lander, 2004; Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013).

Algunos analistas académicos, mediáticos e incluso activistas políticos de la región sostenían que el regreso del Estado latinoamericano venía por dos vías distintas, una “pragmática/moderada” (representado por los gobiernos de Brasil, Uruguay o Chile) y otra “populista/inmadura” (característica de los gobiernos de Venezuela o Bolivia). A pesar de que esta lectura simplista de la historia contemporánea latinoamericana ha sido duramente cuestionada (Ramírez, 2006), el punto sobre el que

quisiera insistir es que éste acontecimiento histórico fue posible gracias a una amplia movilización y presión política popular. Aunque diversa en términos de “demandas de clase”, estos sectores se fueron articulando de formas particulares en lo que se llegó a conocer como los “nuevos movimientos sociales” (Offe, 1992a; Ibarra, Gomá y Martí, 2002): los levantamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional mexicano (EZLN) frente a los Tratados de Libre Comercio promovidos por Estados Unidos, las “guerras del agua” y los levantamientos de los Cocaleros en Bolivia o las numerosas apropiaciones de tierras productivas en gigantes latifundios brasileños por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, son solo algunos ejemplos de las varias formas de luchas y resistencia populares, luchas aún vigentes, incluso, en varios países con gobiernos “progresistas” de la región.

Definitivamente, el Estado no regresa a regir sobre una sociedad libre de conflictos. En el Ecuador el neoliberalismo no hizo sino profundizar muchos de los “males del subdesarrollo” que los gobiernos reformistas-militares de los 60s y 70s trataron de resolver, uno de los cuales sigue siendo el irresuelto problema de la tierra (North, 1985. Brassel et al., 2008). Visto en el tiempo largo, en distintos momentos históricos de formación de los Estados Latinoamericanos, desde la revolución mexicana a inicios del siglo XX, pasando por la revolución nacionalista boliviana de 1952 y la revolución cubana de 1959, y finalizando con las décadas nacional-desarrollistas en las décadas de los 60s y 70s cuando prácticamente la totalidad de gobiernos de la región promovieron políticas de redistribución de tierras e industrialización interna, la “cuestión agraria” ha sido unos de los campos sociales de enfrentamiento político más complejos e intensos de nuestra historia poscolonial (Knight, 2001; Hylton y Thompson, 2006, Kay, 2002).

Pero la ansiada industrialización y modernización nacionales no llegaron al subcontinente con la fuerza esperada. De ahí que para varios analistas de diferentes y contrarias posiciones políticas, las experiencias particulares de “desarrollo” acelerado del sudeste asiático generaron mucho interés: ¿cómo fue posible que en países con trayectorias poscoloniales tan cortas se logren mejores resultados, y a un ritmo mucho mayor, que los conseguidos por el conjunto de naciones latinoamericanas? Aunque se ha tratado de defender la tesis de que fueron una serie de políticas orientadas hacia el

mercado y la apertura de las fronteras las que dinamizaron las economías internas en Corea del Sur o Taiwán, Cristóbal Kay (2002: 1084-88) y Liisa North (1997) han mostrado que en el sudeste asiático fue mucho más radical el accionar estatal en cuanto a la redistribución de tierras, dichas reformas llegaron antes que los intentos de industrialización, se logró transferir de manera efectiva los excedentes agrarios a la naciente industria, el apoyo político y económico estadounidense fue decisivo, la relativa escasez de recursos naturales empujó a la consolidación de la industria local y se logró la conversión de un grupo de terratenientes débiles en una naciente burguesía “emprendedora”¹.

En contraste con ciertos sectores en Asia, en Latinoamérica (con las notables excepción de México y Bolivia) las reformas en el agro llegaron después de los procesos de industrialización, cuando las redes de la migración y la consecuente diferenciación del sector campesino se habían profundizado (Kay, 2002). El aumento de los precios de alimentos en el mercado interno (y la presión que esto ejercía sobre los salarios a nivel local) también limitó la competitividad de muchas economías en los mercados internacionales (Kay, 2002).

Para el Estado ecuatoriano no fue fácil enfrentar a un sector terrateniente poderoso e influyente que prefería mantener el carácter primario-exportador de la economía nacional (North, 1985). En términos generales, los procesos de modernización económica desarrollistas dejaron legados parciales o nulos según las relaciones de fuerzas políticas (internas y externas) de cada país, posibilitando así la posterior consolidación del mercado global corporativo de productos agroindustriales (Akrham-Lodi y Kay, 2010b; McMichael, 1997) y profundizando la ya histórica “fragmentación laboral” de un campesinado desposeído y distanciado de la disputa por la tierra en la era de la globalización neoliberal (Rubio, 2009; Bernstein, 2011).

¹ Algo que contrasta con estos casos contemporáneos de modernización económica en el agro, donde los campesinos tuvieron un rol relativamente pasivo frente a la reforma, son las experiencias de las revoluciones campesinas que experimentaron algunos países de Asia, África y América Latina durante el siglo XX. Erick Wolf (1973) estudió en detalle los casos de Argelia, México, Cuba, Rusia, China y Vietnam como ejemplos de revoluciones de base campesina (aldeana, comunitaria, sostenida por medio de lazos fuertes). Sin embargo Wolf reconocía que la categoría “campesino” albergaba una enorme diversidad de sujetos y relaciones sociales, producto de la diferenciación interna y las relaciones de poder que se tejían entre las clases populares, las dominantes y el sistema político interno e internacional para cada uno de los casos analizados.

Se podría argumentar que uno de los logros del neoliberalismo fue el de encubrir en el debate público la necesidad de una nueva (y efectiva) política agraria redistributiva, a expensas de un campesinado empleado en diferentes actividades de las economías locales (muchas veces precarias e informales) que posibiliten su reproducción por fuera de las labores agropecuarias. Pero con el regreso del Estado también regresa la esperanza de conseguir el anhelado cambio estructural en lo concerniente a la distribución de la tierra a favor del sector campesino latinoamericano, al tiempo que las luchas populares exigieron constantemente de un proyecto político que albergue una alternativa al proceso “clásico” de transición económica moderna hacia la consolidación del capitalismo, a saber: la industrialización interna, la ampliación del mercado interno para con las capas populares, la tecnificación de la actividad agropecuaria y la vinculación nacional no-dependiente a los mercados internacionales (Bernstein, 2011).

En el caso ecuatoriano los gobiernos militares desarrollistas lograron eliminar el precarismo laboral en la costa y terminaron por disolver al sistema de haciendas en la sierra durante las décadas de los 60s y 70s. Con el amparo de la “Alianza para el Progreso” promovido por el gobierno de Kennedy, interesada en calmar las presiones campesinas por la tierra y un posible viraje político hacia la izquierda en la región, se fundó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).

En la sierra esta institución estatal, en conjunto con las paralelas redes sociales a través de las cuales se articularon indígenas huasipungueros, estudiantes universitarios, sectores progresistas de la Iglesia Católica, abogados y militantes del Partido Comunista, lograron que algunas familias indígenas adquieran tierras, aunque éstas fueron, en su mayoría, páramos con pendientes pronunciadas no tenían aptitudes productivas suficientemente atractivas para un sector terrateniente “en modernización” (Ibarra y Ospina, 1994; Zamosc, 1990).

Durante este mismo período la economía ecuatoriana también estaba transitando por un nuevo proceso de reprimarización de sus exportaciones, producto del “boom” petrolero de la década de los setentas y la crisis de las exportaciones del banano (Velasco, 1983: 201-230; Acosta, 2006: 131). Las crecientes rentas petroleras produjeron una nueva imagen internacional de “nuevo rico” para el Ecuador, deseoso de un “endeudamiento agresivo” para la industrialización interna en los ojos del capital

transnacional. En consecuencia las importaciones de alimentos y productos suntuarios aumentaron, se abrió el camino para el posterior crecimiento demográfico y la urbanización nacional y se ampliaron las relaciones mercantiles y salariales en el nuevo abanico de actividades laborales en el Ecuador (Acosta, 2006). Así las cosas, el conjunto de poblaciones indígenas que recientemente habían adquirido tierras (marginales) en la sierra ecuatoriana, incapaces de reproducirse exclusivamente como campesinos, empezaron a construir redes de relacionamiento en trabajos asalariados diversos, ocasionales y precarios.

Para inicios de la década de los 80s el modelo desarrollista entró en decadencia. La “crisis de la deuda”, agravada por un proceso de industrialización incompleto, desestabilizó paulatinamente el campo político nacional. Estas circunstancias permitieron la promoción de varias reformas estructurales impulsadas por los diferentes organismos crediticios multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que pretendían reducir el tamaño del Estado, abrir las fronteras nacionales al flujo de mercancías y capitales y ampliar el mercado de tierras como principal mecanismo de redistribución en el agro (Acosta, 2006: 157-158). Pero estas reformas no fueron aceptadas con pasividad por parte de los sectores populares. A Partir de ésta década el Movimiento Indígena Ecuatoriano ganó protagonismo a nivel nacional, no solo por su enorme capacidad de movilización y enfrentamiento público contra las medidas de ajuste, sino también porque logró re-articular a las fuerzas políticas progresistas del Ecuador que enfrentaban al Estado neoliberal²(Ramírez, 2009). Esto permitió que se plantee una alternativa política de fundamental importancia para el retorno del Estado en el siglo XXI: la demanda por la construcción del Estado Plurinacional (Guerrero y Ospina, 2003).

Pero el “sismo étnico” de la década de los noventas no fue capaz de evitar el peor desplome financiero de la historia republicana del Ecuador. Ante la desesperación y la incapacidad de las élites gobernantes por enfrentar la crisis regional del neoliberalismo de fines del siglo XX, el dólar estadounidense se convirtió, de manera

²El “Estado Neoliberal” es una conceptualización desarrollada por David Harvey (AÑO: 77-78) en su afán por distinguir este período histórico desde la teoría y desde experiencias históricas y geográficas concretas. Aunque insiste que el Estado neoliberal visto desde la teoría y desde la práctica puede resultar incongruente, esta formación política propia de finales del siglo XX e inicios del XXI está marcada por su empeño en construir un adecuado clima de inversiones para le capital transnacional y por su sesgo político en defensa del sector financiero.

inconsulta y en un corto y crítico período de tiempo, en la moneda oficial en el Ecuador, lo cual implicó la pérdida de soberanía político-económica del Estado central. Los más golpeados en la crisis de torna siglo fueron, nuevamente, los sectores populares de la sociedad ecuatoriana, muchos de los cuales optaron por la migración internacional como alternativa de vida³. Otros, en cambio, optaron por, o tan solo tuvieron la oportunidad de, aumentar la frecuencia de la migración temporal al interior del país como estrategia de supervivencia, ampliando la diversidad de ocupaciones y los grados de precarización de la clase trabajadora. Así, el nuevo siglo se inicia con la profundización de las desigualdades estructurales del Ecuador, a pesar que albergó la oportunidad, por vez primera, de que los indígenas ocupen puestos importantes en el aparato estatal, durante la problemática, decepcionante y efímera alianza forjada con el flamante partido “Sociedad Patriótica” del destituido ex-presidente Lucio Gutiérrez, el último de los gobiernos destituidos del período neoliberal.

El regreso del Estado en el Ecuador se da en 2006, con la victoria del gobierno de la Revolución Ciudadana, un joven movimiento político liderado por el economista Rafael Correa Delgado y un reconocido grupo de académicos nacionales, lo que sin duda trajo nuevas esperanzas para los sectores populares y organizados de la sociedad civil ecuatoriana (Martínez, M., 2010). La promoción y realización efectiva de una Asamblea Popular Constituyente en 2008 por parte de dicho gobierno permitió un primer acercamiento estratégico entre movimientos sociales (liderados por el Movimiento Indígena) y el gobierno. La nueva constitución plasmó la demanda indígena-campesina por la construcción del Estado Plurinacional. Abrió también las posibilidades de plantear una nueva propuesta política y económica sobre la “cuestión agraria” en el Ecuador, articulada alrededor de la todavía ambigua vía de modernización alternativa plasmada en el “Plan Nacional Buen Vivir 2009-2013” y la necesidad de asegurar una efectiva soberanía alimentaria a nivel nacional.

³ En el período 1995-1999 la pobreza en el Ecuador aumentó en un 60%, la extrema pobreza aumenta del 12% al 21% a nivel nacional, para 1999 el 77% de los hogares rurales vivían en la pobreza y el 38% en la extrema pobreza, mientras que de manera paralela el flujo migratorio hacia países como Estados Unidos y España aumentaba en un 33% y 94.8% respectivamente, en el período 1995-1999 (Ramírez y Ramírez, 2005: 63, 112)

Empero, con el pasar de los años, las discrepancias entre ciertos movimientos sociales y el gobierno de la Revolución Ciudadana se han radicalizado⁴, al punto en que ambos se han convertido en actores políticos contrarios alrededor de temas controversiales de interés nacional como los proyectos mineros a gran escala, la ley de aguas o la constantemente postergada ley de tierras (Sacher y Acosta, 2012; Herrera y Cárdenas, 2012).

La migración interna y temporal parece haber sido la estrategia más importante para las poblaciones comprendidas en la actual parroquia rural de Guangaje, perteneciente al cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi⁵. Ubicada por encima de los 3.000 msnm alrededor de suelos secos de origen volcánico, Guangaje (y las poblaciones aledañas) es una de las parroquias más pobres en términos de necesidades básicas insatisfechas, consumo por habitante e incidencia de la pobreza de toda la sierra ecuatoriana (Larrea et. al, 2011: 29). Durante la década de los 90s y primeros años del nuevo siglo los pobladores de Guangaje participaron activamente en los diferentes levantamientos organizados por la CONAIE, y por su órgano regional, El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Sin embargo, estos actores políticos “étnicos” no lograron detener la peor crisis económico-financiera ecuatoriana que nos condujo a una dolarización de facto, lo cual perjudicó aún más a las pequeñas economías campesinas imposibilitadas de competir en el mercado interno frente a productos importados. Décadas de marginación han logrado extender considerablemente las redes de relaciones que vinculan a la fuerza laboral de ésta parroquia con la industria de la construcción, tanto por su cercanía geográfica a la ciudad de Quito como por la creciente actividad intermedia de fabricación de bloques en la ciudad de Latacunga. Como consecuencia del aumento de la migración temporal predominantemente masculina hacia la construcción, el trabajo agrícola de la zona se ha feminizado y envejecido, algunas tierras han sido desocupadas por completo, nuevas fuentes de prestigio social han aparecido en el espacio parroquial y, más preocupante aún, nuevos conflictos “intraétnicos” han surgido a partir del largo proceso de

⁴Según Acción Ecológica (2012), durante el período 2008-2010 se produjeron 20 casos penales durante movilizaciones contra proyectos mineros, conflictos relacionados con agua, en manglares e incluso durante una reunión de integración regional (ALBA).

⁵ Esto hace sentido con los hallazgos de Ramírez y Ramírez (2005: 77) en tanto la migración internacional se concentró entre habitantes de Guayaquil, Quito y Cuenca, no así en los sectores rurales más marginados del Ecuador.

diferenciación interna del campesino indígena, conflictos que han profundizado la actual debilidad “relativa” del Movimiento Indígena a nivel nacional (Ospina, 2009).

Estas problemáticas contemporáneas particulares de las regiones altas de la provincia de Cotopaxi no son casos aislados sino que, de una u otra forma, pueden también ser observados allí donde los legados de los procesos de modernización económica y política en el campo fueron parciales. En el siguiente acápite se analizan los debates teóricos acerca de la cuestión agraria y su especificidad en el siglo XXI. Se resaltan las propuestas teóricas de Henry Bernstein (2004; 2006) quien plantea, en pocas palabras, la pertinencia de debatir alrededor de una nueva cuestión agraria del siglo XXI, focalizada en las consecuencias de la acelerada fragmentación y precariedad de las actividades laborales de los campesinos más pobres.

Los debates “clásicos” y contemporáneos sobre la cuestión agraria:

Una serie de extensas y exhaustivas revisiones bibliográficas han tratado de ofrecer una mirada global sobre la trayectoria de la perspectiva analítica propia de la “cuestión agraria” como problema investigativo, desde sus orígenes en los trabajos de Marx, Engels, Lenin y Kautsky, hasta propuestas más contemporáneas como las de Phillip McMichael, Henry Bernstein, William Roseberry, entre otros (Akram-Lodhi y Kay: 2010a y 2010b; Akram-Lodhi: 2008; Bernstein: 1994). Estos últimos analistas se han ubicado, directa o indirectamente, en uno de los debates más revisados en las ciencias sociales actualmente, a saber, el de las consecuencias político-económicas de la reducción demográfica (relativa) del campesinado mundial, la paralela fragmentación o diversificación de las clases populares y la consolidación del sistema internacional agroindustrial en la era de la globalización neoliberal (Hobsbawn: 1994; Bernstein: 2006; McMichael: 1997).

En contraste con estas problemáticas que atraviesan a los estudios rurales actuales, Henry Bernstein encuentra tres focos de atención particulares sobre los cuales emergió el debate clásico sobre la cuestión agraria: [1] la capacidad del sector agrícola de ofrecer un excedente económico suficiente para sostener un proceso de industrialización, tanto en el mismo sector agrícola como fuera de él, [2] las

consecuencias políticas y económicas a nivel “micro” del proceso de transformación estructural y diferenciación interna de la fuerza laboral agrícola mercantilizada y [3] las tensiones sociales internas implícitas en la estructura de dominación moderna, así como la capacidad individual y colectiva de agencia para transformar o trascender dichas estructuras (Bernstein, 1996/1997, citado en Akram-Lodhi y Kay, 2010b: 255-56). Aunque estos tres enfoques analíticos siguen presentes en el debate actual sobre la cuestión agraria, éste se ha ampliado gracias al aporte multidisciplinario de varios autores que tratan de dar luces acerca de la complejidad que encierra la diversidad de trayectorias históricas, sociales, políticas y económicas por las que ha atravesado el sector agrícola global durante el desarrollo del capitalismo global durante el siglo XX. Dentro de esta multiplicidad de perspectivas y problemáticas que afectan a los sectores rurales en la actualidad, nos detendremos un momento en la propuesta de Henry Bernstein (2004; 2008; 2011) quien plantea una nueva ‘cuestión agraria del trabajo’ (agrarian question of labor) en el actual momento de desarrollo del capitalismo.

En efecto, Bernstein observa un punto de quiebre en la trayectoria de consolidación del capitalismo a escala global. El autor argumenta que la ‘globalización’ (entendida como el período histórico neoliberal, de 1970 en adelante) ha acelerado un proceso de ‘fragmentación social’ del sector rural global, lo cual le incentiva a preguntar acerca de la especificidad de la ‘cuestión agraria’ (aún irresuelta) a inicios del siglo XXI (Bernstein, 2006). Su respuesta es que la cuestión agraria clásica, es decir aquella analizada en la tradición marxista europea de fines del XIX e inicios del XX y descrita brevemente en el párrafo anterior, ha perdido parte de su relevancia en la medida en que, gracias a la presión política rural que caracterizó el siglo de las “luchas campesinas” estudiado en detalle por Erick Wolf (1973), “la propiedad depredadora de la tierra ha dejado de representar una fuerza económica y política significativa” (Bernstein, 2006: 452). Más polémico resulta el argumento de Bernstein acerca de la pertinencia de hablar sobre “campesinos” en un mundo atravesado por el proceso de globalización:

Desde fines de 1970 (sino antes), hace poco sentido-al menos desde el punto de vista de la política económica- el referirnos a los “campesinos” del mundo capitalista contemporáneo. En pocas palabras, si es que de hecho existen ‘cuestiones agrarias del trabajo’ [agrarian questions of labor] en el siglo XXI, éstas tiene poca

conexión con cualquier ‘cuestión campesina’ constituida en épocas anteriores-en diferentes momentos y lugares- de formación del capitalismo moderno a escala mundial, o incluso con la ‘clásica’ cuestión agraria del capital (Bernstein, 2006: 454-55. Traducción del autor).

Estas aseveraciones se sostienen en dos factores explicativos clave. El primero presupone que durante el siglo XXI las relaciones sociales, productivas y reproductivas se han mercantilizado y generalizado alrededor del mundo. La segunda señala que la consecuencia más visible de las parciales reformas agrarias llevadas a cabo en algunas sociedades durante el siglo XX, así como del posterior proceso de globalización, ha sido la “fragmentación de las clases de trabajo” y el paralelo desvanecimiento de “clases sociales” puras:

[...] el término ‘fragmentación’ encapsula los efectos sobre los que las clases de trabajo [classes of labor] en el capitalismo global, especialmente en el ‘Sur’, persiguen su reproducción, esto es, a través de inseguros y opresivos -y en muchos lugares crecientemente escasos- trabajos asalariados, regularmente combinados con un rango limitado de actividades agrícolas de pequeña escala y un inseguro “sector informal”, sujetos a sus propias formas de diferenciación y opresión donde se entrecruzan variables de clase, género, generación, castas y etnicidad (Bernstein, 2006: 455).

Sin embargo, es importante anotar aquí ciertos hallazgos que parecerían contradecir éstas lecturas ‘radicales’ sobre la especificidad de la cuestión agraria en el siglo XXI. Primero, el reconocido estudio de Erick Wolf acerca de las revoluciones de base campesina durante el siglo XX en partes de Asia, América Latina y África ya se enfrentó a los dilemas derivados de la fragmentación laboral y la diferenciación entre los campesinos pobres y ricos. Wolf señalaba, por ejemplo, que la diferenciación campesina fue de fundamental importancia para que el Partido Comunista Chino logre amplio apoyo rural en las provincias sureñas, donde las reformas agrarias fueron más allá de la redistribución de la tierra (Wolf, 1973: 208-212). Wolf fue muy cuidadoso con su definición de “campesino” como una clase sociales determinada (Wolf, 1973: 7-10), a la cual la definió no como un sector social autónomo, fácilmente diferenciable, sino en función de las relaciones de fuerza que se habrían conformado entre campesinos pobres, campesinos ricos, terratenientes, burócratas, sacerdotes, burguesía, etc. (Wolf, 1973:

10). En suma, las transiciones agrarias modernas siempre han enfrentado dilemas de articulación política de los actores sociales, más que a una restricción economicista de distribución inequitativa de recursos productivos y consolidación de clases perfectamente definidas. Esto también ha sido demostrado en el trabajo de Barrington Moore y su revisión sobre la “variante comunista” experimentada en China, en tanto explica que fue la invasión japonesa de 1937 la que posibilitó al Partido Comunista la articulación efectiva de los sectores campesinos fragmentados y la eliminación de los antiguos privilegios de las clases dominantes (Moore, 1966: 184-190)

Así mismo, como lo ha señalado McMichael (2006) más recientemente, la globalización ha acelerado la consolidación de nuevos circuitos económicos internacionales alrededor de la producción agroindustrial, produciendo un “régimen alimenticio corporativo” que amenaza con la soberanía alimentaria del “Sur” global. En efecto, un grupo de investigadores asociados a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran un proceso de reconcentración de tierras en Latinoamérica durante la primera década del siglo XXI, producto de dicho proceso (Borras et. al., 2011). Aunque dicho estudio carece de registros actualizados de propiedad de la tierra por país (en parte por el desinterés estatal en promoverlas)⁶, sus hallazgos son preocupantes en la medida en que este proceso "está ocurriendo en muchos más países de América Latina y el Caribe [y a una velocidad y magnitud mayor] de lo que se pensaba originalmente" (Borras et. al., 2011: 18). Las actividades económicas que acaparan la mayor parte de tierra estarían relacionadas con dos sectores económicos: el sector alimentario corporativo (ganado, cultivos "comodín", etc.) y el sector no alimentario (silvicultura forestal, conservación a gran escala, minas, etc.). Los autores señalan que son tres factores coyunturales que han motivado el acaparamiento tanto de inversionistas nacionales como internacionales: una demanda creciente de alimentos, forraje y combustibles a nivel internacional, el incremento de la demanda de minerales y productos madereros por parte de países con ingresos medios y una crisis financiera que convirtió a la tierra, y a ciertos cultivos "comodín"⁷, en una opción de inversión y especulación menos riesgosa y rentable (Borras et. al., 2011:26). En la siguiente tabla se expone los cultivos más representativos de esta tendencia regional.

⁶ En Ecuador se han realizado tres Censos Nacionales Agropecuarios, en 1954, 1974 y 2000.

⁷ Los cultivos “comodín” más populares en la región son la soya, la caña de azúcar y la palma aceitera (Borras et. al., 2011: 21)

Tabla 1: cultivos asociados con la reconcentración de tierras en países latinoamericanos.

País	Sectores donde se ha dado una concentración sustancial de tierras y capital recientemente.
Argentina	Soya, trigo, ganado, caña de azúcar, tabaco, fruta, conservación
Bolivia	Sota, ganado y silvicultura
Brasil	Soya, caña de azúcar, aves de corral, ganado, fruta, silvicultura
Chile	Fruta, lácteos, vinos, semillas, aves de corral, conservación
Colombia	Palma aceitera, remolacha, caña de azúcar, soya, arroz, maíz, silvicultura
Ecuador	Plátano, caña de azúcar, palma aceitera, silvicultura
Paraguay	Soya, maíz, trigo, ganado
Perú	Frutas, verduras, caña de azúcar, palma aceitera
Uruguay	Soya, lácteos, trigo, arroz, ganado, silvicultura
México	Cadena de valor del maíz, caña de azúcar, fruta, flores, café, cebada, tequila
Costa Rica	Plátano, piña, palma aceitera
Guatemala	Caña de azúcar, palma aceitera, silvicultura
Nicaragua	Ganado, Arroz, palma aceitera, caña de azúcar, cítricos, turismo, silvicultura
Panamá	Plátano, café, arroz, palma aceitera
República Dominicana	Caña de azúcar, plátano, fruta, verdura
Guyana	Caña de azúcar, ganado, arroz, piña, silvicultura
Trinidad y Tobago	Caña de azúcar, cacao, fruta

Fuente: Borrás et. al., 2011: 10-11

A primera vista estos hallazgos parecerían ir en contra de la tesis de Bernstein acerca de la irrelevancia del sector agrícola para incentivar al proceso de acumulación del capital tanto a escala nacional como global. A fin de cuentas, una población en crecimiento y aglomerada en centros urbanos necesita constantes y asequibles fuentes de alimento. Siguiendo a Akram-Lodhi y Kay (2010b: 278) se podría proponer que aquellas naciones emergentes como China (una de las mayores demandantes de productos agroindustriales a nivel mundial) estarían reconfigurando una nueva transición agraria en naciones en proceso de especialización para la producción agrícola de exportación. El dilema encontrado por estos autores, sin embargo, es que:

Irónicamente, esto es consistente con la tesis de Bernstein [...] la agricultura dentro de China en sí misma es irrelevante para la

transición capitalista china porque no está ligada al mejoramiento de la producción y productividad de la economía rural [interna] como fuente de capitales, *lo cual implica que la cuestión agraria que existe en China es la diferenciación espacial y social de la cuestión agraria del trabajo* (Akram-Lodhi y Kay, 2010b: 278, Traducción y cursivas del Autor).

Estos debates no dejan de ser sugerentes. A pesar de que la fragmentación laboral es, en efecto, una problemática que afecta sobremanera a los campesinos desposeídos en la globalización (Rubio, 2009), esta ha sido más que un problema inequidades económicas un problema de articulación política de los sectores marginados. Además, y más allá de proponer hipótesis catastróficas sobre una supuesta muerte del campesinado en la globalización, Bernstein también señala la importancia de reconocer que, aunque no se han registrado luchas sistemáticas de carácter global contra estas tendencias globales, muchas disputas políticas contemporáneas pueden contener un “imaginario” fundamental sobre los cuales sea posible construir un nuevo “orden agrario” pos capitalista, en los cuales no sea una tarea laboral meramente “campesina” la producción de alimentos sanos para la población mundial (Bernstein, 2006: 455). En definitiva, su propuesta central es que el capital, tanto nacional como transnacional, no necesita reorganizar la producción agrícola en la actualidad para sostener o acelerar procesos de acumulación, un “corolario de que la transición agraria ya no es una precondition para el desarrollo del capitalismo” (Akram-Lodhi y Kay, 2010b: 26). Entonces, ¿cómo sería posible, en un momento histórico carente de las “guerras campesinas” del siglo XX, transformar las tendencias globales hacia la destrucción de la soberanía alimentaria y la consolidación del mercado internacional agroindustrial?

Tanto Murmis (2006: 468) como Akram-Lodhi y Kay (2010b: 267) han señalado que a pesar de que Bernstein propone una ‘cuestión agraria’ del siglo XXI centrada en la política y no en la acumulación, en tanto trata de visibilizar nuevos tipos de luchas y articulaciones populares en los sectores rurales del mundo que no se concentrarían en promover una específica estrategia agraria (i.e. luchas por la tierra), su planteamiento no llega a discutir la capacidad de agencia de los sujetos sociales rurales en vías de fragmentación. Esto es problemático en la medida en que la comparación analítica entre una cuestión agraria clásica centrada en las necesidades del capital con una cuestión agraria contemporánea centrada en las vicisitudes de la fragmentación laboral (sobre

todo en el “Sur” global), no deja clara cuáles son las posibilidades (o limitaciones) que aparecen en la creciente multiplicidad de posiciones económicas, sociales y políticas de los sectores populares en la actualidad. Murmis propone que:

Una aproximación orientada hacia la acción, semejante a aquella de la tradición analítica Marxista, basada en agentes sociales, puede ser más satisfactoria para analizar el pasado y realizar proyecciones sobre el futuro en base a la situación presente (Murmis, 2006: 468. Traducción del autor).

Como anotamos al inicio de esta sección, el “reto” teórico planteado por Bernstein es solo una de varias perspectivas analíticas que configuran el debate sobre la cuestión agraria en el siglo XXI. Incluso, siguiendo a Akram-Lodhi y Kay (2010b), se pueden diferenciar siete propuestas analíticas diferentes que han contribuido con discusiones teóricas y hallazgos empíricos para entender y debatir con más amplitud las dinámicas urbano-rurales actuales. Pero lo que se ha mantenido del debate clásico es:

El uso, como variable analítica crítica, del balance de fuerzas locales, nacionales e internacionales entre capital y trabajo, las cuales son coyuntural y contextualmente específicas [aunque todas están atravesadas] por la era de la globalización neoliberal (Akram-Lodhi y Kay, 2010b: 269).

La “cuestión agraria” en América Latina ha estado históricamente anclada al problema del acaparamiento de la tierra y al de la conflictividad social en los sectores rurales (Roseberry, 1993: 320). Para el caso de los países con importantes poblaciones indígenas, la “cuestión étnica” también ha sido un factor clave para entender las dinámicas sociales, económicas y políticas de los sectores rurales.

Carlos Mariátegui fue uno de los primeros autores en analizar ambas caras de la cuestión agraria en la región andina. En los “Siete ensayos de interpretación de la realidad Peruana” (1928) Mariátegui describía la génesis de la apropiación de la tierra y la particularidad “feudal” del modo productivo peruano en la división racial del trabajo y el territorio (entre una costa blanco-mestiza y una sierra desarticulada e indígena), concluyendo que

La solución del problema del indio [y, como consecuencia, el problema de la tierra] tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios [quienes para inicios del siglo XX] no son sino una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de decidir su rumbo histórico” (Mariátegui, 1928: 49).

Gracias a la influencia intelectual de Mariátegui y otros representantes del pensamiento latinoamericano “indigenista”, el problema de la tierra y del indígena empiezan a converger, tanto dentro de los estudios académicos como en dentro de los círculos políticos progresistas. Cristóbal Kay (2007: 42) observa la evolución de esta tendencia política e intelectual latinoamericana durante el siglo XX, ubicando su punto más vibrante en la década de los 60s y 70s, período en el que varios gobiernos de la región experimentaron con distintas estrategias de repartición de tierras y políticas económicas “sustitutivas” bajo el paraguas de la CEPAL. Sin embargo, a decir del autor

El legado de las reformas agrarias fue mixto. Aunque la promesa a los campesinos de acceso a la tierra solo se cumplió muy parcialmente, las reformas agrarias señalaron el comienzo del fin del latifundio y tuvieron el efecto de acelerar la transformación capitalista en el agro (Kay, 2007: 42).

Durante las décadas de los 80s y los 90s, con el advenimiento de las políticas de ajuste estructural como respuesta a la crisis de la deuda externa y del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, los Estados latinoamericanos dejaron de lado los intentos de reforma agraria “desde arriba”. Por el contrario, empezaron a enfocar su accionar político en la apertura comercial agro-exportadora (Rubio, 2009), la formalización del mercado de tierras (Jaramillo, 2000) y la implementación, de corte tecnócrata heredada del período reformista, de la llamada “revolución verde” (Bernal, 1996).

En este mismo período surge un nuevo actor colectivo en varios países de la región (sobre todo en aquellos con estructuras agrarias marcadamente inequitativas y dependientes) que se convierte paulatinamente en el protagonista de la lucha por la democracia y en uno de los focos de análisis más importantes del debate académico: los nuevos movimientos sociales. Para Cristóbal Kay, los episodios de movilización colectiva protagonizados por los movimientos campesinos e indígenas de diferentes

países de la región, entre los que resalta a los Zapatistas en México, la CONAIE en Ecuador, el MAS en Bolivia, y el MST en Brasil, responden justamente a la transición ocurrida a partir de la década de los 70s entre el Estado populista y desarrollista y el Estado tecnocrático y neoliberal (Kay, 2007: 40).

En el Ecuador, los debates que han tratado de comprender la “cuestión agraria” durante el siglo XX han discutido muchos, sino todos, los temas planteados con anterioridad: reformas agrarias parciales, intentos trunco de industrialización interna, fragmentación laboral de los campesinos, problemas de articulación política frente a procesos de diferenciación interna, etc. En paralelo con la directriz del debate académico internacional, la cuestión agraria ecuatoriana ha sido extensamente investigada desde diversas perspectivas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: desde los influyentes estudios de la CEPAL, el CIDA y las propuestas radicales de tipo “agrarista” en los 70s⁸, pasando por un importante “punto de inflexión” con el trabajo de Andrés Guerrero publicado en 1975, titulado "La Hacienda pre capitalista y la clase terrateniente en América Latina y su inserción en el Modo de producción pre-capitalista: El caso ecuatoriano”. Este último estudio subvierte los paradigmas tradicionales que habían estudiado esta problemática social en tanto revela el importante y complejo tejido de las relaciones de parentesco dentro de la familia huasipunguera-ampliada como formas o estrategias de supervivencia y reproducción social (Chiriboga, 1988a: 18).

Durante la década de los ochenta otra gran variedad de investigaciones se interesaron por las modificaciones sociales y tecnológicas en la sierra producto de la disolución del sistema de huasipungos y haciendas durante las décadas de los 60s y 70s y el paralelo boom petrolero (Ferrín, 1980; Llovet, 1980; Mauro, 1986) así como por analizar las variables que explicarían por qué los intentos de reforma agraria no dieron lugar a una estructura de tenencia de tierras más equitativa (Chiriboga, 1988b). En este mismo período, y dada la especificidad étnica de los grandes grupos poblacionales campesinos en el Ecuador, el estudio de Hugo Burgos con respecto a relaciones interétnicas, de tipo coloniales-internas, en el sistema de mercados de la ciudad Riobamba se convirtió en un punto de referencia central no solo para analizar la

⁸ Según el texto de Chiriboga (1988a) resaltan los textos de Saad (1975) y Galarza (1973) como buenos expositores de esta corriente.

problemática agraria ecuatoriana, sino para entender el componente social y racial sobre el que ésta se sostiene (Burgos, 1977).

Pero es a partir de 1990 cuando los estudios sobre el problema campesino y agrario apuntaron de forma más clara (y por la flamante presencia de un movimiento indígena de carácter nacional) hacia la comprensión de la política y modos organizativos indígenas en el Ecuador (Almeida et al., 1992; Amboya, 1994; Chiriboga, 1987), al tiempo que se empiezan a estudiar con mayor amplitud las transformaciones laborales de los sectores rurales ecuatorianos a partir de la disolución de la hacienda, el desarrollo de las relaciones capitalistas y los efectos del neoliberalismo. Ciertas aproximaciones teóricas a estos fenómenos sociales contemporáneos motivaron a que algunos investigadores se distancien de las definiciones clásicas del campesino y la relevancia histórica de la cuestión agraria y empiecen a teorizar sobre la posibilidad de una “nueva ruralidad” distanciada (sociológicamente) del problema irresuelto de la tierra (Giarracca, 2000, Pérez, Almeida y Grammont, 2008). Sin embargo parecería importante considerar la advertencia de Kay con respecto a considerar a la nueva ruralidad como un “nuevo paradigma” alrededor de la cuestión agraria, puesto que se correría el peligro de promocionar la pluriactividad económica de los campesinos en proceso de proletarización y descampesinización. Por el contrario, el autor afirma que

Dicha posición [resulta] paradójica en el sentido que para la mayoría de los campesinos su creciente participación en actividades no-agropecuarias obedece a su crisis de reproducción y tales actividades sólo les permiten la sobrevivencia y por tanto no es una política de desarrollo. Sólo una minoría de campesinos, aquellos con suficiente acceso a recursos productivos, pueden a través de dichas actividades no agropecuarias lograr mejorar sus niveles y calidad de vida (Martínez 2000). En cierto modo, la nueva ruralidad es el resultado del neoliberalismo y promover la pluriactividad sin cambiar el contexto es reproducir el neoliberalismo y con ello la explotación y el despojo campesino. (2007: 33)

En efecto, la “nueva ruralidad” más que un nuevo paradigma teórico para entender las problemáticas del campo en la actualidad puede ser comprendida como una expresión de la prolongada ausencia de un Estado verdaderamente capaz de enfrentarla cuestión agraria como problemática relacionada con la distribución de la tierra en el Ecuador. Para Fernando Guerrero y Pablo Ospina (2003), incluso las varias movilizaciones

campesinas e indígenas ocurridas durante la década de los 90s en Ecuador, que lograron una reforma constitucional en 1998, se enfrentaron con un Estado “en retirada” que daba las espaldas al histórico problema del acaparamiento de tierra. Esto explica su consecuente conclusión con respecto a la dificultad de evaluar si durante la década de los 90s el neoliberalismo introdujo cambios importantes en el espacio rural ecuatoriano, o más bien aceleró un proceso de descampesinización y feminización del campo, siendo éstas problemáticas sociales cronológicamente anteriores a las políticas de ajuste parcialmente aplicadas en nuestro país. La *nueva* ruralidad, entonces, puede ser comprendida como un legado histórico aún en disputa.

Así, al igual que en el resto del continente latinoamericano, llegamos a transcurrir una primera década del siglo XXI con una estructura agraria profundamente inequitativa. El estudio de la FAO mostrado con anterioridad (Borras et. al, 2011) demuestra que las tendencias de acaparamiento de tierras en Latinoamérica se han extendido considerablemente durante éste período, razón por la que en el Ecuador una serie de organizaciones de la sociedad civil han intentado incidir en el debate público sobre la necesidad de una verdadera e integral reforma agraria a nivel nacional.

Pero la incidencia en el debate público por parte de las organizaciones de la sociedad civil no parece ser suficiente para conseguir una nueva transición agraria beneficiosa para la economía campesina. Frente a la propuesta de “Ley de Tierras” elaborada por La Conferencia Plurinacional sobre Soberanía Alimentaria (COPISA), Pablo Ospina (2011), en un artículo de opinión, propone cinco tesis para entender y posicionarse políticamente frente a la coyuntura agraria contemporánea. Su primera tesis me parece la más interesante⁹, porque no solo recoge la experiencia histórica de los sectores sociales movilizados en épocas pasadas, sobre todo indígenas, en el Ecuador, sino que intenta conectar a la cuestión agraria contemporánea con los problemas derivados de la fragmentación laboral y espacial de los sectores campesinos:

⁹ Las cuatro propuestas restantes plantean [1] la necesidad de una ley de tierras que active el conflicto entre pequeños campesinos y grandes terratenientes y, como consecuencia, que agilite diferentes estrategias de redistribución de tierras (i.e estrategias de mercado), [2] la cuestionable posición del gobierno central sobre las posibilidades productivas de la pequeña economía campesina, [3] la imposibilidad de promover una ley efectiva por iniciativa ciudadana dada la composición de la Asamblea Nacional y [4] la posibilidad real de negociar temas clave de la ley de tierras vía referéndum nacional, en caso de lograr recolectar aproximadamente un millón de firmas con tal propósito (5% del padrón electoral).

Debe reconocerse que el principal problema de las organizaciones campesinas e indígenas que demandan la redistribución de tierras es que no existe en la actualidad una movilización social en el agro que la empuje. La “presión de las bases” falta. No tenemos ocupaciones de tierras de grandes empresas ni conflictos similares a lo que en los años 1960 se llamaron “asedio interno y externo” de las haciendas. La escandalosa desigualdad y pobreza en el agro lleva a la migración estacional y temporal a las ciudades, a la miseria, a la desnutrición y a la búsqueda de alternativas no agrícolas. Existe también un notable recrudecimiento de los conflictos intercomunales y un aumento de las presiones sobre los ecosistemas naturales, como bosques y páramos. Pero la desesperación en el campo no dirige sus ataques contra la gran propiedad agraria. (Ospina, 2011: artículo en línea)

Esta advertencia de Ospina es coherente con la lectura que otros autores han realizado acerca de la debilidad actual del Movimiento Indígena Ecuatoriano (Santillana y Herrera, 2009; Tuaza, 2011), y el ya histórico problema de la diversificación laboral campesina parecería ser un causante de su paulatina desarticulación (Tuaza, 2010; Sánchez Parga; 2001). Así mismo, queda abierta la interrogante sobre las posibilidades de una reforma agraria “desde arriba” potenciado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, según las directrices generales de la nueva Constitución de Montecristi de 2008. Pero las experiencias históricas hasta aquí revisadas podrían mostrar que frente a un sector campesino fragmentado, un Estado relativamente fuerte y un sector terrateniente bien posicionado en la floreciente agroindustria, sería muy complicado advertir el advenimiento de una verdadera reforma en el agro en la actualidad.

Así, esta tesis intentará hacer una lectura (de corte relacional) de las circunstancias actuales de la parroquia de Guangaje, una de los sectores campesinos e indígenas marginalmente favorecidos por las reformas de los 60s y 70s y con muy limitadas condiciones ambientales para la producción agropecuaria, pero con una historia de lucha admirable y en constante construcción. Vale aclarar que aunque la tendencia hacia la fragmentación laboral del campesino pobre es evidente si analizamos territorios amplios (como el occidente de los cantones de Pujilí, Saquisilí y Sigchos), el caso de Guangaje muestra también ciertas tendencias hacia la especialización laboral, producto de la ampliación y flexibilización de las redes laborales de la construcción durante los últimos cuarenta años. Esto nos obliga a hacer una puntualización en la tesis de Bernstein acerca de la fragmentación laboral de los sectores campesinos que no consiguieron transiciones agrarias apropiadas, puesto que dicha fragmentación estaría

siempre relacionada con las capacidades de la economía nacional para ofrecer fuentes de empleo e ingresos relativamente estables a las poblaciones rurales “no viables” para la producción agrícola. Sin embargo, podríamos también suponer que la profesionalización local en una actividad en particular generaría nuevas jerarquías internas más marcadas a través del tiempo, situación que tendrían una capacidad efectiva para “fragmentar” a los poblados locales.

Nos concentrarnos, pues, en la situación de comuneros (mayoritariamente hombres) que trabajan con relativa frecuencia en la industria de la construcción (en la fabricación de bloques, vivienda y obras públicas de infraestructura, especialmente en alcantarillado) y no en “cualquier” actividad extra-predial no agrícola, no solo por la importante presencia demográfica de estos trabajadores en la parroquia de Guangaje, sino también porque ésta actividad fue vista durante los 80s como una estrategia “acomodada” a las necesidades económicas y culturales de los comuneros indígenas que todavía sostienen, con mucha dificultad, pequeñas economías campesinas (Martínez, 1988; Mauro, 1986)¹⁰.

La pregunta general que se deriva del marco teórico de la cuestión agraria aquí descrita y que guió los esfuerzos investigativos en la parroquia de Guangaje como un caso de estudio particular:

- ¿Qué retos plantean los procesos de diferenciación y fragmentación laboral en oficios relacionados con la construcción, para la re-articulación política de las bases organizadas vinculadas al MICC?

Las preguntas específicas que tratarán de responder la interrogante central de la investigación son:

- ¿Cuáles fueron las particularidades del desarrollo de la cuestión agraria en la provincia de Cotopaxi durante el período desarrollista, el neoliberalismo y frente al regreso del Estado?
- ¿Cómo se han ido construyendo las redes laborales de la construcción en el tiempo y qué repercusiones ha tenido la diferenciación campesina a nivel parroquial, entre aquellos que migran mucho y aquellos que migran poco?

¹⁰ El trabajo de campo se realizó en el territorio de las comunidades asociadas a la UNOIRG, no así en los territorios asociados a la Circunscripción Territorial Indígena de Tigua. Aunque en Tigua también es notoria la vinculación de la población con la industria de la construcción, se podría especular, siguiendo algunos estudios sobre el sector (Ilaquiche, 2006; Colloredo-Mansfeld, 2009), que allí se desarrollaron otras estrategias de diversificación laboral y migratorias que vincularon a su población al sector artesanal (resaltan los pintores de Tigua) o como cargadores en los mercados Mayorista y San Roque de Quito

- Frente a estas problemáticas ¿cómo ha actuado el MICC y cuáles son las políticas públicas que ha promovido el gobierno de la revolución ciudadana en el sector?

Para observar y analizar las redes laborales de los trabajadores de la construcción es necesario precisar algunas aproximaciones teórico-metodológicas que se utilizaron durante el trabajo de campo. El enfoque de redes sostiene que una perspectiva relacional es indispensable para develar cómo se compone el “campo de poder” derivado de la diferenciación interna del campesinado. El siguiente acápite desarrolla esta discusión y muestra las fuentes y los instrumentos de recolección de información que se utilizaron para comprender las relaciones de poder, tanto a nivel local como provincial, que moldearían a la cuestión agraria en el Ecuador del siglo XXI.

Notas Teórico-Metodológicas:

La metodología propuesta para esta investigación se desarrolla en tres niveles de análisis: en primer lugar hemos desarrollado el debate teórico alrededor de las experiencias históricas de modernización y transformación agrícola en el siglo XX; en un segundo nivel analizaremos la transición agraria en la provincia de Cotopaxi durante las décadas de los 60s y 70s, las consecuencias (económicas y políticas) del neoliberalismo, la articulación “étnica” del Movimiento Indígena Ecuatoriano y las posibilidades que aparecen con la refundación y el retorno del Estado en la actualidad; un tercer nivel muestra la historia de profesionalización de los albañiles de Guangaje en un contexto agrícola limitado, desde una perspectiva relacional y centrada en los trabajadores temporales de la construcción; en el cuarto y último nivel se muestran las interacciones y enfrentamientos entre el Estado y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

El segundo nivel de análisis fue elaborado a partir de la revisión de una parte relevante de la extensa bibliografía académica que ha analizado, desde diversas perspectivas, el trasfondo histórico, social, económico y político de la cuestión agraria en Cotopaxi durante las últimas cuatro décadas, así como a partir de entrevistas y observaciones de campo en la parroquia de Guangaje que sitúen estas experiencias históricas a nivel local. Por su parte, el cuarto nivel de análisis fue construido en base a fuentes secundarias, notas de prensa y entrevistas que tratan de dar luces sobre un

proceso de transformación en marcha promovido por el Estado y por el mismo Movimiento Indígena y Campesino de Guangaje. Ahora bien, vale hacer algunas aclaraciones sobre el tercer nivel de análisis pues es allí donde se concentran los aportes de la presente investigación.

En el afán por desarrollar una investigación de carácter *relacional* sobre la problemática derivada de la fragmentación laboral de los sectores rurales del Ecuador en el siglo XXI, las lecturas históricas desarrolladas por Karl Polanyi (2001 [1944]) fueron de central importancia. En su célebre obra “La Gran Transformación”, Polanyi señalaba que durante el establecimiento de las economías europeas basadas en sistemas de mercado surge de una “falacia” en la interpretación histórica del hombre y la sociedad: para Adam Smith, por ejemplo, la naturaleza del hombre se explica por una aparente tendencia al intercambio y una lógica individualista y maximizadora de beneficios preestablecida (2001 [1944]; 90-92). Aunque también hubo otros pensadores europeos interesados en mostrar, contrario a la propuesta de Smith, un pasado “comunista” del hombre en sociedad, Polanyi insistía en que

El gran descubrimiento de la reciente investigación histórica y antropológica es que la economía humana está sumergida por regla general en las relaciones sociales de los hombres. El hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales en la posesión de bienes materiales, sino para salvaguardar su posición social, sus derechos sociales, sus activos sociales (Polanyi, 2001 [1944]: 94).

La tesis principal del texto de Polanyi gira alrededor de las particularidades de un “doble movimiento” decimonónico europeo, entre la expansión del mercado y el contra movimiento político necesario para proteger a la sociedad de ser mercantilizada por completo (McMichael, 2005). El concepto de *embeddeness* que Polanyi utilizó para explicar las relaciones sociales que se reproducían en los mercados modernos generó un amplio debate en las ciencias sociales. Dicho concepto, en conjunto con el enorme esfuerzo investigativo y reflexivo de Polanyi, pusieron un argumento de peso contra los fundamentos epistemológicos de la economía neoclásica (particularmente en lo relacionado con la acción racional del individuo ideal autónomo), a saber, que la actividad económica necesita de relaciones sociales en dos sentidos: para funcionar y para generar proceso de diferenciación.

Sin embargo Gemici (2008) ha señalado algunas tensiones implícitas en el concepto de “embeddedness” (embebidas, sumergidas, imbricadas) y la relación teórica que observa Polanyi entre sociedad y economía. Siguiendo esta advertencia, parecería que dicha tensión se origina en una doble conceptualización y utilización de dicho concepto por parte de Polanyi: por un lado el concepto argumenta a favor de un acercamiento sociológico hacia la actividad económica de mercado para observar las relaciones sociales sobre las cuales dicha actividad se sostiene; por otro lado, Polanyi discute las repercusiones que tiene la generalización de las relaciones mercantiles en el planeta, indicando que el mercado autorregulado propuesto por el liberalismo tendería a separar la esfera social de la económica en el proceso de mercantilización de la tierra, el trabajo y el dinero.

Tabla 2: Dos nociones sobre el concepto de “embeddedness” en el pensamiento de Polanyi

Siempre imbricado	Gradualmente imbricado
<p>Todas las economías están imbricadas en tanto que la vida económica es un proceso organizado y socialmente instituido.</p>	<p>El grado de imbricación cambia de un tipo de sociedad a otro, dependiendo de cómo la economía funciona. Si funciona como resultado de operaciones con fines no-mercantiles, está imbricada. Si funciona como resultado de operaciones con finalidades estrictamente mercantiles, se mueve hacia la desimbricación derivada de la mercantilización (commodification) del trabajo, la tierra y el dinero.</p>

Fuente: Gemici (2008: 9), Traducción del autor.

Para Gemici esto es problemático en la medida en que el concepto pierde la capacidad de sostener, por sí mismo, un paradigma teórico sólido para el análisis de la actividad económica en el capitalismo. Lo que rescata de la obra de Polanyi es, más bien, la potencialidad metodológica del concepto para una adecuada aproximación a los componentes sociales y políticos de la actividad económica en el capitalismo, contraria al individualismo metodológico característico de la economía neoclásica:

[El concepto *Embeddedness*] es útil para generar aproximaciones metodológicas a la vida económica. Todas las actividades humanas están estructuradas por factores sociales, y las actividades económicas no son una excepción a esta regla. Es en este sentido, como ha sido señalado por Beckert (2003, p. 796), que el concepto ‘muestra una conexión indisoluble del actor con su entorno social’ [...] es precisamente en esta manera que el concepto abre caminos para la investigación empírica [...] motivando a la sociología económica a encontrar procesos sociales donde los economistas neoclásicos ven simplemente comportamientos individualizados. (Gemici: 2008: 28, Traducción del Autor).

Dado que el objetivo central de la investigación es el de analizar las relaciones interpersonales específicas *imbricadas* en las actividades laborales del sector de la construcción, para poder explicar las consecuencias (micro) políticas de la diferenciación interna en la parroquia de Guangaje y los retos que aparecen para la rearticulación política de los migrantes de la construcción, es necesario precisar qué elementos de éstas redes de relacionamiento son de particular interés. Los aportes de Bourdieu (2000, 2001) alrededor del concepto de capital social y Mark Granoveter (1973; Pozas, 2004; Marrero, 2006) sobre las potencialidades de diferentes tipos de lazos interpersonales (fuertes y débiles) en la actividad económica, serán utilizados como indicadores pertinentes para responder dicha interrogante.

Por su parte, el concepto de capital social en Bourdieu no puede ser comprendido por fuera del amplio marco teórico que el autor desarrolla a lo largo de su obra, sobre todo en sus intentos por desarrollar una “economía general de las prácticas” que cuestione profundamente los fundamentos epistemológicos de la economía neoclásica. Sin embargo es importante intentar aislar las definiciones y particularidades de éste concepto para entender con mayor claridad el aporte específico del autor al análisis de las redes sociales: en un primer momento, Bourdieu define al concepto de “capital” de manera general como “trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o incorporada” (Bourdieu, 2000: 131). Este “trabajo acumulado”, que es un acto tanto individual como colectivo, puede tomar tres formas fundamentales, diferenciadas entre sí por sus funciones dentro de un “campo de poder” determinado: el capital económico, el capital cultural y el capital social. El acervo de los tres tipos de capital que un individuo o un colectivo logren acumular determinará su posición diferenciada en el campo de poder.

Ahora bien, el capital social estaría directamente relacionado con la extensión de la red de conexiones que puedan ser *movilizadas* por un actor social, así como por el volumen de otros tipos de capital (económico, simbólico, social o cultural) que tengan las personas dentro de esa misma red. En palabras de Bourdieu:

El capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo [...] se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo (Bourdieu, 2000: 148).

Cada una de las tres formas del capital funciona de manera particular, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de convertirlos en otros tipos de capitales y su capacidad de generar procesos de diferenciación social. De entre los diferentes tipos de capital teorizados por Bourdieu, Luciano Martínez resalta al capital social en tanto esta categoría de análisis nos ayuda a entender el esfuerzo teórico de Bourdieu por desarrollar una “sociología relacional y contestataria” en términos epistemológicos¹¹. Así, el concepto capital social no solo tiene la capacidad de mostrar la importancia de las redes de relacionamiento interpersonales que posibilitan una acción determinada, sino que, al ser parte del marco teórico general de Bourdieu, nos obliga a prestar atención a [1] las diversas estrategias de reproducción y mantenimiento de éste capital por parte de los actores sociales, quienes deben proporcionar un esfuerzo específico (que resulta en trabajo acumulado) por sostener diversas tipos redes (de parentesco amistad, económicas, o de cualquier tipo), sean estas heredadas o forjadas por el mismo actor, y [2] las funciones de diferenciación social que cumple en un determinado campo social, según el acervo acumulado por el mismo actor de los tres tipos de capital fundamentales (Martínez, 2007, 91-92).

¹¹ Aunque dentro de la tradición sociología el concepto de capital de Bourdieu ha sido ampliamente utilizado, también existe otro grupo de académicos (mayoritariamente anglosajones y franceses [Heredia y Roig, 2008]) que, con definiciones y perspectivas distintas, se han visto interesados por las teorías del capital social y la capacidad explicativa y analítica de la teoría de redes. Adriana Marrero identifica al menos cuatro perspectivas de análisis de la teoría del capital social comúnmente utilizadas en América Latina (relacionadas con los trabajos de Robert Putnam, Francis Fukuyama, James Coleman, entre otros), tanto en el análisis sociológico como en varios estudios preliminares que se realizan para la implementación de programas de desarrollo y de asistencia social, sea desde organizaciones no gubernamentales o desde instituciones multilaterales como el BID o el Banco Mundial (Marrero, 2006: 73).

Como vemos, el marco teórico propuesto por Bourdieu es demasiado amplio para concretar una estrategia metodológica relacional, puesto que su propuesta toma en cuenta otras variables no-relacionales en el análisis de la diferenciación social, como el capital simbólico o el económico. Por ende es importante atender a las advertencias de Mark Granovetter sobre la existencia de tipos de lazos específicos que delimitarían los contornos de una red de relacionamiento. En una investigación titulada “Conseguir un trabajo: un estudio de contactos y carreras”, en la cual se examina las posibilidades de acceso al mercado laboral de jóvenes estadounidenses, Granovetter (1995) encuentra una particularidad contra-intuitiva propia de las redes laborales, en la correspondencia comúnmente observada entre relaciones de parentesco, amistad o vecindad y las ventajas sociales que de ellas se derivan. Al contrario de esta común malinterpretación de las potencialidades de las redes sociales marcadamente locales/familiares, que al mismo tiempo desestiman las potencialidades de los llamados “lazos débiles”, éste estudio concluye que “fuera del ámbito de la familia y los círculos de amistad, [los grupos de relacionamiento] pueden ofrecer tanta o más ayuda que los más allegados para insertarse en un trabajo, en la medida en que pueden ser personas con acceso a redes diferentes, más privilegiadas y al mismo tiempo pueden establecer vínculos menos problemáticos y comprometidos” (Marrero, 2006: 78). De acuerdo a Pozas (2004: 30) sería también importante diferenciar dos tipos de relaciones sociales fundamentales que coordinarían la actividad económica según la propuesta de Granovetter: las relaciones (fuertes o débiles) de tipo horizontal, igualitarias, reguladas por normas de confianza y cooperación y las relaciones (fuertes o débiles) verticales, asimétricas, donde prima el poder y el acatamiento. La propuesta de Granovetter también advierte que incluso los límites de la red son espacios dinámicos difíciles de determinar con total claridad, por lo que es necesario observar cómo se han construido las redes a lo largo del tiempo para desarrollar un análisis económico más allá de los fundamentos de la economía neoclásica (Pozas, 2004: 16).

Entonces, una estrategia metodológica derivada de la obra de Polanyi nos llevaría a buscar y analizar dos cuestiones clave de la redes de la construcción, en nuestro afán por develar las estructuras de poder subyacentes a la fragmentación laboral del campesinado indígena en Guangaje: primero será importante estimar la forma específica en la que las redes laborales de la construcción se han ido *imbricando* en el

entorno social de la parroquia: ¿qué factores determinan la mayor o menor vinculación del migrante temporal en éstas redes? ¿Las redes están conformadas mayoritariamente por lazos fuertes o débiles? ¿Cómo se han ido construyendo dichas redes en el tiempo? ¿Cuáles son las jerarquías internas sobre las que se sostiene?; en segundo lugar habrá que determinar cómo han influenciado éstas redes en el proceso de diferenciación interna y en los conflictos que en la actualidad aquejan a la parroquia en cuestión.

Para responder el primer conjunto de preguntas se realizó una encuesta mostrada en el anexo 1, la cual está basada en otras encuestas realizadas a cincuenta migrantes rurales de la construcción en la ciudad de Quito durante la década de los 80s (Mauro, 1986). Debido a diversos problemas atravesados durante el trabajo de campo, sobre todo derivados del limitado tiempo disponible para desarrollar lazos de confianza entre el investigador y los actores locales, los datos de las encuestas no serán utilizadas como fuentes demostrativas de regularidades estadísticamente significativas de las condiciones de los trabajadores de la construcción de la parroquia, sino como datos que iluminen parcialmente el complejo proceso de profesionalización y de condiciones laborales de un sector bastante representativo de la población de Guangaje.

Algunas preguntas fueron añadidas acorde con lo que hemos resaltado con la metodología de redes. Adicionalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres maestros mayores y a varios albañiles y bloqueros residentes en Guangaje, para presentar gráficamente las redes de la construcción (tanto de la vivienda como en la fabricación de bloques) y la manera en que se han ido construyendo en el tiempo¹². Para la segunda interrogante presentamos los pormenores de un conflicto interparroquial que convulsionó a Guangaje durante los meses en los que se realizó el trabajo de campo, alrededor del robo de ganado en una parroquia vecina y la confiscación de aproximadamente noventa motocicletas indocumentadas que circularon durante casi diez años al interior de la parroquia. Aunque reconozco que esta eventualidad coyuntural limitó en gran medida la labor de recolección de información, espero que el análisis del suceso también de luces sobre los procesos de diferenciación internos y la forma en que la “fragmentación” laboral del sector ha moldeado las relaciones de poder en Guangaje.

¹² Para la reconstrucción de las redes laborales de los bloqueros en la ciudad de Latacunga, sobre todo aquellos asentados en los barrios de San Felipe, Cuatro Esquinas y La Calera, también se usaron algunos testimonios de pobladores de Angamarca, otra parroquia rural indígena del occidente de Cotopaxi.

CAPÍTULO II: REFORMISMO, NEOLIBERALISMO Y ORGANIZACIÓN INDÍGENA EN COTOPAXI

El presente capítulo tiene la intención de desarrollar un esbozo acerca de la historia reciente de algunas comunidades ubicadas en el occidente de altura de la provincia de Cotopaxi. En un primer momento se muestra los aspectos particulares de desarrollo agrario de la provincia de Cotopaxi en diferentes momentos de modernización de las relaciones económicas y sociales, tanto locales como nacionales. Posteriormente se revisa el protagonismo histórico del campesinado indígena de la provincia, sobre todo durante la década de los 60s y 70s y durante la etapa neoliberal, momento de consolidación del Movimiento Indígena Ecuatoriano. El capítulo termina con una revisión general alrededor de diferentes lecturas que se han ensayado sobre la situación actual del movimiento indígena y los conflictos frente al gobierno de la Revolución Ciudadana, prestando atención a las explicaciones disponibles sobre la aparente pasividad coyuntural de un grupo poblacional históricamente activo en la vida política nacional.

Aspectos particulares de la cuestión agraria en el Ecuador: el caso de la provincia de Cotopaxi

La demarcación territorial de la provincia de Cotopaxi como la conocemos en la actualidad data de 1790, momento en el que se formalizaron los corregimientos de Ambato y Tacunga en respuesta a las reformas borbónicas que reformaron la administración de los estados coloniales (Ramón, 2005: 161). Durante el siglo XVIII, por la relativamente baja centralidad política y económica del corregimiento de Tacunga dentro de los dominios administrativos de la Audiencia de Quito y por un sistema hacendatario-obrajero de propietarios ausentes que vivían en Quito y arrendaba sus propiedades, nunca se llegó a solidificar una autoridad administrativa única:

[El aparato administrativo del territorio de la Tacunga] no tenía cabildo, como Riobamba por ejemplo, es decir, no tuvo durante casi todo el siglo XVIII una elite unificada que creara una “identidad local”, dejando ese aspecto a lo que podían hacer las haciendas, los

pequeños sistemas de dominación local y los señoríos étnicos (Ramón, 2005: 165).

En términos económico-productivos el Corregimiento de Tacunga se sostenía en una división territorial del trabajo en textileras, labores agropecuarias (con énfasis en los cultivos de cereales y producción de leche y sus derivados) y ciertas actividades artesanales que vinculaba al sistema hacendatario-obrajero con los distintos asentamientos indígenas y pisos ecológicos del sector (Ramón, 2005: 166). Durante la segunda mitad del siglo XVIII la organización económica del Corregimiento cambió profundamente por diversas causas sociopolíticas y ambientales¹³, lo cual generó el incremento de los procesos de migración de la población indígena hacia la sierra norte (registrados por el Corregimiento de Otavalo como población “forastera”), una marcada concentración de la tierra en manos de órdenes religiosas y hacendados pudientes, e incluso la transformación laboral entre algunos indígenas campesinos de Tanicuchí, Saquisilí y Cusubamba, quienes fueron obligados a trabajar en la Real Fábrica de Pólvora de Latacunga, fundada por el Estado colonial (Ramón, 2005: 167-168)

A partir de la revolución liberal la provincia de Cotopaxi fue conformada en su división político-territorial actual:

En 1808 se creó el cabildo de Latacunga que aumentó el poder de 105 pequeños sistemas de dominación locales. Para 1824, Latacunga era un cantón de Pichincha, con la nueva ley de División Territorial de 1850 junto con Ambato conformaron la provincia de León hasta la revolución liberal, en la que finalmente fue constituida como provincia de Cotopaxi. (Ramón, 2005: 166)

La revolución liberal promovió el primer intento significativo de resolución del problema de la tierra entre comunidades indígenas y Estado. La reforma agraria fue promovida en respuesta a las fuertes luchas de los campesinos desposeídos de la costa y la sierra (indígenas y montoneros), aunque las transformaciones de la estructura agraria nacional fueron limitadas: en un primero momento la “nacionalización de los bienes de manos muertas” promovida por el gobierno liberal afectó únicamente a las propiedades

¹³ Galo Ramón (2005: 166-167) argumenta que el decrecimiento de la extracción de plata en Potosí fue el factor externo “más importante y decisivo” para explicar la crisis de textiles registrada en la Tacunga desde inicios del siglo XVIII. Como factores internos señala las erupciones del volcán Cotopaxi (siete registradas durante el siglo XVIII), una serie de terremotos y los impactos de las reformas tributarias borbónicas en los territorios de la Audiencia de Quito.

de la Iglesia que pasaron a manos de la Beneficencia Pública (Núñez, 2011: 24); además, la provincia de Cotopaxi se vio articulada al abastecimiento de la ciudad de Quito, por lo que las demandas por reconocimiento de tierras comunales y reconocimiento político de los campesinos tuvo mayores limitaciones (Coronel, 2011: 300-302). Galo Ramón (2005: 178) también ha señalado que los primeros intentos de modernización estatal de las relaciones productivas en Cotopaxi comenzaron con la llegada del tren a la ciudad de Latacunga, aunque de manera muy limitada. El tren motivó la producción de leche en el norte de la región (donde se ubicaban las grandes haciendas de la familia Lasso) durante las primeras décadas del siglo XX, posibilitando un importante proceso de acumulación para algunos hacendados locales.

Pese al estímulo comercial hubo una renuencia considerable por parte de los “hacendados ausentes” de Cotopaxi (los cuales administraban sus propiedades a distancia, en forma de arriendos a terceros) a modernizar las relaciones laborales que se mantenían con los campesinos locales: solo el 4,3% de huasipungos (que representaban el 6,6% de la tierra pertenecientes a los hacendados) fueron entregados a los campesinos cotopaxenses entre 1959 y 1964 por el Ministerio de Previsión Social, porcentaje relativamente bajo si lo comparamos con el porcentaje de huasipungos entregados a manos de campesinos en la provincia de Pichincha (26.9%, lo que representa el 27,3% de la tierra) o Carchi (92.1% de huasipungos, 41.4% de tierras) en el mismo período (Barsky, 1984: 74).

Durante las primeras décadas del siglo XX, momento en el que los distintos intentos de modernización fueron promovidos por parte del Estado liberal y de un sector “emprendedor” de la clase terrateniente, se conforma la organización y lucha campesina en un escenario político favorable para ello. Alberto Tuaza (2011: 122-125) muestra cómo las leyes de Organización y de Régimen de Comunas (1937) y el código de Trabajo (1938), así como un conjunto de “aliados fuertes” (los Partidos Socialista y Comunista) “posibilitaron la formación de la organización [campesina], tanto a nivel de base (sindicatos, cooperativas agrícolas) como en el ámbito nacional a través de la creación [en 1944] de la Federación Ecuatoriana de Indios” (Tuaza, 2011: 123).

Valeria Coronel (2009) argumenta que durante las primeras décadas del siglo XX el accionar de los partidos de izquierda y del liberalismo social, por medio de la creación del Ministerio de Previsión Social, Trabajo, Agricultura e Industrias, pusieron

límites al Estado oligárquico y dieron paso a la construcción de una democracia corporativa. Así, este nuevo rol político de sectores progresistas y de las clases trabajadoras en el Ecuador provocó transformaciones importantes en la formación política del Estado:

[...] sirvió para una evolución estatal capaz de introducir políticas de redistribución y dar signos de representación política independientes del poder gamonal que fueron eficientes para activar la ciudadanía y traducir el conflicto. Aun cuando la expansión del sufragio fue postergada hasta finales del siglo XX, las políticas para la conformación de una ciudadanía corporativa definieron mecanismos de participación política y formas de movilización social post-oligárquicos. A través de estos mecanismos se configuraron formas de establecer demandas, se definió el perfil de sujetos políticos y se definió un campo de acción estatal (Coronel, 2009: 329).

Con la caída del gobierno de Arroyo del Río en Mayo de 1944, la “hegemonía liberal” implantada desde 1895 entra en crisis y se dio paso a la conformación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) con la ayuda del Partido Comunista Ecuatoriano (Becker, 2008: 77). A partir de su fundación la FEI se valió de huelgas y manifestaciones “pacíficas” (las cuales fueron reprimidas, sobre todo a nivel de dirigencias indígenas) para convertirse, con serias dificultades, en uno de los actores claves del posterior desarrollo de la “cuestión agraria” a nivel nacional (Tuaza, 2011: 132). En Cotopaxi estos procesos organizativos y de articulación política fueron más intensos y violentos en las haciendas ubicadas en la cordillera occidental, donde ciertas comunidades indígenas tomaron la forma legal de sindicatos agrarias para conseguir acceso a recursos productivos para el trabajo campesino (tierra y agua) (Coronel, 2011: 384-385).

Pero el momento histórico más importante para la definición y transformación de la estructura agraria en el Ecuador se da en una tríada de actores políticos y sociales durante las décadas de los 60s y 70s, ya no en el marco de las reformas estatales de las entreguerras sino en el contexto del programa de modernización articulado por los gobiernos militares y los programas de intervención norteamericanos en la región (Alianza para el Progreso): [1] El Estado como agente modernizador de la economía nacional, [2] los terratenientes como agentes influyentes en el debate público y los límites políticos de la legislación reformista y de colonización y [3] los emergentes movimientos campesino-indígenas asociados a los partidos de izquierda.

En un primer momento, como lo señala Zevallos (1990: 25-27), el Estado agilitó el proceso de la disolución de relaciones laborales pre capitalistas al interior del sistema de haciendas, proceso que tuvo su génesis en la dialéctica entre modernización “desde arriba” y contención social. Las nuevas leyes promovidas desde el Estado durante los 60s (con la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización y la creación del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización- IERAC- por parte de la Junta Militar en 1964) tuvieron el objetivo de generalizar las relaciones asalariadas entre campesinos y terratenientes (eliminando paulatinamente el huasipungo con la titulación de tierras ocupadas por indígenas en la sierra y el precarismo laboral en las plantaciones arroceras en la costa). Su accionar, sin embargo, produjo leves resultados sobre la tenencia de la tierra que se mantiene concentrada en pocas manos hasta la década de los 90s, momento en el que se difunde una nueva lógica de modernización (de corte neoliberal) y desaparece de los debates estatales tanto la intención de promover proceso de reforma agraria como la posibilidad de repartir tierras colonizadas (Zevallos, 1990: 29-30).

Efectivamente, a fines de los 70s, con el ascenso del gobierno nacionalista de Guillermo Rodríguez Lara, se da un nuevo impulso a los intentos estatales de modernización del agro y la colonización amazónica y noroccidental a nivel nacional. Este impulso tuvo limitaciones muy marcadas, a su vez, por el desigual reparto de los beneficios del boom petrolero en el Ecuador durante este período (Gondard y Mazurek, 2001: 22-23, Zevallos, 1990: 33-40). Pero, ¿Qué factores sociales determinaron la profundidad de las reformas en el agro durante las décadas de los 60s y 70s?

Resulta interesante observar que en la provincia de Cotopaxi las adjudicaciones por concepto de Reforma Agraria fueron mayores en el occidente, tanto por la presión de las comunidades indígenas vinculadas a partidos de izquierda (especialmente en las parroquias de Guangaje y Zumbahua entre 1964 y 1972) como por la colonización del cantón La Maná, que fue parroquia del cantón Pujilí hasta 1981 (Ibarra y Ospina, 1994: 53). Sin embargo, y a diferencia de otras provincias, los resultados de las décadas reformistas fueron marginales: en el período 1964-1990 solo el 20% de la superficie agropecuaria de la provincia fue intervenida por reforma agraria (aproximadamente 66.480 has), siendo el cantón Pujilí donde hubo mayores intervenciones (cerca del 19% de la superficie cantonal) (Ibarra y Ospina, 1994: 51). Ibarra y Ospina señalan que la reforma agraria estuvo “a tono con el grado de conflicto rural que no tuvo las

dimensiones de otras provincias como Chimborazo, donde la intervención del IERAC abarcó más del 40% de la superficie agropecuaria” (1994:53).

Como vemos, los 30 años de reforma agraria en el Ecuador no mostraron las tendencias “clásicas” de transición agraria bajo los parámetros delimitados por Bernstein (2011: 450-451), además de que incluyeron el accionar político ambiguo de once gobiernos (militares en un primero momento, democráticos a partir de la década de los 80s, como se ve en la Tabla 3). En términos generales, desde 1964 hasta 1994, aproximadamente 902.600 hectáreas, el 3,4% de la superficie nacional, fue intervenida por concepto de reforma agraria, mientras que las políticas que incentivaron el proceso de colonización afectaron al 23% del territorio nacional (Gondard y Mazurek, 2001: 22, Herrera, 2007: 28). Además, y a diferencia de lo ocurrido en los casos “exitosos” del sudeste asiático (Kay, 2002; North, 1997), el Estado no fue un actor político autónomo que decidió el camino de la cuestión agraria en el Ecuador durante la segunda mitad del siglo XX: los grandes terratenientes, agrupados en la Cámara de la Agricultura, promovieron una amplia campaña de oposición a partir de la legislación reformista de 1973 en lo relacionado a los criterios para considerar una tierra como expropiable según su utilización productiva (Zevallos, 1990: 32).

Tabla 3: Cronología de gobiernos e intentos de reforma agraria, 1964-1996

Junta Militar	1963-1966	Primera ley de reforma agraria y colonización, IERAC
Clemente Yerovi	Marzo a Noviembre de 1966	
Otto Arosemena Gómez	1966-1968	
José María Velasco Ibarra	1968-1972	Ley de abolición del precarismo (1970)
Gral. Guillermo Rodríguez Lara	1972-1976	Segunda ley de reforma agraria y colonización
Consejo Supremo de Gobierno	1976-1979	Tercera ley de reforma agraria y colonización
Jaime Roldós Aguilera	1979-1981	
Oswaldo Hurtado Larrea	1981-1984	
León Febres Cordero	1984-1988	
Rodrigo Borja Cevallos	1988-1992	
Sixto Durán Ballén	1992-1996	Ley de Desarrollo Agrario, 1994, desaparece el IERAC y aparece el Instituto Nacional de Desarrollo Agraria (INDA)

Fuente: Gondard y Mazurek, 2001: 16

Todo muestra que en éste momento histórico la correlación de fuerzas a nivel local fue desfavorable para que los campesinos indígenas consigan victorias importantes. Además hay que señalar que los conflictos de tierra en Cotopaxi durante y después de las décadas reformistas se focalizaron en zonas con pocas aptitudes agrícolas (tierras frágiles de páramo, con laderas pronunciadas, sin sistemas de riego), de poco interés económico para el hacendado (Ibarra y Ospina, 1994: 157).

Así, los terratenientes lograron expulsar exitosamente a los campesinos levantados de la sierra hacia las tierras de altura menos productivas y más erosionadas. Esto también favorecía al paralelo proceso de modernización terrateniente en los valles interandinos con riego y buena calidad de suelos (en agroindustrias lecheras) en tanto la agitación social del campesinado fue contenida con la entrega de tierras marginales. La “modernización” reformista, por tanto, sucede a expensas del campesino sin modificar

sustancialmente las desiguales estructuras de tenencia de tierra (Ibarra y Ospina, 1994: 72-73). Como bien se ha señalado:

En ausencia de un movimiento indígena campesino fuertemente consolidado y en ausencia de respaldo y planificación estatal necesaria, el resultado fue que el acceso a la tierra se desfiguró en las correlaciones de fuerzas locales, casi siempre a favor de los hacendados que tenían el control y propiedad sobre la tierra y a favor de o en complicidad con los poderes locales tradicionales que “mantenían” el control sobre la ley y la fuerza (Herrera, 2007: 27)

Sin embargo, el caso de la lucha de las poblaciones indígenas de la cordillera occidental de la provincia de Cotopaxi (comprendidas territorialmente en los actuales cantones de Pujilí, Saquisilí y Sigchos) muestra ciertas particularidades que quedan por fuera de la narrativa del gran proceso de reestructuración agraria a nivel nacional durante las décadas reformistas.

Como veremos a continuación, no fue la clase terrateniente la que limitó el acceso a la tierra a los campesinos en estos sectores de la provincia de Cotopaxi, sino una institución educativa superior estatal, con domicilio en Quito. La Universidad Central del Ecuador heredó y arrendó a terceros extensas haciendas cotopaxenses a inicios del siglo XX, que se extendían precisamente en la cordillera occidental de la provincia. Esta institución, además, demostró una renuencia particularmente prolongada por entregar tierras a los campesinos indígenas y por apoyar los intentos del Estado central por promover una reforma agraria efectiva. Pero fue la radicalización de la lucha campesina y una determinada “red de alianzas” (formales e informales) la que consigue victorias importantes en la zona. Durante la última década del siglo XX, con la retirada del Estado y la presión demográfica en los páramos, se complejiza la situación de sectores relativamente organizados que enfrentan una de las peores consecuencias de la crisis financiera nacional.

La lucha campesina por las tierras altas de Cotopaxi.

Un conjunto determinado de actores disputaron la posesión de la tierra y los alcances de las reformas agrarias durante las décadas reformistas, motivadas a su vez por los

intentos de modernización industrial del Estado por la vía de la sustitución de importaciones. Sin embargo, cuando se revisan las experiencias de lucha a nivel local, es posible observar de manera más minuciosa y específica la problemática de las pequeñas economías campesinas. En Cotopaxi, el caso de las comunidades indígenas que ocupan los territorios occidentales, comprendidos en la actualidad en los cantones de Pujilí, Saquisilí y Sigchos, presentan un panorama alarmante sobre las consecuencias de la irresuelta cuestión agraria en el Ecuador. Aunque los páramos de esta región parecen haber sido poblada y articulada en una lógica de control y complementariedad de diferentes pisos ecológicos antes de la conquista (Ramón, 2005), ya para el siglo XX el sistema hacendatario de la provincia controlaba los territorios y las poblaciones comprendidos en la extensa cordillera occidental.

Alejandro Gallo Almeida fue el último hacendado que controló los territorios comprendidos en estas zonas. Tras su muerte, en 1930, la Universidad Central del Ecuador recibe estas haciendas (y las poblaciones que en ellas vivían) donadas por el “filántropo” terrateniente. Desde este momento una serie de arrendatarios controlaron económica y políticamente los páramos occidentales durante la primera mitad del siglo XX, lo que a su vez significó un cuantioso flujo de recursos monetarios a la Universidad Central. En la década de los 60s los conflictos locales motivados por las condiciones laborales y la concentración de la tierra en manos de hacendados y arrendatarios se multiplicaron y radicalizaron, al punto en que una comunidad de hacienda sumamente organizada, conocida hasta la actualidad como Salamalag Chico (ubicada en la parroquia Guangaje), lideró un proceso de “reforma agraria desde abajo” que sacudió las estructuras del poder local en toda la provincia. La tabla 4 presenta de manera cronológica el desarrollo de los conflictos descritos hasta aquí de manera muy general, a partir de la información ofrecida por el trabajo de Olaf Kaltmeier (2007) sobre las haciendas de la “Universidad terrateniente”.

Tabla 4: Las comunidades de altura de Cotopaxi y su lucha por la tierra.

AÑO	Régimen de haciendas
1784 - fines del XIX	Grandes extensiones de tierra en la cordillera occidental de la provincia de Cotopaxi en manos del Marqués de Miraflores y sus herederos.
1886-1904	Familia Gallo Almeida compran estas haciendas y las heredan a familiares las tierras altas de Saquisilí.
1929	Alejandro Gallo Almeida, “gamonal” con extenso control territorial en Cotopaxi, hereda las haciendas: Salamalag Grande, Yanaurco, Chaluá, Salamalag Chico o Guangaje La Provincia
1930-1935	Muere Alejandro Gallo Almeida, se conforma la “Junta Gallo Almeida” para administrar sus bienes. Federico Páez nacionaliza tierras y la Universidad Central se encarga de su administración. En 1930 y 1933 se registran varios conflictos por tierras en Saquisilí, se consolida red de contactos entre comunas, sectores urbanos y abogados socialistas y comunistas que funciona hasta 70s
1944	Asamblea Nacional ratifica decisión de Páez.
1940-1950	Escuela de Agronomía de Univ. Central subsiste con fondos provenientes de los arrendatarios de las haciendas en Cotopaxi.
1950-1960	Los arrendatarios ejercen poder político sobre las haciendas de las autoridades ausentes de la Univ. Central. Andreas Rührig, supuesto miembro de la SS en Rumania, administra las haciendas de Salamalag Chico y Guangaje. Campesinos indígenas de hacienda Guangaje y Salamalag Chico toman las haciendas de la Univ. Central.
1959-1961	Explotan conflictos campesinos en Guangaje y La Provincia, Univ. Central decide aumentar control local, limita poder de arrendatarios y otorga ciertos derechos sobre tierras a campesinos. Se consolida una red de resistencia campesina entre comunas de Zumbahua, Tigua y haciendas de Univ. Central (Maca Grande, Salamalag Chico o Guangaje, La Provincia o Isinliví, Yanaurco, Salamalag Grande y Chillapata Calera o hacienda Chalúa). Consolidación de sindicatos de trabajadores de la FEI.
1964	Informe de rector de Univ. Central indica que solo la hacienda Yanaurco estaría arrendada.
Fines de años 60s	Pequeño grupo del PCMLE que trabajaba con dirigentes de la FEI en Guangaje es expulsado del partido.
1970	Miembros de la FEUE presionan por la entrega de las tierras y parcelación de haciendas. La Comisión de Hacienda del H. Consejo Universitario propone entrega de haciendas, resolución que se posterga hasta fines de los 80s (con excepción del Salamalag Grande).

El caso de Guangaje:

AÑO	Caso hacienda Guangaje
1954	Hermanos Dueñas Jaramillo arrendatarios de Guangaje y La Provincia.

1956	Problemas relacionados con derechos de uso de tierra y pastoreo
1957	Hermanos Dueñas terminan el contrato con U. Central, ingresa Andreas Ruhrig como nuevo arrendatario, se intensifican conflictos de tierra y laborales.
1959-1960	Arrendatario denuncia que huasipungos duplicaron superficie.
1960	Campesinos de Salamalag Chico se toman la hacienda (ganadera), caso poco común en Cotopaxi. La noticia se transmite en ferias y dirigentes locales que podían movilizarse por territorio. La experiencia no fue parte de las políticas promovidas por la FEI sino por un grupo de maoístas de la comisión campesina del PCE
1966	IERAC y Ministerio de Previsión Social presionan a Univ. Central a entregar tierras, se recomienda entrega de tierras para evitar los intentos de “reforma agraria desde abajo” como en caso Guangaje, de manera similar a experiencia de entrega y venta de huasipungos a campesinos de Salamalag Grande (excluyendo yanaperos y arrimados). La Univ. Central reclama autonomía y capacidad de decidir futuro de tierras por medio de subastas públicas.
Principios de los 80s	Campesinos legalizan títulos de propiedad luego de la segunda reforma agraria con ayuda de la FEI y IERAC

Fuente: Elaboración propia con información de Kaltmeier, 2007: pp. 77-94

Los actores que disputaron la repartición de tierras en las zonas de altura de Cotopaxi, durante el proceso de modernización agraria de las décadas de los 60s y 70s, pueden ser agrupados en tres grupos: [1] El Estado con soporte del IERAC, [2] la Universidad Central y un grupo de arrendatarios de diversa procedencia y [3] una serie organizaciones sindicales de campesinos indígenas afiliados a la FEI, al PCE y el PCMLE (entre los cuales resaltan las luchas radicales “desde abajo” de los comuneros de Salamalag Chico). Kaltmeier argumenta que a pesar de la presión del IERAC para que se entreguen las tierras de la Universidad Central a los huasipungueros, para así avanzar en la modernización de las relaciones laborales en los sectores rurales de la provincia, la “universidad terrateniente” mostró una fuerte resistencia por deshacerse de sus activos fijos por una vía poco rentable para la institución. La actitud que mantuvo la institución educativa muestra cuán invisibles fueron los campesinos indígenas, y cuán “soberano” podía llegar a ser el poder de los arrendatarios (Kaltmeier, 2007: 78).

Como vemos en la tabla 4, la muerte del terrateniente Gallo Almeida en 1930 motivó una serie de conflictos campesinos frente al vacío de poder en la zona (Kaltmeier, 2007: 79-80; 2008: 44-45). Entre 1930 y 1933 se registraron varios

conflictos por tierras en Saquisilí, y se consolidó una red de contactos entre comunas, sectores urbanos y abogados socialistas y comunistas que se iba ampliando paulatinamente durante las cuatro décadas posteriores¹⁴. Entre 1959 y 1970 se multiplicaron los conflictos campesinos en las haciendas de Guangaje y La Provincia, mientras que la Universidad Central decidió aumentar el control local limitando el poder de arrendatarios y otorgando ciertos derechos sobre tierras comunales a los campesinos. Kaltmeier también menciona que durante estas décadas se consolidó una red de resistencia campesina entre comunas de Zumbahua, Tigua y otras haciendas de la Universidad Central (Maca Grande, Salamalag Chico, La Provincia, Yanaurco, Salamalag Grande y Chillapata Calera o hacienda Chalúa) y los sindicatos FEI (Kaltmeier, 2007: 86-87).

Fueron sumamente importantes las redes sociales y políticas que se conformaron entre campesinos para enfrentar colectivamente contra terratenientes y arrendatarios. Ciertas investigaciones realizadas alrededor de las formas de articulación política y movilización colectiva (Offe, 1992a; Gould, 1991) han mostrado que son las interacciones entre relaciones “informales” (de parentesco, vecindad, amistad, etc.) y “formales” (derivadas de la organización misma) entre los actores las que generan movilizaciones colectivas efectivas. Así, podríamos argumentar que el relativo éxito de la lucha campesina por la tierra en el occidente de Cotopaxi durante las décadas reformistas fue posible tanto por el accionar organizativo (formal-sindical) promovido por los partidos de izquierda como por la consolidación de una fuerte red de solidaridades inter e intracomunales en base al parentesco, el compadrazgo, la amistad, la vecindad, etc. que aprovecharon de una permeable “estructura de oportunidades políticas” (Tarrow, 1997) para luchar contra el poder del terrateniente en un momento histórico determinado. Incluso, prolongando esta misma hipótesis, podríamos argumentar que la fuerza que guarda el Movimiento Indígena Ecuatoriano en la provincia de Cotopaxi en la actualidad (y que se evidencia en la década de los 90s con las movilizaciones en la ciudad de Quito) es producto de las décadas de lucha colectiva, de organización de esferas locales que encaucen el descontento, de construcción de

¹⁴En efecto, Coronel (2011: 450) identificó varios conflictos por tierras en Cotopaxi entre 1930-1940, específicamente ubicados en: Tigua, Zumbahua, Apahua, Guangaje, Pilaló, Saquisilí, Salamalag y Maca Grande. Todas estas parroquias/comunidades están asentadas en las tierras altas del occidente de Cotopaxi.

vínculos intra, inter y extra comunitarios forjados en el calor de luchas de corte agrario, todo ello en un contexto de creciente movilización interna de la fuerza laboral en el Ecuador.

De hecho, uno de los nodos más importantes de esta densa red política (formal e informal) se ubicó en el territorio de las haciendas de la actual parroquia de Guangaje. Entre 1959 y 1960, una de las comunidades más combativas del sector contra el poder del arrendatario (para ese tiempo el alemán Andreas Ruhrig), conocida como Salamalag Chico, retomó de las tierras de la hacienda hasta ocuparla por la fuerza en 1960, con anterioridad, incluso, a las políticas estatales militares por la reforma agraria. Este caso fue poco común en Cotopaxi: la noticia de la toma se transmitió, informalmente, de boca en boca en ferias y entre dirigentes indígenas que podían movilizarse con algo de facilidad por el territorio. La radicalización de la lucha por la tierra tampoco fue parte de las acciones políticas promovidas por la FEI, sino que se fueron gestando en la cotidianidad de la convivencia entre los comuneros de Salamalag y un grupo de maoístas de la comisión campesina del PCE que trataron de enfrentar al poder despótico del arrendatario del momento (Kaltmeier, 2007: 86-87). A sus 23 años, Celso Fiallo fue uno de los militantes del PCE que experimentó personalmente la lucha campesina indígena por la tierra en el occidente de Cotopaxi. A continuación se presenta un relato recogido por Kaltmeier (2008: 68-77) que rememora sus experiencias de lucha durante los 60s en Guangaje, en particular con los comuneros de Salamalag Chico.

Arrendatario era el comandante Dueñas, y entonces todo eso ocurría cuando era propiedad de la universidad. Y luego toda la relación de explotación no solamente a la gente de las haciendas sino también a las comunidades aledañas que necesitaban el agua, el pasto, la paja, la leña, en fin. Entonces yo fui a Salamalag Chico y ya me quedé en Salamalag Chico y ahí encontrando con la gente una manera de organizarnos y de pararnos para pelear en los términos que yo podía de lo más práctico posible, qué se yo, ciertas formas de lucha para el caso de que hubiera de enfrentarse, enfrentarse con ventaja, de manera apropiada, enfrentarse para ganar. Pero al mismo tiempo evitando el enfrentamiento y no enfrentándose innecesariamente. Yo siempre con mucho cuidado de la gente y al mismo tiempo haciendo frente a la situación y ahí les tomaron presos por cinco meses a los principales dirigentes de Salamalag Chico.

Estaba preso José Manuel Chugchilan, Andrés Manzano, no me acuerdo cuáles otros compañeros más estaban también ahí, y entonces se queda la gente tomada la tierra y sin dirigentes

[...]Entonces ahí le pusieron [de dirigente] a Alfonso Manzano, un joven excelente y entonces ahí... en la reunión yo dije: "Bueno, aquí vamos a organizarnos como un gobierno y entonces entre otras hace falta ir hablar con la gente de otros lados, entonces yo ahora voy a hacer de ministro de Relaciones Exteriores. En el año sesenta entonces yo me hice esa gira por todos esos lugares alertándole a la gente de la nueva situación, y de que la cosa en Salamálag Chico, en La Provincia, había comenzado y de que no había que dejar que eso sea derrotado porque de no ¿cuándo venía el tiempo de los indios? Yo ya hablaba del retorno, porque les oía a ellos, entonces yo ya tenía tomado el discurso de ellos, si tú quieres, de una manera relativamente inconsciente o con otra conciencia, ya tenía una doble conciencia y entonces yo siempre insistía en la cosa de "la madre tierra" la de que la madre tierra no puede ser comprada y de que hay que luchar para que vuelva a manos de sus hijos la madre, entonces ahí regresé a Salamálag Chico, entonces iba, volvía, iba, volvía [...]

Y entonces a mí me vinieron a ver los compañeros de Guangaje. Entonces estaba José Manuel Chugchilan, estaba Agustín Manzano, estaba Manuel Arango de Guangaje, estaba Andrés Toaquiza de Guangaje. Entonces me vinieron a preguntar ¿qué hacer? Y entonces eso era en noviembre del año 63. ¿Qué hacer? Entonces yo les dije, en este momento yo estaba recién cumplido 23 años, entonces yo les dije, en este momento los militares dicen que quieren hacer la reforma agraria. Y eso es lo que estábamos diciendo, no cierto. Entonces ya estaba dividido el partido comunista, entonces y los unos dicen hay que hacer, hay que comprar la tierra, dicen que lo van a vender barato, y compañerito... Nosotros hemos dicho la madre no se compra, ¿no cierto? Y hay que hacer que vuelva a las manos de los hijos luchando, ¿no cierto?

Entonces dije bueno, Salamálag Chico ya está tomado.

Y entonces en Guangaje, cuántos quintales de habas cosecharon, cuántos quintales de cebada, cuántas ovejas tiene la manada de la hacienda. Cuántos trabajadores hay. La división: toca a tantos por cabeza. Ya de éste, de ése, de este otro. Tanto de cebada, tanto de habas, tanto de borregos. Y tanto de tierra. Repártanse. Tómense. Y vayan a la feria, a las ferias, y digan a la gente que hagan eso. Ahí entonces es que ya se plantea la cosa de... porque ya Salamálag Chico no debía entregarse a los hijos. Ya comenzaron entregar a los hijos, antes. Eso ya empujamos. Antes. Hay que darles a los hijos. Entonces en Salamálag Chico antes de la dictadura misma ya estaba. Ya se hizo el primer reparto. Y entonces esto ya estaba estimulado, el resto de la gente viendo. De que esto ya ha ocurrido. Y eso no lo podemos dejar así.

Porque le dije al taita José Manuel, si no hacemos eso, les quitan la tierra a ustedes solitos. Es que si las otras haciendas no se toman, les quitan la tierra. Entonces hay que empujar para que los otros se las tomen también. Entonces en algunas y eso hay que concretar sabiendo en dónde no más. Pero la gente se tomó. La toma de Zumbahua mismo fue célebre, ahí las fotos mismas de Zumbahua, como se fueron y como se tomaron ahí, con cuantos caballos con cuánta gente a pie y se tomaron la hacienda sin pagar huallo. Pero

yo creo que fue el único espacio de la Sierra ecuatoriana en que ocurrió eso. Era la provincia de Cotopaxi. (Kaltmeier [2008: 68-77], testimonio de Celso Fiallo, el acento es del autor).

En éste interesante testimonio se evidencia, por un lado, que las redes informales y los lugares de contacto y relacionamiento, particularmente las ferias parroquiales, a través de las cuales se “corrió” el rumor de la primera toma de hacienda en el Occidente de la provincia fueron de fundamental importancia en el proceso inmediato de reforma agraria motivado “desde arriba”. Pero el caso de Guangaje podría mostrar también que la “estructura de oportunidades políticas” teorizada por Tarrow (1997) necesita de un grado importante de organización, movilización y espacios de contacto y reflexión colectiva para poder materializarse. Y a pesar de esta importante experiencia de lucha, es en 1982, con ayuda de la FEI, la FEUE y el IERAC que presionaron constantemente a la Universidad Central, que los comuneros de Salamalag Chico y otras comunidades de la parroquia de Guangaje lograron legalizar sus tierras.

Pero también hay otras experiencias históricas del campesino indígena dentro de la misma parroquia de Guangaje. Es posible que el ejemplo más contrastante con lo relatado hasta aquí es el caso de Guangaje Centro, una comunidad libre cuyos territorios fueron adquiridos por algunos comuneros de la hacienda Guangaje en 1857 (Alomía, 2005: 177-178). Este caso es relevante en tanto Guangaje Centro, en la actualidad, es la comunidad más “urbanizada” de todas: allí se ubican la iglesia, las oficinas del Teniente Político, el Registro Civil, la Junta Parroquial y la casa comunal de la UNOIRG, la radio, la iglesia adventista¹⁵, una escuela, un colegio, un centro de salud, etc., y es allí donde todos los domingos por la mañana se desarrolla la feria parroquial, lugar de encuentro local por excelencia. Algunas investigaciones coinciden en que la dualidad comunidad libre/comunidad de hacienda fue un primer factor diferenciador entre los campesinos indígenas de la sierra ecuatoriana: mientras las comunidades de hacienda mantenían vínculos ideológicos “paternalistas” con el hacendado, que cumplía el rol de intermediario (muchas veces único) entre comunidades y el mundo exterior, las comunidades libres tuvieron mayores oportunidades para vincularse con más independencia con el mercado y la sociedad capitalista (Ibarra y Ospina, 1994: 86-7). Para Andrés Guerrero este hecho “obvio” produjo que las comunidades libres

¹⁵ En Guangaje Centro se encuentra la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

construyen su identidad “en base a sentirse superiores, más inteligentes, cultos y empresarios”, mientras que las comunidades de hacienda lo hacen mediante la valorización de “la cohesión del grupo, la entreayuda doméstica, el trabajo agrícola, el sentido comunitario” (1991: 192).

Otro factor diferenciador dentro de la misma parroquia de Guangaje es la coexistencia, bajo la misma división territorial, de dos grandes grupos de comunidades, diferenciados por haber formado parte de dos grandes haciendas: las haciendas heredadas de “Gallu” Almeida y la hacienda de Tigua. Esta última pasó por varios propietarios entre 1945 y 1972, año en el que el entonces Presidente General Guillermo Rodríguez Lara adquiere las tierras de la hacienda. Antes de la reforma, desde 1945, una parte de las tierras¹⁶ fueron adquiridas por tres comunidades que conforman una cooperativa agropecuaria llamada Chami Cooperativa (Ilaquiche, 2004: 47). Al igual que sucedió en el resto de la parroquia, con el pasar de los años las primeras comunidades y cooperativas conformadas en el período reformista se fueron fraccionando. En Tigua, por ejemplo:

[De] 5 comunidades, excepto Anchi Quilotoa, empiezan a fraccionarse, debido a la influencia de intereses de ciertos grupos de dirigentes o familias de las respectivas comunidades, a la que se sumaba la distancia que implicaba llegar a las cabeceras comunales y la influencia ejercida por los religiosos salesianos, quienes para evangelizar comenzaron a construir iglesias en lugares no muy distantes de las comunidades. En la actualidad, fruto de este fraccionamiento, Tigua cuenta con 14 comunidades, formadas de la siguiente manera: De la comunidad de Yahuartoa han surgido las comunidades de Yatapungo y Ugshaloma Grande; de Zunirrumi nace Niño Loma y Casa Quemada; de Chimbacucho nace Rumichaca; de Chami surge Quiloo; de Tigua Centro surgen las comunidades de Pactapungo, Calerapamba y Ugshaloma Chico (Ilaquiche, 2004: 48).

Como veremos en el siguiente capítulo, este mismo proceso de fraccionamiento intracomunitario y relacionado con vínculos de parentesco sucedió en los territorios de la UNOIRG. Hasta el día de hoy ambos poblados se mantienen distantes en términos espaciales y relacionales, lo que ha generado dinámicas organizativas relativamente independientes, alrededor de dos organizaciones de segundo grado: La Unión de

¹⁶ Hasta el momento en que se realizó el trabajo de campo, una parte del territorio de Tigua seguía siendo utilizada para la cría de ganado y producción de leche, bajo administración de un familiar cercano de Rodríguez Lara. Según Ilaquiche (2004: 48) ningún comunero de Tigua ha desarrollado relaciones laborales estables con la hacienda.

Organizaciones Indígenas Rumiñahui de Guangaje (UNOIRG) y la Unión de Organizaciones y Cabildos de Tigua (UNOCAT, hoy conocida como Circunscripción Territorial Indígena y Gobiernos Autónomos de Tigua-CITIGAT)¹⁷.

Según Ibarra y Ospina (1994: 158-59) y Sánchez Parga (2002) los resultados desfavorables de la reforma para el conjunto de campesinos de Cotopaxi dieron paso a un proceso de “crisis” comunal y ambiental, sobre todo en las poblaciones indígenas de la cordillera occidental. Allí fueron aumentando los conflictos intercomunales alrededor del uso equitativo de los recursos comunitarios (mayoritariamente páramos de pastoreo), los problemas implícitos en el aumento de la migración temporal de manos jóvenes hacia las ciudades de la sierra centro norte, la creciente presión demográfica que obligaba a extender la frontera agrícola y la consecuente aceleración de la erosión de los suelos frágiles (Ibarra y Ospina, 1994: 111-25).

Ahora bien, Zamosc (1990) ha argumentado que el período reformista tuvo dos momentos diferentes, tanto en términos de redistribución de la tierra como en el proceso organizativo del campesino indígena. El primero, durante la década de los 60s, caracterizado por una incidencia marginal de organizaciones sindicales afiliadas a la FEI en los conflictos por redistribución de tierras; una segunda, durante los 70s, en donde la organización campesina se fortaleció por medios más autónomos (el autor se refiere a la Federación Nacional de Organización Campesinos-FENOC y la ECUARUNARI) lo que generó una organización necesaria para su futura proyección “como personeras del campesinado indígena de la sierra, en el proceso de ampliación de los derechos políticos y de transición a la democracia” (Zamosc, 1990: 146). Haciendo una lectura general del período, el autor reconoce que la iniciativa terrateniente de modernización pudo haber generado una transformación agraria “por la vía junker” (que implica el nacimiento de una pequeña burguesía rural en medio de un proceso de redistribución marginal de tierras hacia manos campesinas), pero termina insistiendo que:

¹⁷ Vale aclarar que se realizó el trabajo de campo en el sector de Guangaje, dentro de las comunidades asociadas a la UNOIRG. Aunque en Tigua también es notoria la vinculación de la población con la industria de la construcción, se podría especular, siguiendo algunos estudios sobre el sector (Ilaquiche, 2004; Colloredo-Mansfeld, 2009), que allí se desarrollaron otras estrategias de diversificación laboral y migratorias que vincularon a su población al sector artesanal (resaltan los pintores de Tigua) o como cargadores en los mercados Mayorista y San Roque de Quito.

[...] buena parte de las condicionantes de las luchas campesinas se definen en términos de los campos de fuerzas más amplios en los cuales se desarrollan los conflictos agrarios. En ese terreno de alianzas y oposiciones sociales y políticas, lo más decisivo es la acción del Estado que, además de expresar los equilibrios existentes, puede aparecer como un factor que los altera (Zamosc, 1990: 172)

Al observar el accionar del Estado, Liisa North también encontró un evidente sesgo urbano y blanco-mestizo que atravesó el discurso y la práctica política del período reformistas, no solo en Ecuador sino en toda Latinoamérica: “Modernidad, o ciudad-industrial-tecnología avanzada, se asociaron a la noción de "progreso", mientras que el mundo rural fue tachado de atrasado e indígena, valoración que a menudo, conllevaba contenidos fuertemente racistas” (North, 1985: 450). En realidad fueron contados “imperios familiares” con intereses superpuestos (políticos y económicos) que tomaron decisiones claves en el sector industrial, financiero y agrícola, con pocas intenciones de ampliar la oferta hacia el mercado interno y para las clases populares, los que manipularon las leyes reformistas estatales al punto de convertirlas en “contrarreformas” para la economía campesina.

En definitiva, los grupos económicos dominantes lograron mantenerse como los beneficiarios de la modernización agraria a expensas de los campesinos semi-proletarizados (vía alimentos baratos para las ciudades y una creciente disponibilidad de mano de obra de bajo costo para el crecimiento urbano) que nunca vieron el surgimiento de un sector industrial que los integrara en un intento serio de modernización económica nacional (North, 1985: 441-43). Esta sesgada acción del Estado también produjo que buena parte de los beneficios del “boom” petrolero iniciada en 1974 fueran apropiados, de manera directa o indirecta, por determinados grupos económicos privados¹⁸.

Así, a pesar de la importante labor organizativa indígena en la provincia de Cotopaxi que trató de aprovechar la etapa reformista, los cambios estructurales exigidos por los actores movilizados en colectivo fueron limitados por las elites locales y nacionales. El reformismo no logró ampliar el mercado interno ni logró incentivar la industrialización de un sector relevante de la economía ecuatoriana. El rentismo de las élites que se benefician con el boom petrolero deviene en una etapa de endeudamiento agresivo que marcará las siguientes décadas de la historia nacional. A continuación se

¹⁸ Sobre los sectores económicos privados que se beneficiaron con políticas estatales durante la bonanza petrolera de los años 70s, ver Acosta (2006: 131-136).

exponen los eventos más relevantes de ésta etapa y ciertas particularidades del surgimiento del actor político “gravitante” del período neoliberal.

El fin de la reforma “desde arriba” (¿y de la presión “desde abajo”?): ajuste estructural y “reprimarización modernizada” en Latinoamérica.

Durante la década de los 70s el boom petrolero pareció habernos llevado “a las puertas del paraíso” (Acosta, 2006: 128). Tanto las medidas estatales dirigidas a incentivar las exportaciones nacionales como los crecientes precios del petróleo hasta inicios de los años 80s permitieron el ingreso de cuantiosos recursos financieros al país¹⁹. Con ello, las instituciones financieras multilaterales (como el FMI, el BM y el BID) vieron la oportunidad de incentivar estrategias “agresivas” de endeudamiento a lo largo y ancho del continente latinoamericano, a la expectativa de que se pueda dar paso al “desarrollo” del “atrasado Tercer Mundo” (Acosta, 2006: 150-51). Pero desde inicios de la década de los 80s varios desequilibrios económicos, tanto domésticos como internacionales, produjeron paulatinamente la debacle económica de la región.

Acosta muestra que ciertas inversiones sobredimensionadas provenientes del boom petrolero, así como los nuevos patrones de vida consumistas en pequeños grupos de la población, la compra masiva de armamento, casos de corrupción, así como las políticas estadounidenses para reducir su enorme déficit económico durante la administración de Ronald Reagan, etc., son algunos de los factores internos y externos que explicarían los orígenes de la crisis de la deuda en Ecuador (Acosta, 2006: 153). El sostenido incremento de las tasas de interés de las deudas latinoamericanas (de 4-6% al 20%) dio paso a la exportación de capitales latinoamericanos hacia las desequilibradas economías del Norte. Resulta irónico, por ejemplo, que en el período 1980-2000 la transferencia neta de recursos financieros desde los países empobrecidos hacia los acreedores por concepto de servicios de deuda externa representó 43 veces el costo de la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial. Para el Ecuador las

¹⁹ En el período comprendido entre 1970 y 1980 el precio del barril de petróleo aumentó en aproximadamente 1150%, mientras que las exportaciones de banano, cacao, café y camarones crecieron en un 141%, 62%, 183% y 2000% respectivamente (Acosta, 2006: 137)

transferencias netas en éste período se aproximan a la décima parte (aproximadamente 76 mil millones de dólares) del Plan Marshall (Acosta, 2006: 155-156).

Así, bajo la tutela política de lo que se ha denominado el *Consenso de Washington*, se dio paso a los programas y recetarios económicos de ajuste estructural promovidos por las instituciones financieras multilaterales. Las exigencias de estas instituciones para con los Estados endeudados incluyeron programas de austeridad y disciplina fiscal, reducción del gasto público, privatización de empresas estatales, la liberalización comercial y financiera, flexibilización de las leyes laborales, entre otras, para así establecer un “entorno apropiada para garantizar la participación de los países subdesarrollados en la nueva división internacional del trabajo: la ‘globalización’” (Acosta, 2006: 158).

De entre las varias políticas promovidas por estos organismos, Liisa North (2008: 27) señala dos que fueron de central importancia para comprender las repercusiones del neoliberalismo en el agro y en la economía nacional. La primera es la Ley General de Instituciones Financieras, que dejó al sistema bancario libre de los controles estatales (lo cual provoca la incapacidad estatal para detener la debacle monetaria ecuatoriana de fines de la década); la segunda es la Ley de Desarrollo Agrario, responsable de la desaparición del IERAC y el fin de la reforma agraria fomentada por el Estado. Ambas políticas fueron promulgadas por el gobierno de Sixto Durán Ballén, el mismo que promovió la inversión financiera especulativa por encima de la productiva: la “arremetida neoliberal” de la primera mitad de la década de los 90s fue, sin duda, “la crónica de una crisis anunciada” (Acosta, 2006: 184-185).

Las consecuencias de la eliminación del IERAC fueron profundas. Ibarra y Ospina (1994: 127-54) muestran que fueron mecanismos de mercado (de compra-venta y titulación de predios) por medio de los cuales se logró redistribuir tierras hacia familias campesinas durante los 60s y 70s en Cotopaxi. La amenaza estatal de la redistribución por mediación del IERAC motivó la caída de los precios de las tierras, permitiendo que algunas familias y cooperativas agrícolas accedan a ellas a precios relativamente justos. Con la eliminación del IERAC y de la “amenaza” reformista hacia el terrateniente, los precios de tierras rurales aumentaron, impidiendo que la redistribución en el agro se profundice. Incluso se debe señalar que el proyecto de esta Ley fue elaborado por las Cámaras de Agricultura, las cuales buscaban “limitar las

causales de afectación de tierras; crear mecanismos para la división de tierras comunales; desarrollar un mercado de tierras y transferir los conflictos de tierras al fuero civil” (CAAP, 1994: 49-59, citado en Ramírez, 2009: 70).

La ley de Desarrollo Agrario protegió la gran propiedad limitando las causales de afectación de tierras, abrió las fronteras a la exportación de productos agropecuarios e importación de insumos agroquímicos, eliminó los controles de precios internos y redujo significativamente la intervención estatal en asuntos relacionados al agro (Bravo, 2008: 51). Algunas de las continuidades heredadas del período reformista en las reformas neoliberales de la política agraria fueron el incentivo a la “revolución verde”, esto es, utilización de maquinaria, agroquímicos y semillas híbridas (Bravo, 2008: 93). En Cotopaxi los efectos de la retirada del Estado tuvieron efectos negativos, sobre todo para las poblaciones indígenas del occidente de la provincia. Durante período 1990-2006 parroquias como Toacazo, Angamarca, Zumbahua y Guangaje presentaron un deterioro significativo en el consumo por habitante, aumento de la pobreza y profundización de la desigualdad social (Larrea et. al., 2008: 26).

El saldo de las políticas de ajuste en el Ecuador fue nefasto, sobre todo para los campesinos más pobres. Para 1995, el 73,2% de la población indígena ecuatoriana subsistía por debajo de la línea de la pobreza; la pobreza se profundizó sobre todo en los sectores rurales, donde el 82% de la población subsistía en condiciones precarias para 1998 (North, 2008: 19). En América Latina el número de pobres se duplicó en el período 1995-2000, el gasto social se redujo (un 22% en educación y un 26% en salud) mientras que la riqueza se concentró, nuevamente, en pocas manos: entre 1990 y 1999 el ingreso nacional que llegó al 20% más pobre de la población ecuatoriana pasó de 4.6% al 2.46% del total (Acosta, 2006: 197).

Durante este período se consolidó un nuevo modelo de acumulación sostenido en la “reprimarización modernizada” de las economías dependientes latinoamericanas (Acosta, 2006: 157). Una serie de medidas liberalizadoras, entre las que resalta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado entre México, EEUU y Canadá, tuvieron efectos negativos sobre campesinos, pequeños y medianos productores agrícolas que, incapaces de competir contra las importaciones cargadas de subsidios estatales de los países ricos, dejaron de producir alimentos para el mercado interno. Blanca Rubio ha caracterizado al modelo neoliberal como el promotor de un “dominio

excluyente” para con los campesinos latinoamericanos, modelo derivado de tres procesos determinantes: [1] el dominio del capital industrial transnacional que se beneficia de los alimentos baratos del campesinado marginado para mantener niveles salariales también bajos, a la vez que se los excluye como “consumidores” de productos industriales de vanguardia; [2] el dominio del capital financiero especulativo sobre el productivo, que transfiere recursos desde los campesinos y los pequeños y medianos productores agrícolas por medio del endeudamiento; y [3] el dominio del capital agroindustrial multinacional favorecido por los grandes subsidios de las potencias económicas (Rubio, 2009: 148-49).

En Cotopaxi el impacto de estas medidas no fueron aceptadas con pasividad por parte de una población indígena históricamente marginada. Distintos movimientos sociales, provenientes en su mayoría de los sectores rurales latinoamericanos, promovieron importantes procesos de organización y enfrentamiento político contra las medidas de ajuste neoliberal. En el Ecuador, el movimiento social alrededor del cual se articularon las demandas populares contra la retirada del Estado y el ajuste neoliberal, al menos durante un primer momento, fue (¿y es?) el Movimiento Indígena.

Movimiento Indígena y el Regreso del Estado en el siglo XXI:

Los orígenes del movimiento indígena en el Ecuador pueden ser analizados desde dos puntos de vista: por un lado están los procesos organizativos regionales, tanto en la sierra como en la Amazonía, que desde fines de la década de los 70s e inicios de los 80s empiezan a articular poblaciones que luchaban por acceder a la tierra. También se dio paso a la demanda por el respeto al “territorio”²⁰, a la denuncia pública del racismo y la necesidad de políticas de focalizadas a nivel local: la fundación de la ECUARUNARI (1972) y de la CONAIE (1986) fueron momentos importantes donde los indígenas daban paso a procesos organizativos propios y a escala nacional. Por otro lado estas

²⁰ Esta demanda surge desde la experiencia conflictiva entre los poblados originarios amazónicos y los recientemente arribados colonos que recibieron tierras orientales durante las décadas reformistas. Es allí, en las luchas por la preservación de los territorios amazónicos frente a la amenaza de la extensión de la frontera agrícola en el pie de monte oriental, donde se puede observar el punto de partida de la futura demanda por la construcción del *Estado Plurinacional*, la más general y radical propuesta de transformación social, económica y política del Movimiento Indígena Ecuatoriano (Guerrero y Ospina, 2003a)

organizaciones lograron convertirse en un referente común para las poblaciones rurales que se movilizaron colectivamente durante la década de los 90s y principios del siglo presente.

Guerrero y Ospina (2003a), siguiendo las hipótesis planteadas por Carola Lentz en Chimborazo (2000), señalan que tanto el vacío de poder que se genera a partir de la paulatina disolución de las haciendas, como las experiencias migratorias que responden a la prolongada crisis de las economías campesinas en la sierra, fueron circunstancias que explican la motivación y el nuevo escenario organizativo y movilizador del movimiento indígena serrano. A finales de la década de los 90s Lentz encontró que las experiencias migratorias de los comuneros de Shamanga, en Chimborazo, hacia plantaciones costeñas durante las décadas reformistas produjo un reacomodo de los lazos tradicionales que vinculaban a los indígenas entre sí. Estos fueron extendiéndose de sus orígenes familiares-ampliados hacia horizontes cada vez más amplios, momento en que se conformó un imaginario comunitario indígena que trascendía las fronteras parroquiales, cantonales y provinciales. A decir de la autora:

Está surgiendo una nueva conciencia de los migrantes como miembros de un gran grupo étnico [racialmente marginado], los "indígenas"; conciencia que trasciende las particularidades y autodefiniciones locales que anteriormente tenían un fuerte impacto en la sierra" (Lentz, 2000: 218, citado en Guerrero y Ospina, 2003a).

Dado que para el caso de Cotopaxi los procesos migratorios internos de las poblaciones masculinas indígenas comenzaron antes de las décadas reformistas (Kingman, 2009; Mauro, 1986) es posible suponer que la tesis de Lentz es válida para comprender la capacidad organizativa del Movimiento Indígena en ésta provincia. Es interesante anotar que la adopción de la etnicidad como una estrategia política explícita de las organizaciones indígenas no fue inmediata en Cotopaxi. Cuando la organización provincial del movimiento fue fundada en 1980, los primeros dirigentes reunidos alrededor de las Casas Campesinas de Pujilí y Saquisilí (que articulaban a las comunas del occidente de la Provincia) prefirieron mantener el nombre de "Movimiento Campesino de Cotopaxi". Dado que los agricultores mestizos nunca se vieron interesados por participar en la organización, se resuelve en 1981 un nuevo nombre: Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC) (Barba, 2006: 71-75). Para fines de la década

de los 90s el Movimiento adhiere nuevamente el denominativo “campesino” en su nombre, y es en el 2001 cuando se consigue formalizar jurídicamente a la organización frente al Ministerio de Bienestar Social, bajo las siglas MICC (Barba, 2006: 77-78).

Las distintas denominaciones que adquiere la organización provincial del Movimiento en su proceso de consolidación podrían mostrar que el factor cohesionador de la acción colectiva más importante estuvo más cercano a una etnicidad compartida que a la distinción de clase campesina “pura”, clase social que paralelamente estuvo atravesada en el mismo territorio por una distinción también basada en atributos raciales. Así mismo es importante reconocer que la labor organizativa y educativa promovida (hasta la actualidad) por un grupo de sacerdotes Salesianos cercanos a los ideales de la Teología de la Liberación, a los cuales se les sumaron otras instituciones como el FEPP, FODERUMA o la Cooperación Matto Grosso en su afán por prestar “manos amigas” al procesos político y viabilizar los programas de desarrollo, fue de fundamental importancia en el procesos de articulación política provincial (Barba, 2006: 70).

El surgimiento del Movimiento Indígena coincidía con el debilitamiento del modelo de industrialización interna y del movimiento sindical (Ramírez, 2009: 69). Siguiendo a Negreiros (2009), que analiza las experiencias sindicales en el sector agropecuario ecuatoriano:

Con un sistema organizativo y estructural frágil, con la desunión de la clase trabajadora, las limitaciones burocráticas y el reivindicacionismo economicista, característico del sindicalismo ecuatoriano, la organización sindical muestra fisuras y pierde fuerza con las nuevas políticas económicas [instauradas durante el período neoliberal]. La capacidad de movilización de los sindicalizados se reduce, así como la confianza en el sindicalismo como actor social capaz de cambiar la situación del campesino, indígena y la clase trabajadora (Negreiros, 2009: 135)

Así las cosas, durante la década de los 90s el Movimiento Indígena se convirtió paulatinamente, por medio de amplias movilizaciones públicas, tomas de calles, carreteras, iglesias, plazas, etc., en el actor político (contrario a las medidas de ajuste neoliberal) alrededor del cual empezaron a gravitar otros sectores de la sociedad civil y el sector político progresista ecuatoriano. Para 1990, en un contexto de crisis económica y de apertura política del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, las

organizaciones indígenas mostraron públicamente su fuerza de movilización durante los masivos levantamientos indígenas concentrados en la sierra ecuatoriana, demandando respeto, titulación de tierras e inclusión. En 1994 se enfrentan (sin resultados favorables) en contra de la Ley de Desarrollo Agrario; en 1995 aparece la Coordinadora de Movimientos Sociales que, con el Movimiento Indígena a la cabeza, articuló las demandas de los campesinos del seguro social, trabajadores petroleros y otros sectores sociales (ahora sí, con victorias importantes) en contra de la reforma al Instituto Ecuatoriano Seguro Social y la desregulación (flexibilización) laboral del sector público (Ramírez, 2009: 71-72). Esta última victoria de la Coordinadora incentivó la creación del partido político Pachakutik, lo cual estaba en correspondencia “con la consolidación de un programa político [del movimiento] cuya disputa requería de una estructura organizativa más compleja y diversificada” (Ramírez, 2009: 73).

Aunque los enfrentamientos sociales en contra de las medidas de ajuste se prolongaron durante la década de los 90s y primeros años del siglo XXI, y a pesar de haber conseguido algunas victorias importantes (aunque ambivalentes, como durante la reforma constitucional de 1998 donde se reconocía ciertas demandas por reconocimiento de propiedades comunitarias, dejando los problemas de redistribución de tierras en un segundo plano) la peor crisis económica y financiera del torna siglo en Ecuador no se pudo evitar. Pero lo que si resultaba evidente en ese momento era que “la hegemonía del Movimiento Indígena Ecuatoriano en el campo progresista era indiscutible” (Ramírez, 2009: 83). Su llegada al poder, por medio de una alianza trunca con el Partido Sociedad Patriótica en el 2002, complejizó la historia política del Movimiento Indígena, el gran ausente en el levantamiento de los forajidos durante el 2005. Y es a partir de esta última crisis del sistema político ecuatoriano (la caída del ex presidente Lucio Gutiérrez) que se empieza a reconstruir al Estado bajo un nuevo proyecto constitucional y la propuesta de gobierno de la Revolución Ciudadana (Ramírez, 2009).

Para el 2006, año de importantes levantamientos indígenas en contra del Tratado de Libre Comercio promovido por los Estados Unidos y a favor de la caducidad de los contratos de la transnacional petrolera “Occidental”, se perfilaron tanto las propuestas por una Asamblea Constituyente como la articulación de un nuevo bloque político alrededor de la figura de Rafael Correa. En un primer momento, durante el proceso

electoral de 2006, los acercamientos programáticos y discursivos entre el Movimiento PAIS (Patria Altiva i Soberana) y Pachakutik fueron evidentes, aunque fracasaron los intentos de generar un bloque electoral entre Rafael Correa y Luis Macas, líder histórico del Movimiento Indígena. Ya en el poder, la exitosa consulta popular por una Asamblea Constituyente fue la principal demanda del Movimiento promovida por Correa. Aunque la figura política de Correa se fue imponiendo sobre aquellos dirigentes indígenas con el pasar del tiempo, fue durante la Asamblea Constituyente de 2008 que la ruptura entre ambos sectores se profundizó²¹.

Durante la Asamblea también se evidenció la ruptura interna del bloque político articulado alrededor de Rafael Correa. En junio de 2008 el entonces presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, fue reemplazado por Fernando Cordero, otro representante importante del bloque oficialista, para acelerar la aprobación de artículos a expensas del proceso participativo que se había incentivado. En ese momento Correa empezaba a acusar a su mismo movimiento, o a una parte de ellos, como “infiltrados” que ponen en peligro su proyecto de cambio. Allí empieza la constante presión contra lo que Correa ha tachado de ecologismo, izquierdismo e indigenismo infantil, tres posturas ideológicas que atentarían contra una renovación económica y política “realista” en el Ecuador (Ospina, 2008: 133).

Aunque varios puntos “radicales” de la Constitución de Montecristi se fueron flexibilizando en el transcurso de la Asamblea Constituyente, el texto constitucional, aprobado por la sociedad ecuatoriana en el 2008, tuvo importantes avances. Los artículos 275 y 276, por ejemplo, definen un modelo de desarrollo económico diferente al propuesto durante el período reformista o el neoliberal: el Estado vuelve a escena como un actor fundamental para la planificación económica y con un nuevo carácter “Plurinacional”; se plantea una nueva relación armónica entre economía, medio ambiente y sociedad alrededor del ideal del Sumak Kawsay (Buen Vivir); se ofrecen incentivos la participación activa de la sociedad civil en el diseño y aplicación de las políticas públicas, se promueve un nuevo proceso de integración latinoamericana, etc.

En definitiva, la constitución de Montecristi planteaba un paradigma político, económico, social y ambiental “posneoliberal”, alejado también del “sesgo”

²¹ Para una detallada revisión de los momentos de alejamiento y acercamiento político más importantes entre el Movimiento Indígena y PAIS, entre 2006 y 2010, ver Martínez, Mateo (2010: 67-109)

industrialista característico del período reformista (Muñoz, 2011: 159-160; North, 1985). Por ejemplo, en lo que respecta al sector agrícola, el artículo 281 propone a la Soberanía Alimentaria como el “objetivo estratégico” y obligatorio del nuevo Estado. El accionar estatal estaría dirigido a impulsar la pequeña y mediana producción agropecuaria en Ecuador por medio de políticas crediticias y arancelarias favorables para el sector, e incluso se llega a establecer la promoción de políticas redistributivas (de tierra, agua y otros recursos productivos) para el pequeño campesino y para los campesinos sin tierra.

Aunque la nueva Constitución alberga la posibilidad de utilizar las estructuras de un Estado Plurinacional de carácter pos neoliberal y posindustrial a favor de la economía campesina, no queda duda de que “la mayor o menor profundización del régimen de desarrollo y de las políticas para la Soberanía Alimentaria dependerán de las nuevas correlaciones de fuerzas que se vayan estableciendo en el país” (Muñoz, 2011: 164). Afirmación compleja, en tanto las correlaciones de fuerzas actuales parecerían ir a favor de un proyecto de Estado posneoliberal (mas no poscapitalista) al tiempo que uno de los actores políticos más importantes, el Movimiento Indígena, estaría pasando por un momento crítico de su prolongada historia organizativa y de lucha. Antes de cerrar este capítulo es importante detenernos a revisar algunas de las lecturas que se han debatido para explicar la paulatina desarticulación del movimiento y su consecuente debilitamiento como el actor colectivo gravitante de las luchas populares por reconocimiento y redistribución en el país.

Movimiento Indígena: ¿en crisis o en transición?

Una primera explicación del debilitamiento actual del Movimiento Indígena está relacionada con su propio proceso de institucionalización político, es decir, en la transformación del movimiento en partido político. Franklin Ramírez (2009: 86-88) explica que el particular proceso de institucionalización del Movimiento Indígena y Pachakutik, su paso por el poder y las alianzas políticas que se realizaron durante el transcurso del ciclo de protestas mostraron cuatro limitaciones fundamentales en el proyecto étnico: [1] la inexistencia de un espacio político nítido de deliberación y coordinación de su acción colectiva, [2] la incapacidad de los “funcionarios-dirigentes”

por atender a sus nuevas funciones en el Estado sin olvidar sus vínculos con organizaciones regionales y de base, [3] su reacomodo en viejas prácticas corporativistas, clientelares y paternalistas con el Estado y, por último, [4] la incapacidad de acumular capital político y técnico con otras organizaciones sociales no indígenas vinculadas al movimiento, que le permitieran enfrentar los retos de su llegada al poder.

Por su parte, Víctor Bretón (2001: 251-254; 2011: 67-70) apunta en otra dirección para explicar el progresivo debilitamiento de la organización y la representatividad política nacional del Movimiento Indígena. Más allá de su proceso de institucionalización política y del juego de alianzas que el Movimiento pretendió articular, Bretón argumenta que el auge de las organizaciones de base (cabildos y Organizaciones de Segundo Grado), aquellas que se movilizaron durante la década de los 90s, respondía más a las ofertas de recursos provenientes de agentes externos al movimiento (de las Organizaciones No gubernamentales de Desarrollo, que concentraron su accionar en poblados indígenas de la sierra) que a un proceso de fortalecimiento de la organización política. Así, y aunque los programas de desarrollo rural integral post-reformistas ya habían sido criticados como enemigos de la organización indígena durante la década de los 80s, en los 90s surge un grupo de dirigentes menos críticos que encuentra posibilidades de ascenso/diferenciación social a partir de su vinculación con los programas de desarrollo. La “etnofagia neodesarrollista” de los programas promovidos por algunas ONGs serían las responsables de la fragmentación, de la pérdida de cohesión del movimiento desde adentro. A decir del autor, los programas de desarrollo (muchos promovidos por los mismos organismos financieros multilaterales como el BM o el BID), en la medida en que exigían (y siguen exigiendo) de organizaciones legalmente constituidas a nivel de base para canalizar sus fondos, han promovido la competencia y el conflicto inter e intracomunitario, al punto de “domesticar” la “amenaza étnica”²².

²² La “etnificación” de la cuestión agraria desde el final de la época reformista ocultó, tanto en las políticas de intervención privada y estatal como en los estudios académicos, un nuevo momento del acaparamiento de recursos productivos en el agro. Bretón también señala que “Si bien es cierto que la acumulación de la riqueza y la sub proletarización de la población indígena es notoria en los enclaves florícolas de la sierra, no es allí donde se concentran los mayores índices de acaparamiento de superficies agrícolas. Los nuevos oligarcas no se sienten atraídos por las tierras altas [...] la verdadera cuestión agraria se fue trasladando silenciosamente desde el pie de monte andino hacia las llanuras tropicales de la costa, a la expansión ilimitada de las grandes empresas bananeras y a la ampliación de los emporios

Ospina (2009) problematiza estas lecturas con el argumento de que la crisis actual del movimiento indígena, en relación a su contundencia movilizadora en décadas pasadas, responde más bien a factores ideológicos, orgánicos y sociológicos que no pueden ser perdidos de vista. Su tesis es que, por un lado, el movimiento no aglutinó alianzas suficientes para promover cambios estructurales radicales y, por otro, que las conquistas parciales del movimiento (proyectos de desarrollo, poder institucional en el Estado, etc.) no pudieron ser dirigidas a seguir acumulando fuerzas, debido principalmente a limitaciones organizativas internas (Ospina, 2009: 129). Estas limitaciones organizativas internas se derivan del hecho de que “el esqueleto organizativo, político e incluso simbólico de la organización de la CONAIE todavía descansa en las organizaciones comunitarias rurales” (Ospina, 2009: 140), algo problemático en tanto no hay organizaciones étnicas que respondan a los conflictos de los migrantes internos como por ejemplo pequeños comerciantes informales, albañiles, cargadores, etc., siendo estas las actividades laborales que han empleado a una buena parte de las bases del movimiento durante las últimas décadas.

En este sentido también es problemático el proceso de “descomunización” que algunos investigadores han encontrado en varios sectores rurales indígenas, donde las transformaciones sociales, económicas y culturales que se originan en las décadas reformistas y se profundizan con el neoliberalismo, han generado prácticas más individualizadas, sobre todo entre jóvenes migrantes y en perjuicio de las mujeres indígenas que permanecen en los poblados²³. Según Ospina, una de las limitaciones más grandes de la organización indígena es que todavía “no procesa las implicaciones organizativas y políticas de las nuevas formas de ser indígena en el Ecuador” (2009: 141), nuevas formas que estarían directamente relacionadas con la diferenciación y fragmentación laboral de sus bases.

En consonancia con la tesis de Ospina, Alberto Tuaza (2011) encontró un aparente cansancio organizativo entre los comuneros rurales de Chimborazo, tanto por

agroexportadores donde la precariedad laboral, la represión de cualquier iniciativa sindical, el trabajo infantil indiscriminado y la flexibilización y arbitrariedad brutal de los mecanismos de contratación están a la orden del día” (Bretón, 2011: 70)

²³ Las consecuencias sociales de la migración temporal para la organización comunitaria del occidente de Cotopaxi han sido analizadas por Ibarra y Ospina (1994) y Sánchez Parga (2002). Ambos estudios concuerdan en la presencia de un lento pero constante proceso de descomunización e individualización que atentarían contra las estructuras organizativas de base del movimiento indígena ecuatoriano.

los fracasos de muchos programas de intervención rural (tanto públicos como privados) como por el oportunismo de ciertos dirigentes comunales, quienes terminarían alejándose de las bases al acceder a puestos en el aparato estatal o en las instituciones de desarrollo. Pero también observa que debido al accionar del Movimiento Indígena en problemáticas “políticas” de amplio alcance, como por ejemplo la exigencia del cierre de la base militar estadounidense en Manta o los importantes levantamientos en contra del TLC:

Se han minimizado los temas económicos, la migración, el mejoramiento de las condiciones de vida, la exclusión, el racismo... a esto se une la ausencia de una agenda reivindicativa para los indígenas migrantes que viven en los espacios urbanos, el trabajo con los jóvenes y los niños. (Tuaza, 2011: 333)

Estas lecturas sobre la crisis actual del Movimiento Indígena Ecuatoriano mantienen una tensión interna poco explorada acerca de las consecuencias organizativas de la migración temporal. Siguiendo los interesantes testimonios recogidos por Kaltmeier (2007) y la hipótesis de Lentz que revisamos con anterioridad, las experiencias de migración interna/temporal y de relacionamiento en las ferias locales fueron de fundamental importancia durante la lucha por la tierra en el período reformista como durante los orígenes del Movimiento Indígena. Estos factores históricos y sociológicos lograron incentivar el reconocimiento mutuo entre indígenas más allá de los límites del parentesco, la comunidad e incluso la parroquia, durante una coyuntura de apoyo parcial por parte del Estado por la reforma en el agro y la modernización de la economía nacional. Durante esta etapa de la historia del Ecuador se amplían las redes de relacionamiento laboral, político, cotidiano del mundo indígena y de la sociedad ecuatoriana en general, posibilitando la articulación política efectiva de ciertos sectores en momentos que requerían de movilizaciones y demostraciones públicas para incentivar el accionar estatal.

Pero parecería que en el transcurso de las décadas de los 80s, 90s y la primera década del siglo presente, estas redes de relacionamiento dejan de ser útiles para tales propósitos, a pesar de que los lugares de encuentro como las ferias se mantienen e incluso se han extendido en ciertos territorios de la cordillera occidental de Cotopaxi ¿El Movimiento Indígena las pierde de vista? ¿Por qué la migración se convirtió en un

problema cuando había funcionado como fuente de vínculos formales e informales, de cohesión? ¿Cuáles han sido las consecuencias de las estrategias migratorias temporales para las organizaciones parroquiales? ¿Se están experimentando transformaciones en las estrategias migratorias de las nuevas generaciones? ¿Qué ha cambiado en los sectores económicos que acogen a las poblaciones expulsadas del occidente de Cotopaxi? ¿Todavía quedan espacios estratégicos desde los cuales sea posible rehacer o reconfigurar las experiencias migratorias en función de un nuevo “reconocimiento mutuo” que trascienda las fronteras de la comuna o la parroquia?

Para revisar estas interrogantes he decidido analizar las particularidades de la migración hacia el sector de la construcción (incluidos los fabricantes de bloques) en la parroquia de Guangaje desde una perspectiva teórica y metodológica de corte relacional. Vale recalcar que esta decisión también fue motivada por una aparente generalización de las labores de albañilería y cargos relacionados en las comunidades y grupos familiares de la parroquia de Guangaje. Además, dos importantes estudios realizados en la década de los 80s mostraban que la migración hacia la industria de la construcción en particular dejaba espacios importantes para organizar una estrategia migratoria temporal acomodada a las condiciones económicas, familiares y culturales de los campesinos indígenas (Martínez, 1988; Mauro, 1986), condiciones que valdría revisar en la actualidad. A partir de los resultados allí analizados podremos realizar una evaluación mejor informada sobre aquello que ha cambiado, y aquello que no, de las redes laborales de la construcción durante las últimas décadas.

CAPITULO III: LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA IRRESUELTA CUESTION AGRARIA EN EL ECUADOR: EL CASO DE LA “FRAGMENTADA” PARROQUIA DE GUANGAJE

Aspectos sociodemográficos y territoriales de Guangaje:

Guangaje es una de las seis parroquias que conforman el Cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi. Según el Plan de Desarrollo Parroquial 2006, Guangaje limita al norte con el Cantón Saquisilí, Parroquia Cochapamba (comunidades de Salamalag Grande), al sur con las comunidades de Niño Loma, Casa Quemada que pertenecen a la OSG de Tigua, al oriente con la comunidad de Maca Grande que pertenece a la Parroquia Poaló del Cantón Latacunga y al occidente con las riberas del Río Toachi, que colinda con las comunidades de Cashapata, Anchiquilotoa y Pilapuchín (Tapia, 2006: 2). Con una población mayoritariamente indígena de aproximadamente 8000 personas, según el último Censo de Población y Vivienda, Guangaje registra un crecimiento demográfico cercano al 10% en el período 2001-2010.

La parroquia está compuesta por un total de 36 comunidades de diferente tamaño y origen: comunidades libres, de hacienda y otros grupos familiares instituidos recientemente como comunidades²⁴. La tabla 4 y el mapa 1 muestran la distribución geográfica de las comunidades afiliadas, por un lado, a la UNOIRG y, por otro, al CITIGAD de Tigua.

²⁴ José Manangón, sacerdote salesiano que trabajó en Guangaje durante más de diez años, considera que algunas familias que ahora habitan en la parroquia habrían llegado a asentarse allí a inicios del siglo XX, después de haberse escapado de las haciendas interandinas de Lasso y Latacunga. Supone que al igual que Guangaje también funcionó como una tierra de refugio, similar al caso de Apahua en la parroquia de Zumbahua (Entrevista, Marzo 2012).

Tabla 4: Comunidades de la parroquia de Guangaje²⁵:

Comunidades de Guangaje			Comunidades de Tigua	
COMUNIDAD	No. FAMILIAS	Grupos Familiares Importantes	COMUNIDAD	No. FAMILIAS
Veinticinco de Diciembre	180	Tigasi, Vega	Yatapungo	85
Rompe Ingapirca	40	Toaquiza	Ugshaloma Grande	250
Cashapata	60		Zunirrumi	280
Curinge	45		Niño Loma	132
Salamálag Chico	170	Lutuala, Manzano	Casa Quemada	155
Guayama Grande	40		Chimbacuho	260
Candela Faso	50		Rumichaca	200
Guayama Chuquirapamba	21		Chami	250
San José de Cuadrapamba	26	Ugsha, Lutuala	Quiloa	95
Comuna Guangaje	115	Toaquiza	Tigua Centro	230
Centro Guangaje	128	Tigasi, Manzano	Pactapungo	120
Cochumbo	65	Otto	Calerapamba	63
Tingo Pucará	25	Lutuala, Manzano	Ugshaloma Chico	120
Chugchilan Pamba	30	Chugchilan	Pactapungo	70
Colatipo	27		Huayrapungo	60
Chilcanchi	40			
Ocho de Septiembre	65	Toaquiza, Tigasi		
Anchi Quilotoa	115	Licta		
Hospital	84	Licta		
San José de Rumipamba	73	Guanina, Vega		

²⁵ Como habíamos mencionado con anterioridad para el caso de las comunidades de Tigua, en Guangaje se han venido conformando nuevas comunidades, o más bien nuevas agrupaciones familiares (ampliadas) constituidas legalmente como comunidades, durante los últimos treinta años. Así, la comunidad “Salamalag Chico” se divide en las comunidades de “Candela Faso”, “Chuquirapamba” y “Guayama Grande”; de “Comuna Guangaje” surgen las comunidades “Veinticinco de Diciembre” y “Rumipamba” y “Cuadrapamba”; de la comunidad “Ocho de Septiembre” salen las comunidades “Anchi Quilotoa”, “Rompe Ingapirca”, “Hospital y “Cashapata”; de “Guangaje Centro” surgen las comunas de “Tingo Pucará”, “Chugchilanpamba”, “Curingue”, “Chilcanchi”, “Colatipo” y “Cuchumbo”.

Fuente: Ilaquiche (2004: 48), Plan de Desarrollo Parroquial de Guangaje (2006) y trabajo de campo.

Mapa 1: Distribución geográfica de comunas, Guangaje:



Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico de Pujilí, tomado de Sañay (2010: 11)

Como se ha venido indicando, la situación socioeconómica en Guangaje es en extremo complicada. El mapa 2 muestra el porcentaje de personas pobres por parroquia a nivel nacional. Allí vemos que todas las parroquias de la cordillera occidental, donde se concentra una buena parte de la población indígena en Cotopaxi, presentan una incidencia de la pobreza de entre el 79% y 93% de la población²⁶. Debido a las duras

²⁶ Los mapas fueron elaborados por un grupo de investigadores de la UASB, de manera comparativa y a nivel nacional Ospina et. al. (2011). Tanto las fuentes como las especificaciones metodológicas con las que se analizaron los datos de los Censos nacionales y las Encuestas de Condiciones de Vida, como la forma de medición de la línea de la pobreza, se presentan en Larrea et. al (2011: 17-31).

condiciones ambientales que enfrentan los campesinos en los suelos altos de origen volcánico en esta región de Cotopaxi (Alomía, 2005), así como la escasez de tierras, bajos niveles de precipitación anual, ausencia de sistemas de riego y una alta presión demográfica, los pobladores de esta parroquia se han visto obligados a poner en práctica diversas estrategias migratorias, tanto dentro como fuera del país.

Sin embargo las cifras que arrojan los censos de la población y vivienda parecerían mostrar algo diferente. El gráfico 1 expone las cifras del censo sobre la ocupación por rama de actividad laboral en la parroquia Guangaje entre 2001 y 2010. Se observa que la agricultura sigue siendo la actividad que absorbe a la mayoría de la población masculina y femenina de la parroquia, aunque se registra la tendencia a la feminización de dichas labores. También podemos ver una leve diversificación laboral en las actividades relacionadas con el transporte, comercio, manufactura y aquellas relacionadas con la industria de la construcción. Desagregando un poco más la información de los censos de 1990, 2001 y 2010, vemos que los grupos de ocupación en Guangaje (gráfico 2) siguen siendo mayoritariamente agrícolas, aunque se puede observar una mayor concentración en el grupo de “ocupaciones elementales”, donde se incluyen aquellas personas empleadas en la industria de la construcción, sea en condición de cargadores, oficiales, albañiles, contratistas o en la fabricación de bloques.

Luciano Martínez (2009: 85-88) ha advertido sobre la existencia de ciertas deficiencias en el diseño de los Censos de Población y Vivienda y las Encuestas de Condiciones de Vida realizadas en Ecuador. Dado que las preguntas relacionadas con la ocupación laboral muestran únicamente lo que realizó la persona encuestada la semana anterior al momento en que se levanta el censo, la información obtenida es incapaz de mostrar las complejas condiciones laborales a nivel nacional, especialmente para las poblaciones rurales atravesadas por procesos de migración temporal en empleos informales e inestables²⁷.

²⁷ Aquí es importante anotar un debate implícito alrededor de los “sesgos” de la información censal sobre las actividades laborales del campesino indígena. Aunque se podría argumentar a favor de la incapacidad de los censos por mostrar la realidad laboral de dichos sectores de la población ecuatoriana, Colloredo Mansfeld (2009: 29-32) muestra una suerte de “ética de lealtad para con la tierra” en ciertas comunas indígenas andinas que, aunque obvia a primera vista, resulta sumamente “elusiva” cuando se toman en cuenta las limitaciones estructurales para la economía campesina en tierras de altura. Esto podría explicar también algunos hallazgos de interés en los testimonios recogidos por Kaltmeier (2007) que muestran la capacidad de movilización y organización que tuvo la demanda por la tierra y la defensa de la Pachamama durante el período reformista en Cotopaxi. Como veremos más adelante, este mismo dilema

Para corregir estos sesgos censales, Herrera y Carrión (2012: 135-140) han propuesto utilizar la información disponible sobre la distribución poblacional por grupos de edad como indicadores generales de los procesos migratorios en el campo. Los autores encuentran que a nivel nacional en los sectores rurales:

La población mayor de 40 años tiene tasas de crecimiento elevadas, mientras que la población de jóvenes de 10 a 17 años y de 18 a 29 años ha crecido a un ritmo mucho menor. Los niños y niñas menores de 10 años y los adultos entre 30 y 39 años han disminuido. Lo que permite concluir que efectivamente ha existido una fuerte migración hacia la ciudad, de personas en edad de trabajar con sus hijos. Migran buscando oportunidades de trabajo lo que implica su proletarización. Además, estos datos muestran que efectivamente la población rural está envejeciendo.

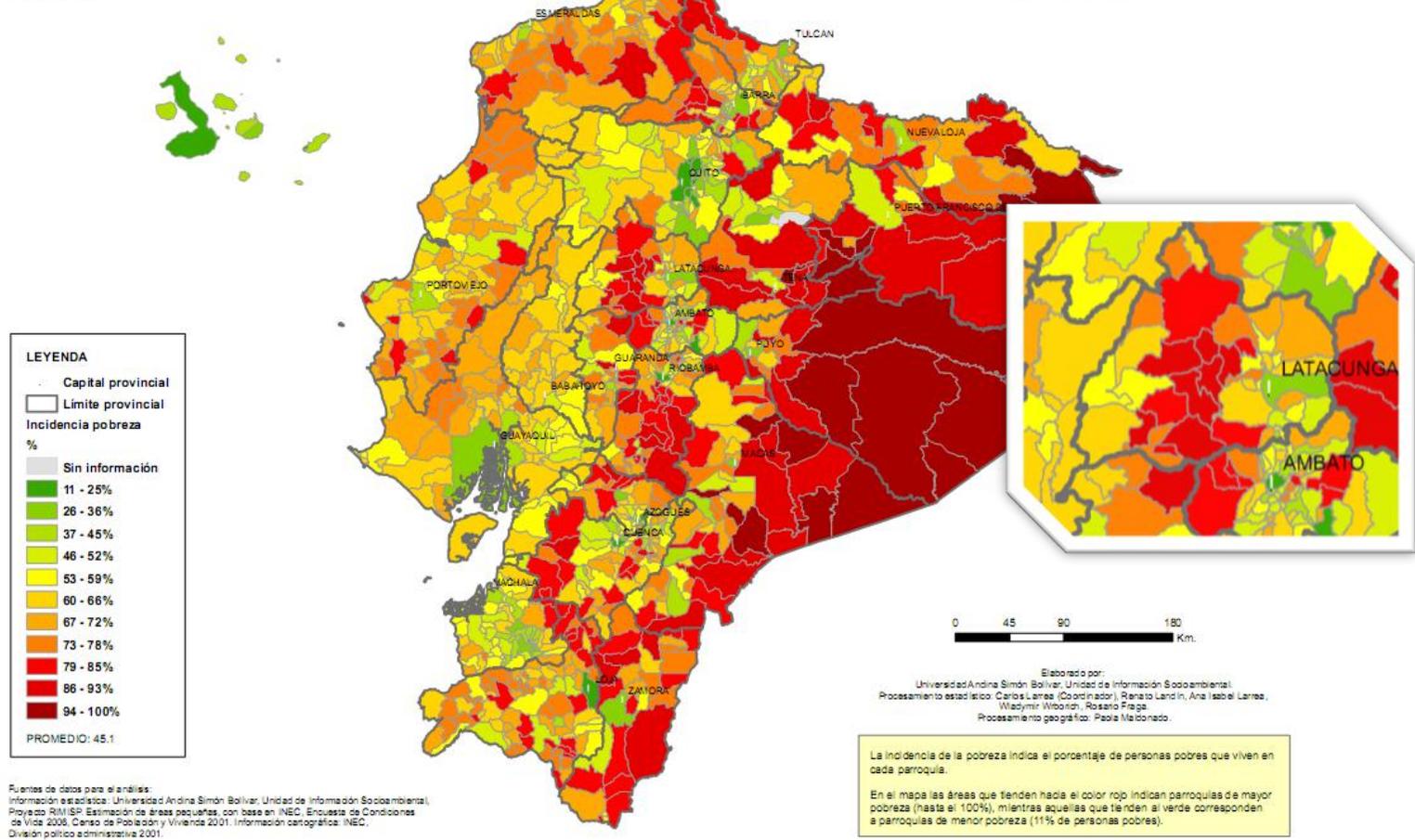
El gráfico 3 muestra las pirámides poblacionales de Guangaje para 1990, 2001 y 2010. Allí se observan estas mismas tendencias: reducción de los grupos poblacionales jóvenes, engrosamiento de los grupos poblacionales de mediana edad y el relativo aumento de las personas de 65 años o más que habita la parroquia.

aparece cuando se les pregunta a los migrantes de la construcción por qué regresan con regularidad a la parroquia de Guangaje.

Mapa 2: Porcentaje de personas pobres por Parroquia, 2001-2006

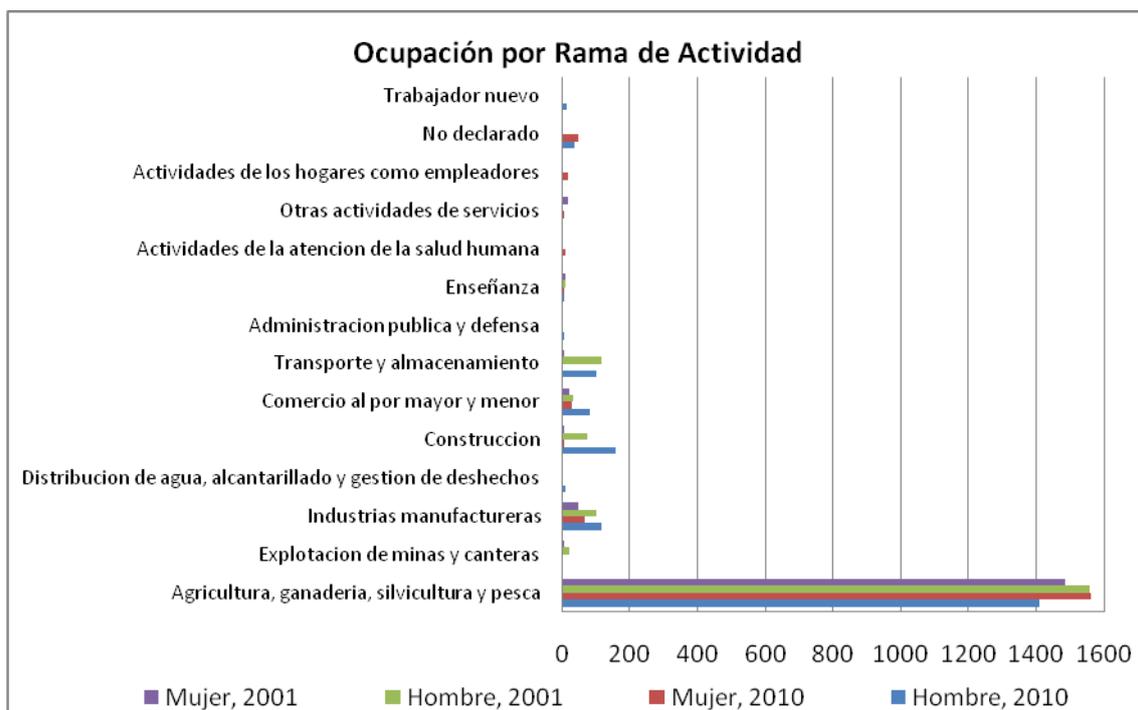


**INCIDENCIA DE LA POBREZA POR PARROQUIAS
(2001 - 2006)**



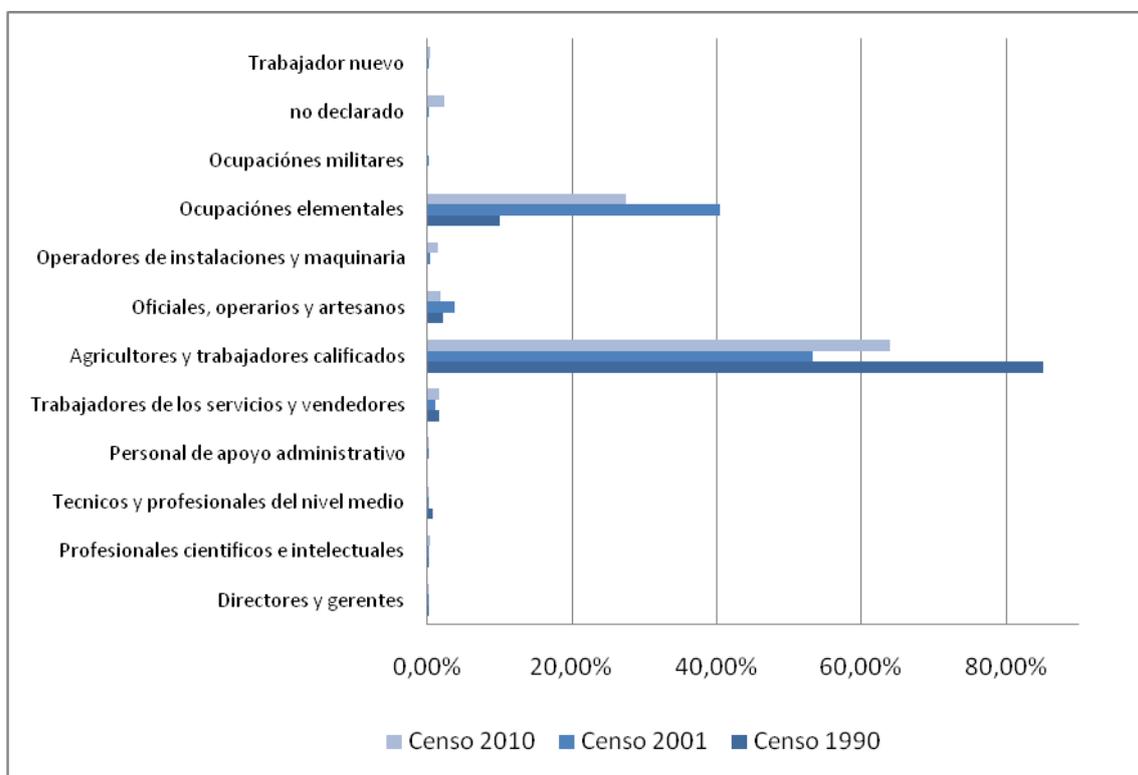
Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, 2012.

Gráfico 1: Ocupación por Ramas de Actividad más importantes en Guangaje



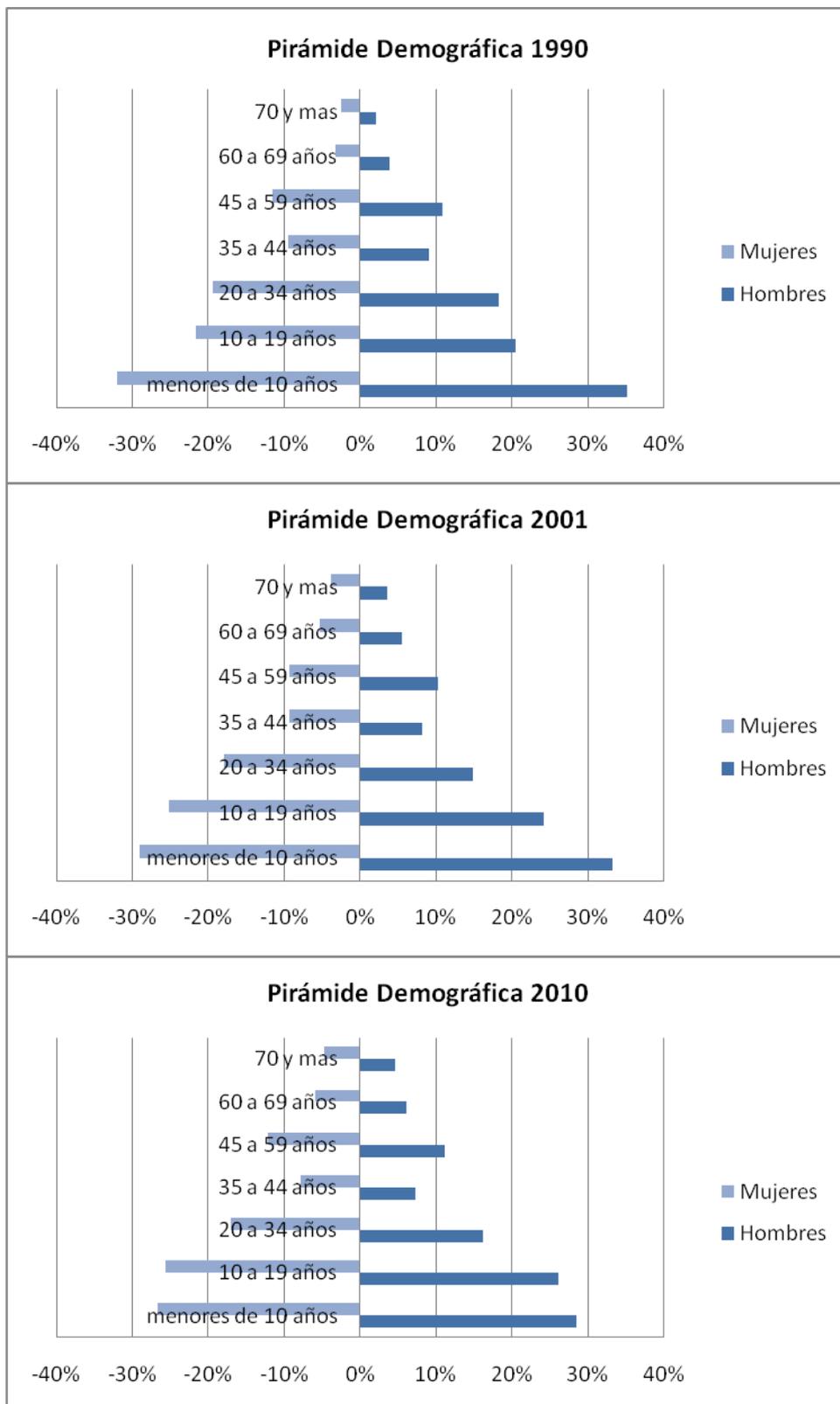
Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010. Procesado Redatam. Elaboración del autor.

Gráfico 2: Empleo por grupos de ocupación en Guangaje, 1990-2010



Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. Procesado Redatam. Elaboración del autor.

Grafico 3: Población de Guangaje por sexo y grupos de edad, 1990-2010



Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. Procesado Redatam. Elaboración del autor.

En definitiva, resulta una tarea muy compleja la de conocer cuántos migrantes temporales de la industria de la construcción residen en Guangaje en la actualidad. Aunque el proceso de inversión de la pirámide demográfica que acabamos de ver también muestra procesos migratorios definitivos, durante el trabajo de campo se pudo constatar que la migración temporal hacia el sector de la construcción es más generalizada y se ha consolidado y ampliado allí donde la economía campesina se ve más limitada, sea por la escasez de tierras, la falta de sistemas de riego, la presión demográfica o la calidad de los suelos ocupados.

En la década de los 80s, momento en el que los procesos migratorios del campesino indígena en la sierra ya estaban avanzados, Luciano Martínez (1988 [1985]) indicaba algunos factores determinantes que deben ser considerados al analizar la diversificación laboral en los sectores rurales. Primero debemos observar la existencia de mercados laborales agrícolas en la región de estudio pues habría una preferencia por parte de los campesinos hacia ellos, a pesar de los bajos salarios que allí se ofrecen (Martínez, 1988: 153-154): además de una pequeña hacienda ganadera bajo administración de la familia Rodríguez Lara en Tigua (que subsiste sin mano de obra de la parroquia), no existen agroempresas importantes en la cordillera occidental de Cotopaxi hoy en día. Frente a ello, podríamos suponer que fueron los mercados laborales urbanos los que fueron capaces de absorber a la población de Guangaje necesitada de recursos para su reproducción.

Martínez también señalaba que las condiciones laborales ofrecidas por el sector de la construcción eran generalmente más apropiadas para sostener una estrategia migratoria temporal y no definitiva, ajustada en ciertos casos a los ciclos agrícolas y las especificidades socioculturales indígenas:

Parece indiscutible que el retorno de los migrantes en muchas comunidades serranas se ajusta a las necesidades del ciclo productivo y a las manifestaciones socio-culturales frecuentemente vinculadas a éste. Pero esto sólo es posible cuando la inserción en el mercado capitalista se realiza en actividades que dejan un pequeño espacio de autonomía para el campesino (como el comercio ambulante, cargadores. etc.) o en actividades "adaptadas" a las condiciones "campesinas" de la mano de obra (sector de la construcción). De ninguna manera esto sería posible en la industria capitalista, así como no es posible en la agroindustria (Martínez, 1988: 161)

Otro estudio acerca de los migrantes temporales de la construcción en Quito realizado durante la década de los 80s confirmaba estas advertencias y añadía otras especificidades sobre la migración temporal de los albañiles indígenas (Mauro, 1986: 112-16). En primer lugar el estudio encontraba que en contextos de escasez de tierras para cultivos y crianza de animales, los migrantes temporales de la construcción mantenían relaciones con sus parroquias de origen “más por la permanencia del núcleo familiar en el agro que por su propia participación en la producción agrícola” (Mauro, 1986: 115).

Las encuestas realizadas en Guangaje confirman la importancia del núcleo familiar para la decisión del retorno de los migrantes de la construcción en la actualidad. En efecto, frente a la pregunta ¿por qué regresa a la parroquia cuando termina sus labores en la ciudad?, la mayor parte de los migrantes de la construcción encuestados en Guangaje respondieron que su regreso se debe primordialmente a la visita de familiares cercanos (madres, padres, hijos). En menor medida otras respuestas mencionaban que su regreso respondía al ciclo agrícola, al reencuentro entre amigos los fines de semana, al “ambiente” social de la parroquia al cual están acostumbrados, por estudios durante los fines de semana e incluso para apoyar a la organización comunitaria y parroquial.

El estudio Mauro (1986) también mostraba dos tipos de flujos migratorios: aquellos más esporádicos y transitorios que respondían en mayor medida al ciclo agrícola, y aquellos que por falta recursos en el agro mantenían una situación de movilidad constante entre el campo y la ciudad. De entre los entrevistados en Guangaje, los únicos que lograban mantener estrategias migratorias esporádicas (por medio del trabajo en bloqueras u obras de construcción durante menos del 50% del año) gracias a los ingresos del propio trabajo agrícola y la crianza de animales menores (sobre todo el cultivo de cebolla y la crianza de borregos), son los comuneros de Salamalag Chico, Candela Faso, Guayama Grande y Chuquiranpamba. Los comuneros de Ocho de Septiembre, Tingo Pucará, Colatipo, Cochumbo, Chilcanchi, Chughchilanpamba, por el contrario, migran casi todo el año para conseguir recursos suficientes para su supervivencia.

Haciendo una aproximación muy general a la situación migratoria en Guangaje, estos hallazgos comparados con la información de la Tabla 4 (número de habitantes por comunidad en Guangaje) podrían mostrar que aproximadamente el 20% del total de

familias en Guangaje en la actualidad tienen más posibilidades de reproducirse en su condición de campesinos, destinando un 50% del año como máximo a conseguir recursos en labores extraprediales. Para el 80% de familias restantes la diversificación ocupacional, la migración y la pequeña producción agropecuaria para autoconsumo representan las principales fuentes de recursos y alimento durante la mayor parte del año.

Una de las diferencias más importantes entre el estudio de Mauro (1986) y la información recopilada en Guangaje es la paulatina profesionalización de un grupo de comuneros locales que lograron ascender al rango de Maestro Mayor o Maestro Contratista. En los 80s, por el contrario, se problematizaba alrededor del “peregrinaje” de obra en obra y las prolongadas esperas en plazas y avenidas en el centro de la ciudad de Quito que los obreros de la construcción debían realizar para conseguir empleo (Mauro, 1986: 113). Aunque esto sigue siendo cierto para los comuneros que consiguen empleo en la fabricación de bloques, pues buscan trabajo disponible deambulando por los barrios de San Felipe, Cuatro Esquinas y La Calera en la ciudad de Latacunga o en Salcedo, en la actualidad hay un mayor número de maestros mayores o contratistas residentes en la parroquia que movilizan mano de obra mediante la utilización de lazos sociales como el parentesco, compadrazgo, de vecindad, etc.

Incluso con ayuda de la telefonía celular, este grupo de maestros mayores y contratistas locales funcionan como eslabones fundamentales de una amplia red laboral por medio de las cuales los ingenieros o arquitectos consiguen mano de obra de la parroquia. A su vez, estas nuevas facilidades han aumentado el número de ciudades en las cuales los obreros de la construcción consiguen trabajos. Mientras que en la década de los 80s la ciudad de Quito era el principal destino para los obreros de Cotopaxi, los comuneros de Guangaje, durante el 2011, viajaron mayoritariamente a Quito, Latacunga y Ambato, aunque varios encuestados comentaron haber trabajado por un tiempo determinado en ciudades como Lago Agrio, Guayaquil, Loja, Santo Domingo, Machala y en la provincia de Los Ríos.

En Guangaje es interesante observar la forma en que se distribuyen los maestros mayores contratistas por comunidades. Como veremos posteriormente, los lazos fuertes son los que predominan en las redes de la construcción, por lo que el número de maestros mayores que viven en cada comunidad nos puede dar una primera idea de las

posibilidades que tiene cada sector de la parroquia de acceder a estos trabajos. La tabla 5 muestra el número de maestros mayores en doce comunidades de Guangaje. La tercera columna muestra la relación entre el número de familias y el número de maestros por comunidad. Vemos pues que comunidades como Salamalag Chico, Comuna Guangaje Candela Faso (aquellos con mayores oportunidades agrícolas en las tierras que ocupan) tienen un *ratio* bajo en comparación con comunas como Anchi Quilotoa, Tingo Pucará, Chugchilán Pamba o Cochumbo (aquellos obligados a migrar más del 50% del año). Llama la atención los casos de la comunidad Chilcanchi (una de las comunidades con indicios de pobreza y envejecimiento poblacional), donde hay un reducido número de familias y ningún maestro mayor que viva dentro de la comuna, y el de Centro Guangaje, el espacio más urbanizado y diversificado de toda la parroquia, que no muestra una alta concentración de maestros mayores residentes.

Tabla 5: Número de maestros contratistas en doce comunidades de Guangaje

Comunidad	No. Familias (a)	No. Maestros Mayores (b)	(a)/(b)
Chilcanchi	40	0	-
Salamalag Chico	170	2	0,01
Centro Guangaje	128	2	0,02
Comuna Guangaje	115	2	0,02
Candela Faso	50	1	0,02
Cochumbo	65	2	0,03
Chugchilán Pamba	30	1	0,03
Tingo Pucará	25	1	0,04
Anchi Quilotoa	115	5	0,04
Ocho de Septiembre	65	3	0,05
Colatipo	27	2	0,07
San José de Cuadrapamba	26	2	0,08

Fuente: trabajo de campo, elaboración del autor

Un segundo factor que explica la mayor o menor vinculación a las redes de la construcción tiene que ver con el tipo de relaciones sociales que permiten a un comunero acceder a estos trabajos. Frente a la pregunta ¿cómo consiguió su primer trabajo como oficial, albañil o bloquero? el 39,2% y 35,7% de los encuestados

respondieron que fue gracias a la ayuda de un familiar cercano (padre, hermano) o un representante de su familia ampliada (tío, suegro, primo), respectivamente. El 17,8% comentó que fue gracias a la ayuda de un amigo, sea de otra comunidad u otra parroquia aledaña a Guangaje, mientras que una minoría, el 7%, comentó que lo hizo buscando por su cuenta en la calle 24 de Mayo.

Para el caso de los bloqueros, por el contrario, la forma en que normalmente se consigue trabajo es deambulando por los barrios de San Felipe, La Calera o Cuatro Esquinas en la ciudad de Latacunga a la expectativa que algún dueño o dueña de estos establecimientos los contrate. Lo que también es cierto para los bloqueros es que este “deambular” nunca se lo realiza solo. Las encuestas y una serie de observaciones realizadas en estos barrios mostraron que casi todas las personas que trabajaban en bloques, muchas de las cuales son mujeres, salen a las bloqueras en compañía de familiares cercanos. Esto se debe a que el salario en las bloqueras es directamente proporcional al número de quintales producidos por día, pero inversamente proporcionales a la cantidad de personas dedicadas a su fabricación. Las cuadrillas de tres personas son las más comunes (compuestas normalmente por madre, padre e hijos) pues logran dividir las funciones necesarias para la producción de bloque de la manera más eficiente posible.

A diferencia de lo que intuía Mark Granovetter, para quien los lazos débiles son indispensables para conseguir trabajos, estos datos muestran una buena parte de los obreros de la construcción hacen uso de ciertos lazos fuertes, sean de parentesco o amistad, al interior de la parroquia e incluso en otras parroquias aledañas. Esto responde no solo a cuestiones culturales propias del mundo andino, donde la familia ampliada (el *ayllu*) mantiene una importancia fundamental en las estrategias de reproducción de los campesinos/albañiles. También responde a las funciones propias del Maestro Mayor, quien debe administrar y coordinar una cuadrilla de obreros en cada obra según las directrices del ingeniero o del arquitecto. Para éste resulta mucho más fácil y conveniente trabajar con familiares o amigos cercanos por dos razones: la confianza entre obreros y maestros tendería a ser mayor mientras más fuertes sean los lazos, lo que agilizaría la transmisión de órdenes en la cadena de mando marcadamente vertical ingeniero-maestro mayor-albañil. Por otro lado este tipo de lazos también permite que el

prestigio de ser maestro mayor no se acabe con la obra, sino que se prolongue a la cotidianidad de la parroquia y la comuna.

Hasta aquí hemos visto que la situación actual de la parroquia de Guangaje es en extremo complicada para sus habitantes. La aridez y las condiciones geográficas, las cantidades ínfimas de tierra productiva, escasez de agua, etc., han obligado al 80% de las familias a buscar estrategias de reproducción extraprediales, procesos que se inicia desde el momento mismo de disolución de las relaciones hacendarias. A pesar de ello asombra que las estadísticas nacionales muestren a esta zona eminentemente campesina. Lo que esto puede demostrar es que a pesar de la posición marginal de los “campesinos” de Guangaje y sus limitados activos productivos para las labores agrícolas, persiste un importante vínculo simbólico con la tierra y una identidad local campesina que va más allá de lo productivo/económico.

Pero también es evidente que dichas condiciones han provocado, con el pasar de los años, la profesionalización de una buena parte de la población masculina de la parroquia, lo cual ha acelerado y acentuado procesos de diferenciación interna, tanto dentro de las comunidades como entre ellas. La figura del Maestro Mayor es central en la actual configuración social de muchas comunidades de Guangaje, y como veremos a continuación la relevancia de este actor no solo se sostiene en sus capacidades de coordinación económica en el sector de la construcción, sino también en su posición de prestigio local, lo que les convierte en actores sumamente relevantes y referenciales durante momentos conflictivos de la localidad. Aunque los bloqueros también representan un grupo laboral importante y donde hay mayor presencia femenina, parecería que las condiciones mismas del trabajo impiden que personas de la localidad adquieran cargos de coordinación y movilización de la fuerza de trabajo. Son de hecho los dueños de las bloqueras, en su mayoría mestizos asentados en barrios periurbanos de ciertas ciudades del callejón interandino, quienes detentan el grueso de estas capacidades.

El siguiente acápite muestra experiencias de vida de cuatro maestros mayores de la parroquia de Guangaje. Con estos testimonios se intentará dar una idea más clara de las maneras y las exigencias para que un oficial ascienda al cargo de maestro mayor, así como de la configuración de las redes laborales que se tejen en la construcción. El análisis de dichas redes nos permitirá observar los factores estructurales de la

diferenciación social entre los trabajadores de la construcción, pero sobre todo nos dará una idea del proceso histórico, social y económico a través del cual ha sido posible para muchos sostener estrategias familiares de reproducción en un contexto de alta movilización interna de la fuerza laboral.

Las redes de la construcción a través del tiempo: experiencias de vida de cuatro maestros mayores de Guangaje.

Juan Augusto Tigasi, 61 años, comuna Guangaje Centro.

Juan Augusto migra a Quevedo por primera vez a los 15 años (en 1966), ocupándose primero como limpiador, luego como cargador de maíz, plátano o trabajando en empacadoras. En Quevedo trabaja por cuatro años. Lo hizo acompañado de seis amigos de Guangaje Centro. Alfonso, el mayor de entre ellos, ya había migrado al occidente con anterioridad, y fue él quien les avisó de estas oportunidades laborales.

Me fui siguiendo a un amigo que se llamaba Alfonso, él nos llevó a Quevedo [...] él trabajaba ya, era mayor que mi entonces trabajaba en Quevedo y yo le pedí de favor que lleve a Quevedo. Primero andaba lavando ollas, no comprendía lo que hablaban [por allá] (Entrevista J.A.T, 2012).

Por la muerte de un amigo en Santo Domingo, y por temor a amenazas que recibió de los familiares del difunto, viaja a Quito. Su tío Camilo trabajaba en minas de arena al sur de la ciudad de Quito, en Chillo gallo. Allí trabajó por algún tiempo, hasta conocer a “contratistas” que le permitieron conseguir empleo en otras partes de la ciudad. Siempre estuvo trabajando con “paisanos” de la parroquia, aunque recuerda también que compartió tiempo con comuneros de Cayumbo, Otavalo e incluso con algunos migrantes colombianos. Cuatro años después se acabó el trabajo en la mina, lo que le obligó a buscar oportunidades laborales en la construcción, recorriendo la avenida 24 de Mayo. Encontró oportunidades de empleo como oficial en diferentes obras durante 2 años, en compañía de “conocidos de la 24”, hasta ascender al cargo de “chupi” albañil (medio albañil). Dos años después asciende a albañil y siguió trabajando en este cargo

durante cuatro años más. Juan Augusto comenta que a pesar de haber aprendido todos los oficios propios del Maestro Mayor, el ascenso a esta posición era muy difícil.

JAT: En esa temporada los maestros [mayores] antiguos eran muy bravos. Quería todo estricto, que no tenga ninguna falla. Hablaba demasiado malas palabras, [nos decía] indios no se qué! entonces tenía miedo.

Entrevistador: ¿los maestros mayores antiguos eran indígenas o mestizos?

JAT: no, no ha de haber nacido tan mestizo. Con los maestros conocidos me decían que era albañil, pero con los desconocidos de la 24 yo era chaupi, porque todavía no sabía asentar pisos, solo por eso (Entrevista J.A.T, 2012).

Tiempo después consiguió trabajo con un maestro conocido cerca al centro de Quito, construyendo la casa de un hacendado de Machachi. Allí, por primera vez, pidió al maestro mayor que le permitan trabajar a su hijo mayor (Wilfrido) de 13 años, por la mitad del sueldo que recibían los adultos. Poco después, por órdenes del dueño de la obra quien prefería no tener niños en la construcción, sale nuevamente a buscar trabajo con su hijo a la 24 de Mayo. Allí consigue entrar en una obra a cargo de un maestro desconocido que, después de poco tiempo de haber empezado con las labores, abandona la obra. Según Juan Augusto, para ese entonces él ya había aprendido, a cuenta personal, a leer planos y a realizar labores técnicas propias de un maestro mayor. Por primera, el dueño de la obra le ofrece a Juan Augusto administrar la construcción entera como maestro mayor, cuando tenía aproximadamente 28 años.

Entrevistador: ¿cómo ha aprendido el oficio de la albañilería?

JA: solitos [...] hay que estar pilas, al rato de ver a los ingenieros, estar pilas. Ahí se graba enseguida. Entonces cuando se va el ingeniero uno ya puede [...] a veces ya me da vergüenza andar cargando el plano, ya le veo que escala es y ya se en mi mente en que escala trabajamos. (Entrevista J.A.T, 2012).

Con la experiencia y los contactos adquiridos en ésta obra el nuevo cargo de Juan Augusto estuvo asegurado. Poco después consigue más oportunidades como maestro mayor en obras de alcantarillado y colectores de agua para la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable, donde conoció a un ingeniero con quien logró solidificar

sus lazos por medio del compadrazgo. El ingeniero se convirtió en el padrino de su hija Silvia, y desde ese momento su trabajo como maestro mayor estuvo enfocado en obras de alcantarillado y colectores de agua en Quito y sus alrededores por más de 15 años. Su hijo Wilfrido, quien lo acompañó en el trabajo desde los 13 años, se convirtió en Maestro Mayor rápidamente gracias a la guía y a los contactos que su padre fue construyendo desde que empezó a trabajar en la capital, cuando tenía 24 años. Para las nuevas generaciones, sobre todo para aquellos con parientes cercanos que sean Maestros Mayores, el ascenso a esta posición es mucho más asequible.

Los maestros hoy en día cogen valija y ya están siendo maestros mayores. Ahora hay maestros mayores bastantes, por eso en los trabajos hace falta gente. Hay algunos que salen bien otros salen mal. Todos hacen maestros mayores, llevan a la gente de un lado a otro lado y ya no abastece. Antes cuando peleaban aquí con la misma cara tocaba estar en Quito, no podían apartarse a otro lado. Ahora sí, se apartan [porque es más fácil conseguir trabajo con otras personas] (Entrevista J.A.T, 2012).

Algo interesante de la experiencia de vida de Juan Augusto es su vinculación con cargos políticos en Guangaje. Tanto él como cuatro comuneros más de Guangaje Centro fueron los primeros que consiguieron títulos de educación primaria. Poco después de obtenerlo, en la década de los 80s, Juan Augusto y los otros cuatro comuneros se vincularon por un tiempo con el partido Social Cristiano y un abogado quiteño que les propuso que alguno de ellos se convirtiera en el primer Teniente Político indígena de Guangaje. El día de la elección Juan Augusto no pudo salir de una obra en Quito en la que estuvo trabajando, porque el ingeniero así lo dispuso. De ahí en adelante no tuvo relaciones importantes con otros partidos políticos, hasta que a partir de 1990, por la insistencia de su consuegro (representante de la UNOIRG), participó en algunos levantamientos indígenas en Cotopaxi. Para 1994, con la ayuda de su hijo Wilfrido, se convirtió al cristianismo, y desde ese momento dejó de lado cualquier tipo de vinculación política en la parroquia.

JAT: Hablando de verdad, yo era muy buscón, hasta los 22 años no era alcohólico. Hasta los 42 años caí en el vicio [...] Al que me buscaba le daba duro, hasta los curas, al teniente político. Agradezco a mi hijo mayor Wilfrido Tigasi [...] él me puso en el camino, me decía Papa no vale tomar, no vale pegar a mamita, no vale pelear entre

familiares [...] con mi consuegro Juan Tigasi por lo mismo pasamos. La iglesia no se compromete con la política, la iglesia somos cada uno de nosotros, nuestros cuerpos.

Entrevistador: ¿y qué opina del Movimiento Indígena y Pachakutik?

JAT: Somos indígenas, somos del campo pero no somos cómplices. Dicen no robar, no mentir, pero no cumplen [...] en un levantamiento [en 2001, contra el aumento del precio del gas y transporte] nos cogió los policías, quisieron dar duro. En los levantamientos no se puede ni comer tranquilo, fue duro eso [...] ahí estuve sin trabajo, por eso participé.

Entrevistador: ¿de los otros maestros mayores de Guangaje que usted conoce, sabe si alguno se ha dedicado a la política?

JAT: maestros mayores no, mi hijo [Wilfrido, también maestro mayor] mismo no quiere porque él directamente salió para Teniente Político, porque a veces mi hijo gana más entonces no quiere. (Entrevista J.A.T, 2012).

Segundo Guanina, 48 años, Centro Pucará.

La experiencia laboral de Segundo Guanina (SG) es algo parecida a la de Juan Augusto. Empezó a trabajar a los 12 años, cuando su tío materno, un oficial que trabajaba en Quito, le llevó a su primera obra. Durante siete años desempeñó las labores de un oficial. Para él fue algo común buscar sus primeros trabajos en la 24 de Mayo o pasando por las obras preguntando a los maestros por oportunidades de empleo. Eventualmente logró construir lazos de amistad con un maestro mayor que conoció en la 24 de Mayo, con quien trabajó aproximadamente cinco años más como albañil y segundero. Gracias a su guía y enseñanzas, SG consigue ascender a la posición de maestro mayor a los 24 años de edad.

SG siempre se ha visto interesado por la organización de su comunidad y de la parroquia. Aunque pasa gran parte del año trabajando en la construcción, siempre que puede asiste a las reuniones de la UNOIRG. Una de las aspiraciones de MT es la de dejar de trabajar en la construcción (pues considera que se corren muchos peligros y a su edad ya debería descansar) y empezar a trabajar más de cerca en la Parroquia.

Algún día [quisiera] estar en Junta Parroquial como Concejal. Quisiera trabajar en la organización como dirigente. Aquí la gente me conoce

como persona honesta. Yo si trabajara para Guangaje, por bien de todos (Entrevista S.G., 2012).

Según lo comentado por SG, él conoce a aproximadamente veinte ingenieros y arquitectos con los que trabaja con cierta regularidad. De entre todos ellos, Segundo solo ha generado relaciones de compadrazgo con uno, a pesar de tener cuatro hijos, tres de cuales son varones con mayores y mejores oportunidades de ascenso. Siempre ha preferido “llevar a su gente” a las obras y solo quisiera que uno de sus hijos, el mayor, se dedique a trabajar en la construcción. Para el resto de sus hijos SG comentó que preferiría que consigan otros trabajos, en mejores condiciones y menos riesgosos.

Alberto Ugsha, 39 años. Comunidad Colatipo

La experiencia de Alberto Ugsha es sumamente importante, porque se convirtió a partir de 2009 de un albañil con altas posibilidades de ascenso a maestro mayor, en un importante dirigente comunitario y parroquial. Alberto empieza a trabajar desde los 14 años (desde 1987). Su primer trabajo lo consiguió con su tío, en obras de alcantarillado en Quito. Poco tiempo después trabajó 2 años en el barrio de La Colmena, en el centro de Quito. Este trabajo lo consiguió con un grupo de amigos de la escuela, esperando por contratistas en la Av. 24 de Mayo. Trabajó dos años más con un amigo de la Colmena como oficial, para luego regresar a Latacunga a trabajar en la fabricación de bloques, durante 7 años. Regresa a Quito para trabajar en obras de alcantarillado, esta vez con “compañeros” de Guangaje que ya habían ascendido a Maestros Mayores.

Tanto tiempo trabajé. Casi seis años trabajé aquí en Latacunga. Y después me regresé así mismo a Quito, y me fui a trabajar así mismo en alcantarillado. Ahí si me fui con unos compañeros de nuestra tierra mismo que ya eran maestros mayores en ese trabajo. Ya contrataban [...] Estando en ese trabajo me invitó un compa de Ibarra, para trabajar en condominios en la mitad del mundo, en Quito. Ahí me entendí en todo el tema de la construcción [...en estos trabajos] me pusieron de albañil, pero pagaban como chaupi, no ve que algunos maestros son vivos, ellos le hacen pasar como albañil pero el resto sacan ellos. (Entrevista A.U., 2012).

Como vemos, Alberto fue aprendiendo el oficio de oficial y albañil en cada oportunidad laboral, y de manera informal. Con el pasar de los años Alberto fue conociendo algunas

personas vinculadas a la industria de la construcción, tanto de Latacunga como en otras provincias de la Sierra Centro Norte. Finalmente, durante un período de cuatro años, trabajó para el Fondo de Salvamento del Municipio de Quito.

En el 2009, y por primera vez en su vida, es candidato para ocupar la presidencia de la comunidad de Colatipo. Su experiencia política comienza como dirigente de la comunidad durante dos años (2007-2009), para luego pasar a convertirse en el presidente de la Unión de Organización Indígenas Rumiñahui de Guangaje (UNOIRG) durante el período 2009-2012. Y es a poco tiempo de ascender al cargo de Maestro Mayor cuando decide vincularse a la organización de la parroquia.

A.U.: La gente me proponía que sea dirigente [en el 2007]. Me puse a pensar como en el trabajo [en la construcción] yo como responsable debía ordenar y coordinar a la gente.

Entrevistador: ¿para ese entonces usted ya había ascendido a la posición de Maestro Mayor?

A.U.: iba a ser ya. Solamente faltaba un poquito de experiencia. Pero yo ya dirigía todo el trabajo, solo manejar el dinero me hacía falta [...para algunas obras] a nivel de Guangaje me llevaba 20, 30 personas. Entonces tenía que pensar como dirigente que tengo qué hacer, qué necesidad de la comunidad, qué tengo que priorizar [...] (Entrevista A.U., 2012).

Algo interesante que mencionó Alberto durante la entrevista es que no fue su posición diferenciada en la jerarquía de la industria de la construcción lo que motivó su vinculación con la presidencia de la comunidad y de la UNOIRG. Alberto comentaba que fue más importante su pertenencia a la Iglesia Adventista de la parroquia de Guangaje. Vale mencionar que además de Alberto, los dos últimos presidentes de la UNOIRG, así como el actual teniente político, también formaban parte de esta Iglesia antes de vincularse a la organización parroquial.

Me integre a la iglesia Adventista, ahí estuve casi unos 14 años. Ahí la gente ha conocido mi carácter, mi actitud. Ahí conocieron quien soy [...] (Entrevista A.U., 2012).

Pero cuando ingresó a trabajar en la política se desvinculó de la Iglesia casi de inmediato. La explicación ofrecida por Alberto de esta separación, que también ocurrió con los dos últimos presidentes de la UNOIRG, fue que durante la “vida social” de la política hubieron ciertas presiones, como el consumo de alcohol y la participación activa y pública en fiestas, que le impidieron seguir con los requisitos éticos y morales de la Iglesia Adventista.

Con respecto a los lazos fuertes construidos en las redes de la construcción, Alberto comentó que para él nunca fue necesario dar continuidad al “ritual” de la conformación de relaciones de compadrazgo, algo que considera propio de su cultura y de las prácticas sociales de sus antepasados. Hasta el momento, aunque Alberto se conocía con dos arquitectas y cinco ingenieros que le ofrecían oportunidades laborales con cierta regularidad, con ninguno de ellos consolidó relaciones de este tipo.

Juan Julio Toaquiza, 28 años. Comunidad Tingo Pucará.

La experiencia de Juan Julio en los oficios de la construcción ha sido distinta a las que hemos revisado hasta aquí. Su primer trabajo lo consiguió cuando tenía 16 años. Su hermano mayor (ahora tiene 36 años) le llevó a trabajar como peón en una obra en la que él estaba en la posición de albañil. Su primer trabajo fue al norte de Quito, en la construcción de una vivienda. Su hermano también le enseñó el oficio con el pasar del tiempo, pero ambos tuvieron la oportunidad de estudiar en la Universidad Técnica de Ambato ciertas habilidades técnicas, como la lectura de planos, gracias al auspicio de un arquitecto cercano a su hermano²⁸. Después de haber trabajado por dos años como albañil, Juan Julio asciende a maestro mayor cuando su hermano le delega una de las obras que estaba manejando, a la temprana edad de 18 años.

La forma en que Juan Julio recluta trabajadores para las obras es similar a la utilizada por otros maestros mayores:

Entrevistador: ¿solo contrata a familiares o amigos para las obras, o consigue trabajadores de otra forma?

²⁸ Juan Julio no mencionó la ayuda que recibieron por parte del arquitecto para estudiar en la Universidad Técnica de Ambato durante la entrevista. Fueron un grupo de compañeros de trabajo que comentaron esta particularidad de la experiencia laboral y educativa de Juan Julio, durante un almuerzo informal en una obra en la ciudad de Latacunga.

JJ: Solo contrato familiares. Aquí mismo casi todos son familia, *algunitos* nomás no son. Les digo vamos a trabajar y vamos [...] (Entrevista J.J.T., 2012).

A diferencia de los otros maestros, Juan Julio no tiene compadres en la construcción, ni con ingenieros ni con compañeros de menor rango. Para él, los compadrazgo cada vez son menos comunes, cada vez hay menos obreros interesados en fortalecer sus vínculos con personas mejor posicionadas en las redes de la construcción.

Por otra parte la forma de conseguir trabajos para Juan Julio es algo diferente a las que hemos revisado hasta aquí. Los contactos para conseguir nuevos trabajos aparecen en las mismas obras, y aunque tiene ingenieros y arquitectos conocidos no siempre son ellos quienes le avisan sobre oportunidades laborales.

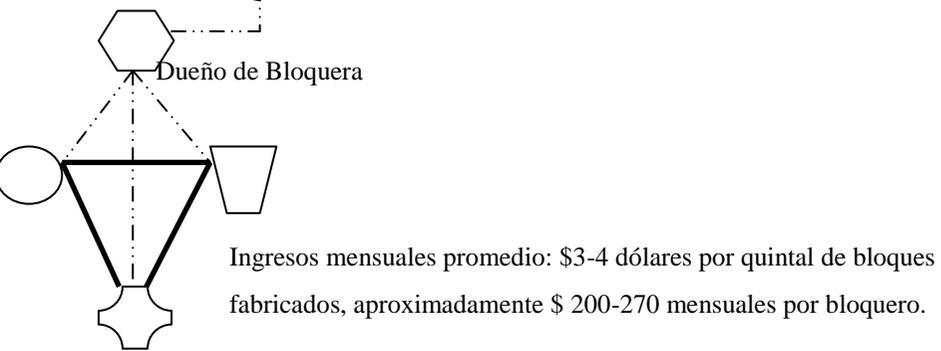
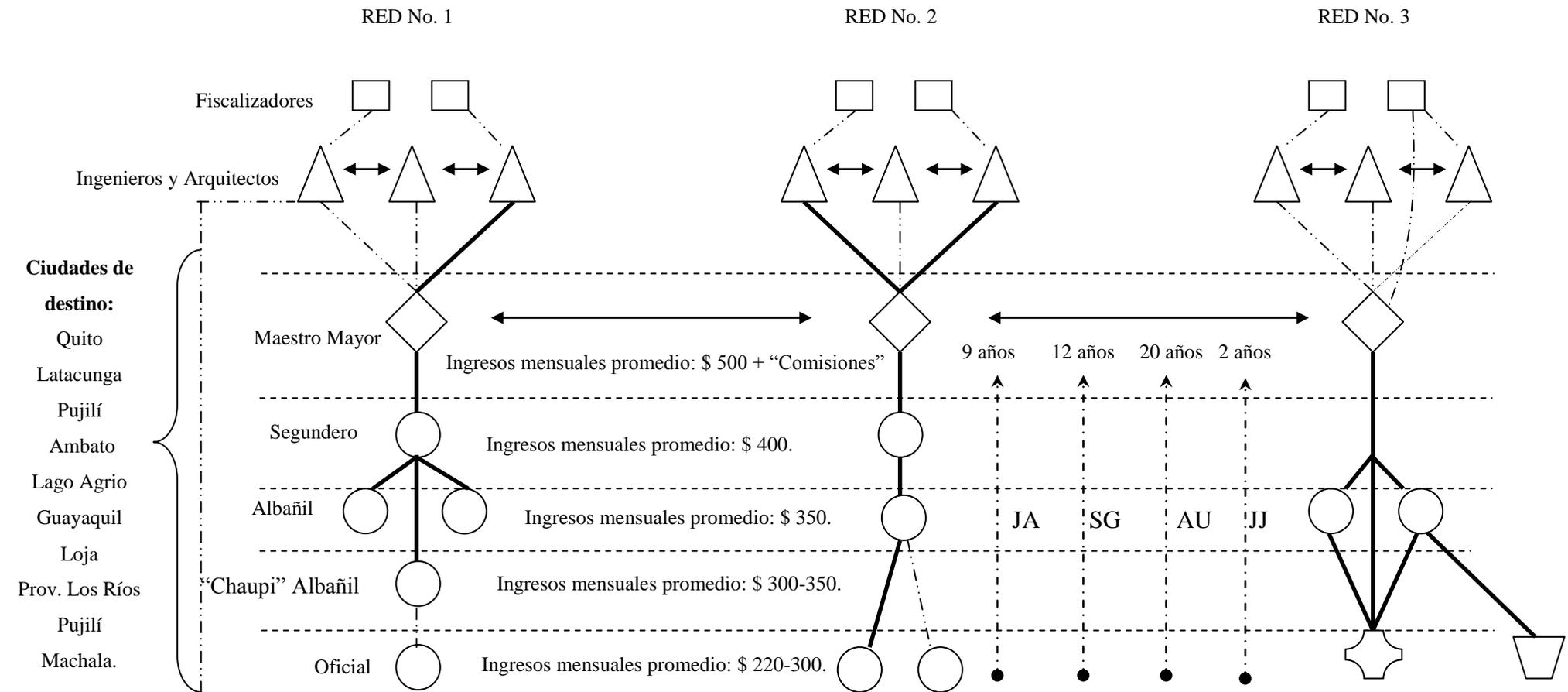
Los ingenieros cuando se acaba la obra vienen [a buscarme]. Los fiscalizadores [también]. Ellos me llevan nomas diciendo venga por aquí, por acá. Aquí mismo el fiscalizador me quiere llevar a Cuenca, si no se consigue más de ley toca ir. (Entrevista J.J.T., 2012).

También resulta interesante que aunque Juan Julio tenga una posición importante dentro de las redes de la construcción, espera que sus hijos puedan estudiar y conseguir trabajos en otras labores. Para él, sin embargo, el trabajo en la construcción será su principal fuente de recursos “hasta que coja la muerte”. Juan Julio nunca se ha involucrado en actividades políticas en la comunidad, en la parroquia o fuera de ella, aunque recuerda haber participado en un levantamiento (no recordaba cuál exactamente) hace aproximadamente diez años.

Jerarquías, lazos y conflictos en las redes de la construcción.

Una de las ventajas de la metodología de redes es que nos permite visualizar los campos sociales y a los respectivos vínculos por donde se generan interacciones de diverso tipo. A continuación se presentan las gráficas de las redes de la construcción que se han venido describiendo en el presente capítulo, así como las posiciones diferenciadas (en jerarquías descendentes) y los tipos de vínculos que se generan entre los nodos de la red. También se incluye una descripción del funcionamiento general de

las redes y de los conflictos que en ellas se producen. Aunque no se pretende incluir todos los nodos, vínculos y conflictos posibles dentro de las redes de la construcción, la siguiente gráfica nos ayudará a visualizar y observar con mayor detalle cómo se estructura el campo social de los obreros de la construcción.



	FISCALIZADOR		RELACIONES DE COMPETENCIA
	ARQUITECTO		VINCULOS DEBILES
	MAESTRO MAYOR		VINCULOS FUERTES
	HOMBRE		ASCENSO LABORAL
	MUJER		MENORES DE EDAD
	DUEÑO DE BLOQUERA		

La gráfica muestra tres tipos ideales de redes interpersonales por medio de las cuales los obreros de la construcción en Guangaje movilizan a trabajadores desde la parroquia a las ciudades y coordinan las actividades en las obras. Las redes no. 1 y no. 2 se asemejan a aquellas descritas por las experiencias laborales de Juan Augusto, Segundo y Alberto. Por su parte la red no.3 recoge en mayor medida la experiencia de Juan Julio, el joven maestro mayor. Se incluye un estimado de los ingresos mensuales que cada uno de los cargos detallados puede ofrecer, así como una red típica en la fabricación de bloques.

Todas las redes se asemejan en tanto están conformadas mayoritariamente por lazos fuertes, sea de parentesco, compadrazgo o amistad. Además todas estas redes son marcadamente jerárquicas: los fiscalizadores mantienen relaciones débiles con los ingenieros, quienes a su vez dirigen todas sus instrucciones al maestro mayor, quien está encargado de coordinar por completo el trabajo de los segunderos, albañiles y oficiales en la obra. Por último en todas estas la presencia masculina es la dominante, aunque también en ciertas circunstancias pueden estar vinculadas a ellas tanto mujeres como menores de edad.

Pero también hay diferencias claras entre ellas. La primera es la cantidad de tiempo invertido en el ascenso dentro de las obras. Tanto Juan Augusto y Segundo tuvo que trabajar entre nueve y doce años para ascender desde la posición de oficial a la de maestro mayor. El caso de Alberto muestra un tiempo de ascenso de casi 20 años, aunque habría que considerar el prolongado período en el que se dedicó a trabajar exclusivamente en la fabricación de bloques. Para Juan Julio, en cambio, el tiempo necesario para el ascenso fue muchos menores (dos años), sobre todo por la ayuda de su hermano que ya había acumulado experticias del oficio del maestro mayor y, sobre todo, relaciones interpersonal clave en las redes de la construcción. Este gráfico también muestra que los lazos débiles son importantes para que los maestros mayores sigan consiguiendo oportunidades laborales, algo que mencionaron todos los entrevistados: la red No. 3 muestra que los maestros mayores, a diferencia del resto de obreros de la construcción, mantienen un amplio rango de lazos no necesariamente fuertes con arquitectos, ingenieros e incluso con los fiscalizadores, lo cual aumenta sus posibilidades de conseguir empleo con cualquier arquitecto conocido que lo requiera.

En la red No.3 se incluye un eslabón que queda fuera de las jerarquías propias de la construcción: durante las visitas a una obra que estaba siendo comandada por Juan Julio en Latacunga, pude constatar que la persona encargada de alimentar a todos los obreros (y de vez en cuando a los mismos ingenieros o arquitectos encargados de la obra) era la esposa de uno de los albañiles de Guangaje. Ella no recibía ningún salario por su trabajo, aunque la pareja albañil-esposa si ganaban una comisión (entre 40-50 dólares al mes) por las labores realizadas en la cocina y la limpieza del dormitorio común en la obra.

Las encuestas realizadas en Guangaje incluyeron dos preguntas abiertas para determinar los problemas y las expectativas que se generan al interior de las redes de la construcción. Con respecto a los problemas experimentados en las obras, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a oficiales y albañiles de Guangaje fueron ambiguos: el 33% de las respuestas indicaron que el principal problema se origina por los atrasos en los pagos de salarios a los obreros de la construcción por parte de “ingenieros que no cumplen”, mientras el 27% de las respuestas aseguraban que no han tenido ningún tipo problema. El 24 % de las respuestas indicaban que hay temor de accidentes, problemas de salud personal y cansancio físico constante por el trabajo en la construcción. El resto de respuestas mencionaban que hay problemas derivados de la incertidumbre de conseguir empleo estable, de dormitorios pequeños y poco cómodos en las obras y de la incapacidad de mantenerse estudiando debido a las exigencias propias del oficio. Las respuestas dadas por los bloqueros a la misma pregunta muestran que los principales problemas de su oficio están relacionados con el maltrato de ciertos dueños de bloqueras, salarios bajos e inciertos, cansancio físico y problemas de salud debido al horario de trabajo²⁹. Sin embargo un 25% de los encuestados aseguró no haber experimentado ningún problema en las bloqueras.

Con respecto a las expectativas que tienen los comuneros de Guangaje en el trabajo de la construcción, un 20% comentó que quisieran ascender al cargo de maestro

²⁹ Los horarios de trabajo en las bloqueras del norte de Latacunga van de 12:00 A.M. a 7:00-9:00 A.M. Esto responde al menos a tres cuestiones específicas. [1] algunos trabajadores entrevistados en las bloqueras mencionaban que trabajar en la noche les permite aumentar el número de bloques que se producen, por la ausencia del fuerte sol matutino; [2] la mayoría de bloqueras se asientan en un mismo sector de la ciudad, lo que les permite trabajar en la noche sin recibir protestas de vecinos molestos por el ruido de la maquinaria; [3] el trabajo nocturno permite que los dueños de las bloqueras evadan los controles estatales para evitar el trabajo precario infantil

mayor, mientras un 15% esperaba mantenerse en su cargo pero con salarios más altos. Aproximadamente el 6% de las respuestas indicaron que se espera que mejore el trato de los maestros mayores para con los obreros de la construcción. Pero la mayor parte de los encuestados indicaba que no tienen expectativa alguna para el trabajo en la construcción, pues lo consideran un trabajo temporal y preferirían dedicarse a otros oficios como la educación o las labores del campo.

Así las cosas, parecería que los conflictos más comunes que se generan al interior de las redes de la construcción se dan por atrasos en pagos de salarios por parte de ingenieros. Esto es particularmente problemático en la medida en que los salarios son normalmente repartidos en efectivo desde el ingeniero o arquitecto hacia el maestro mayor, quien a su vez los reparte a la cuadrilla de albañiles y oficiales con quien está trabajando. Esta práctica ritual en la construcción tiene el objetivo de fortalecer la posición coordinadora y dominante del maestro mayor en la obra, pues tiene la capacidad de delegar a éste las responsabilidades simbólicas del pago. A su vez, el maestro mayor cobra una “comisión” informal a cada albañil y oficial del total de salarios a pagar, razón por la que resulta difícil conocer con exactitud el ingreso mensual percibido en este cargo.

En caso de que los salarios no sean pagados con puntualidad, problemática que como hemos visto es frecuente, es el maestro mayor quien carga con todo el peso de la deuda para con los obreros. Segundo Guanina comentaba que:

Los pagos a veces se atrasan, no cumplen puntual los ingenieros. Yo [como maestro mayor] quedo mal porque no puedo cumplir como debe ser con los obreros. Ya no hay problemas cuando pagan los ingenieros. (Entrevista S.G. 2012)

Debido a las características propias de las redes de la construcción (lazos fuertes entre maestros mayores y obreros), es probable que estos conflictos se resuelvan al interior del mismo grupo de parentesco ampliado imbricado en las redes de la construcción, al interior del *ayllu*³⁰. Pero también es cierto, como comentaban algunos encuestados, que

³⁰ En el archivo de la Tenencia Política no se encontraron documentos donde aparezcan conflictos alrededor de salarios atrasados entre oficiales, albañiles o maestros mayores en lo que va del 2012. Una búsqueda más minuciosa y extensa en el archivo de la Tenencia podría mostrar otros resultados, aunque estos conflictos (por su carácter intrafamiliar) podrían también ser resueltos o mediados por los cabildos de cada comunidad.

los maltratos de los ingenieros y de los maestros mayores con los obreros de la construcción también son comunes.

Dos comentarios dados por Juan Augusto (maestro mayor) y su yerno Francisco (albañil) muestran que el maltrato aparece por una aparente falta de claridad en las órdenes verticales de trabajo, que van desde el ingeniero hasta los obreros pasando por el “tamiz” del maestro mayor. En coherencia con los conflictos encontrados por Sánchez Parga en la parroquia aledaña de Zumbahua (2002) Francisco también menciona que los conflictos maritales de los maestros, albañiles y oficiales son cada vez más comunes³¹.

Entrevistador: ustedes, como albañil o maestro mayor, ¿qué conflictos creen que son los más comunes que se originan en los trabajos de la construcción?

JAT: Esta temporada no hemos tenido tanto conflicto. Antes yo sabía tratar con malas palabras [a las cuadrillas en las obras]. Desde que llegó la palabra de Dios no estoy ni hablando malas palabras. Por eso no he tenido ningún problema.

Francisco Lutuala: creo que muchas veces han pasado. Tienen problemas en trabajo, a veces por putiar a veces por no hacer bien. En oficina de Tenencia la esposa reclama, por tener una chica. Eso tal vez nace en el trabajo, y viene el conflicto para solucionar aquí en parroquia o en las comunidades [...] por ejemplo un compañero había tenido en trabajo una enamorada, pasó como unos dos años y descubrieron, el conflicto ha venido y la resolución ha salido de la tenencia política [...] no es uno, dos, son bastantes [los que han pasado por estas circunstancias]. (Entrevista JAT y FL, 2012)

El análisis relacional hasta ahora desarrollado ha permitido mostrar tres problemáticas centrales de la fragmentación laboral derivada de las jerarquías internas en las actividades relacionadas con la construcción. La primera es el carácter “fuerte” y eminentemente masculino de las redes laborales de la construcción, lo que implica que aquellos que tienen familiares o amigos cercanos en dichas redes logran acceder al empleo en mejores condiciones relativas. Para las mujeres el acceso está parcialmente restringido y suelen ocupar los estratos inferiores de las jerarquías de la construcción. Nadie en la parroquia de Guangaje conocía del caso de una mujer que haya realizado las

³¹ En efecto, los conflictos conyugales son los más registrados en el archivo de la Tenencia Política de Guangaje durante el 2012. Algunos registran acusaciones de adulterio y peticiones de divorcio, aunque una buena parte de denuncias son de mujeres jóvenes embarazadas o a cargo de niños menores que exigen el pago de mensualidades monetarias a padres ausentes.

funciones del Maestro Mayor. La segunda, relacionada con la trayectoria profesional de los maestros mayores entrevistados, muestra que la construcción de dichas redes laborales empezó hace al menos cinco décadas (con algo de anterioridad al período reformista). Esto explicaría también por qué allí, justamente donde las condiciones de reproducción campesinas han sido más apropiadas, no residen números considerables de maestros mayores y, por tanto, las oportunidades de convertirse en maestro mayor sean mínimas. La tercera es que hay un conjunto de conflictos específicos que se desarrollan y resuelven al interior de las redes laborales y los grupos familiares o de amistad/comunales que las componen. Dada la posición estratégica derivada de la red de contactos con ingenieros y arquitectos, así como los rituales simbólicos a cargo del maestro mayor implícitos durante la entrega del salario a las cuadrillas, un retraso en los pagos genera confrontaciones entre familiares, amigos o comuneros a ser resueltos por ellos mismo.

Sin embargo, algo que no muestran las redes de la construcción y sus particularidades son las consecuencias de los procesos de diferenciación social al interior de la parroquia. A continuación se relata brevemente un conflicto intraparroquial que conmocionó a Guangaje durante el trabajo de campo. Éste conflicto, aparentemente coyuntural, puede ser leído precisamente como resultado de procesos internos de diferenciación durante las últimas décadas. Así mismo este suceso puede explicar en qué medida la diferenciación actual entre los que “migran mucho” y los “que migran poco” provoca enfrentamientos y pugnas al interior de las comunidades y entre las autoridades parroquiales, sobre todo entre los más jóvenes.

Un conflicto intraparroquial: abigeato, motocicletas indocumentadas y los jóvenes de Guangaje.

Durante el trabajo de campo un fuerte conflicto intraparroquial fue afrontado por un grupo de dirigentes comunitarios, el Teniente Político, algunas autoridades de la Junta Parroquial y los representantes de la UNOIRG. A inicios de febrero de 2012 una delegación de dirigentes de la Organización de Segundo Grado de la parroquia Poaló, cantón Latacunga, y un grupo de dirigentes de la comunidad de Maca Grande, llegaron

a la parroquia en busca de un grupo de jóvenes de la comunidad de Salamalag Chico³² a quienes se les acusaba de pertenecer a una banda delincuencial que estaba creciendo en la zona durante la última década. El conflicto había estallado con el robo de borregos de raza que habían sido donados recientemente por el Estado a la vecina comunidad de Maca.

Los jóvenes fueron trasladados a la parroquia de Poaló, donde fueron interrogados por las autoridades locales. Allí se determinó que la red delincuencial estaba compuesta por jóvenes de Guangaje, Zumbahua y de la misma comunidad de Maca, y estaba vinculada a un grupo de chatarreros de Saquisilí y Latacunga que se dedicaba a vender motocicletas sin documentación en las parroquias rurales del occidente de Pujilí y Saquisilí, a precios relativamente bajos (\$300-500 en promedio) y casi exclusivamente a varones jóvenes de entre 16 y 30 años. Hasta el momento en que se confiscan las motocicletas, era muy común observar, en el paisaje local, a un número cada vez más grande de motociclistas jóvenes que transitaban entre comunidades y centro parroquial (Guangaje Centro). Esto era especialmente evidente durante los días domingo, durante las ferias y durante el momento en el que regresa a la parroquia una buena parte de su población. En el espacio social de la feria, las motocicletas dejaban de cumplir su función como medios de transporte intraparroquial, pues se transformaban en objetos personalizados de exhibición pública por parte de varones jóvenes, migrantes y no migrantes, que se disputaban simbólicamente la plaza central, los alrededores de una cancha y la entrada de la iglesia.

Las familias afectadas de Salamalag pidieron ayuda a las autoridades de Guangaje, sobre todo a Alberto Ugsha, el entonces presidente de la UNOIRG, quien tenía contactos con algunos dirigentes de la OSG de Poaló³³. Las autoridades de ambas parroquias procedieron a revisar los hogares de los jóvenes detenidos para verificar las acusaciones realizadas y así poder actuar con mayores certezas. Para ese entonces también se habían acumulado varias denuncias de atropellos y asaltos de los jóvenes motociclistas de Guangaje, sobre todo por parte de mujeres y ancianos que se transportan a pie. Pero una de las razones que motivó la pronta acción de los dirigentes

³² Este grupo de jóvenes pertenecía, en su mayoría, a los dos grupos familiares más importantes de Salamalag Chico, familias con mayor cantidad y mejor calidad relativa de tierras e históricamente influyentes en la organización parroquial.

³³ Es interesante añadir aquí que Alberto Ugsha, comunero de Cochumbo, había sido maestro mayor antes de convertirse en presidente de la UNOIRG.

de Guangaje estuvo más relacionada con la posible pérdida de prestigio y capacidad de influencia de los dirigentes por los comentarios y rumores que empezaron a regarse por la parroquia cuando el conflicto estalló. Como lo indicaba Alberto Ugsha:

Por esos malditos malhechores [algunos comuneros] han andado criticando, insultando, manipulando a los dirigentes, diciendo que en Guangaje los dirigentes son muertos, no son bien parados, no saben nada, ni se siente nada, solamente tenemos miedo a los de Maca, peor a los de Saquisilí, peor a los de Guangaje. Entonces ahí nosotros ponemos a conversar entre los dirigentes tanto la junta, la organización y el teniente político. El domingo tomamos decisión con algunos miembros de las comunidades.

La decisión de los dirigentes fue la de confiscar las motocicletas sin documentación en toda la parroquia y empezar a realizar controles internos más estrictos sobre los vehículos que circulan por Guangaje. En dos días los dirigentes de cada comunidad y con la ayuda de las autoridades locales confiscaron noventa motocicletas indocumentadas de las cuales el 50% fueron compradas por varones jóvenes de las comunidades de Salamalag Chico, Candela Faso, Guayama Grande y Chuquiranpamba³⁴ durante la última década. Fueron detenidas dos personas de Salamalag Chico y llevados a la Fiscalía en la ciudad de Latacunga, mientras que las motocicletas fueron entregadas a la Policía Nacional. En realidad la Policía Nacional no intercedió en ningún momento del conflicto y funcionaron únicamente como los transportistas de las motocicletas retenidas desde la parroquia hacia los patios de vehículos detenidos por la institución en la ciudad de Latacunga.

Entrevistador: ¿Qué hizo la Policía en este conflicto?

Alberto Ugsha: ellos no asistieron, ellos tienen miedo, le tiemblan. Acá gente indígena somos de otro tipo, en las conversaciones, en la convivencia diaria, en la cultura, en todo. A nosotros nos tienen como toros bravos, entonces ellos tienen miedo. En Guangaje varias veces han venido policías a buscar las motos, pero nunca tuvieron

³⁴ El ambiente social en Guangaje durante el resguardo de las motocicletas confiscadas fue muy tenso. Algunos dirigentes mencionaron que habían recibido amenazas de los jóvenes que perdieron sus motocicletas. El teniente político de la parroquia, un comunero de Tigua, “salió corriendo” durante el resguardo de las motocicletas por temor a recibir represalias. Luego de haber entregado las motocicletas a la policía, los dirigentes de Guangaje decidieron exigir al Gobernador de Cotopaxi la elección de un nuevo Teniente Político. Cesar Lutuala, un joven dirigente adventista de la comunidad de Tingo Pucará, fue designado por el Gobernador como el nuevo Teniente desde el mes de Mayo de 2012.

oportunidad. Pero aquí nosotros, entre nosotros, cuando paramos, paramos. Pero para bien de nuestras comunidades, no para destruirnos, no para perjudicarnos.

Pero más allá del conflicto particular que estalla alrededor del robo de ganado en parroquias aledañas, la relevancia de este acontecimiento aparentemente coyuntural podría estar en que muestra parcialmente un conflicto generacional entre comuneros que migran mucho (más del 50% del año) y migra poco (menos del 50% del año). Lo que llama la atención del suceso es la centralidad de la comunidad de Salamalag Chico y las comunidades que de ella se han ido conformando los últimos años (Candela Faso, Guayama Grande y Chuquiranpamba). La división de Salamalag Chico es un suceso histórico bastante complejo pero en el que predomina el enfrentamiento de dos grupos familiares dominantes y una serie de grupos familiares más pequeños, jóvenes, por el control económico y simbólico de la comunidad. Vale recordar que en el capítulo segundo Salamalag Chico resalta como una de las comunidades más radicales de la provincia de Cotopaxi que, con ayuda de una amplia red de militantes de izquierda, transforma las condiciones productivas locales en momentos anteriores, incluso, a la reforma agraria empujada “desde arriba”. Así mismo, como hemos visto con anterioridad, éste territorio es uno de los pocos de la parroquia que aún sostiene dinámicas económicas campesinas, donde también hay poca presencia relativa de maestros mayores y, por lo tanto, donde las redes de la construcción están menos difundidas.

Esto significa que los jóvenes de estas comunidades, los hijos y nietos de los huasipungueros “radicales” que se tomaron las haciendas de Salamalag y La Provincia a inicios de los 60s, han tenido mayores oportunidades relativas para vincularse a las redes económicas propias de las pequeñas economías campesinas (vinculadas, por ejemplo, a vendedores de insumos, intermediarios agrícolas, comerciantes de animales menores en mercados y ferias, o el mismo grupo familiar/comunal), y a la vez menores oportunidades para vincularse a las redes de la construcción.

A manera de hipótesis, podríamos plantear que uno de los conflictos fundamentales que aquejan internamente a las organizaciones, comunidades y grupos de parentesco en Guangaje en la actualidad se da entre comuneros con mayores oportunidades de reproducción de su condición campesina y comuneros obligados a migrar internamente, es decir, entre comuneros que heredaron lo conseguido durante las

luchas en la etapa reformista, y comuneros que no consiguieron sino tierras marginales durante prolongados procesos de titularización, alguno de los cuales siguen tramitándose (como el caso de la comunidad “Tingo Pucará”). Si hace cinco décadas el prestigio social en Guangaje se asentaba en la capacidad organizativa comunal, en su capacidad de movilización y adjudicación (violenta o no) de tierras fértiles, en la capacidad de sus líderes y los vínculos estratégicos tejidos con sectores urbanos, ahora pueden estar funcionando otros mecanismos sociales que posicionan a unos por encima de otros. Para los varones de Guangaje las motocicletas indocumentadas pueden ser utilizadas para mostrar públicamente su éxito laboral y personal, como símbolo de su capacidad de movilización dentro y fuera del territorio comunal y parroquial.

Este suceso también ejemplifica una de las observaciones de Ospina (2011: artículo en línea) respecto a la aparente pasividad actual de las bases del movimiento campesino de la sierra que no dirigen sus demandas a la gran propiedad agraria, sino que parecerían estar en frecuentes conflictos al interior de las mismas parroquias. El caso de la parroquia de Gaungaje, y la historia reciente de la comunidad de Salamalag Chico, puede mostrar que al interior de una misma parroquia los resultados inconclusos de la “cuestión agraria” durante el reformismo obligaron a uno (pero no a todos) a optar por una estrategia migratoria temporal. El neoliberalismo no hizo sino profundizar las desigualdades en el agro, empujando tardíamente a la migración interna a aquellos que consiguieron mejores resultados durante la reforma agraria. Esto generaliza en la actualidad un contexto de fragmentación laboral, como indicaría Bernstein, pero a nivel parroquial y en el caso del occidente de Cotopaxi, podría también mostrar dinámicas de profesionalización en una actividad económica en particular. La fragmentación laboral, en estos casos, se produciría al interior de las redes de relacionamiento y estarían determinadas por las jerarquías específicas de la actividad económica que absorbe a la población expulsada de los sectores rurales.

En las actividades de la construcción y la fabricación de bloques las jerarquías están bien establecidas y contienen una serie de conflictos específicos que son enfrentados, probablemente, por los mismos *ayllus* o por las autoridades del cabildo. Ninguna instancia organizativa del MICC ha enfrentado estos problemas, y solo recientemente el Estado ha hecho controles más exhaustivos de las condiciones laborales en la construcción, al menos en las grandes ciudades del Ecuador. En las

encuestas realizadas a los migrantes de la construcción en Guangaje, por ejemplo, solo uno de los entrevistados mencionó haber estado afiliado al seguro social ordinario, porque estuvo trabajando en obras estatales en el oriente durante el 2011.

Estas nuevas jerarquías, entre las que domina la figura del maestro mayor, inciden directamente en las características del prestigio social actual en Guangaje. Al contrario de lo teorizado por Bernstein, para quien la fragmentación laboral limitaría la articulación política de los sectores rurales, los casos de los maestros mayores aquí revisados muestran que las limitaciones actuales de las economías campesinas no necesariamente provocan la despolitización de la población “semiproletarizada” que se ve obligada a trabajar en sectores económicos inestables y precarios. Los casos de Alberto Ugsha y de Segundo Guanina, ambos maestros mayores hace ya algunas décadas y todavía muy interesados por la organización comunal y parroquial en Guangaje, podrían mostrar este punto. Por el contrario, el caso de Juan Julio, el más joven de los maestros mayores entrevistados y el que mostró mayor indiferencia por participar en las organizaciones locales (sea OSG, Junta Parroquial o Tenencia Política), muestra que para las generaciones jóvenes habría una aversión más marcada por participar en la política parroquial y, por tanto, nuevos espacios simbólicos donde buscar prestigio social.

Así las cosas, la “cuestión agraria” inconclusa en Cotopaxi provoca un contexto local muy complejo y sin duda limitado para la lucha por un nuevo proceso de transformación de las relaciones de producción durante la etapa histórica en la que “regresa” el Estado con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los constantes y crecientes conflictos intra e intercomunales, sea relacionados con los problemas de la “semiproletarización” de los campesinos del occidente de Cotopaxi o derivados de procesos de diferenciación históricos, y el progresivo distanciamiento entre bases rurales y organizaciones comunales, parroquiales y nacionales, dificultarían la lucha colectiva por un nuevo proceso de redistribución de medios productivos del agro en la sierra ecuatoriana. Pero como diría Zamosc (1990) es probablemente el Estado el actor central en las disputas sociales e históricas por resolver la “cuestión agraria” en el capitalismo contemporáneo. Pasemos ahora a revisar cómo el Estado está respondiendo a estos problemas históricos en Cotopaxi y la manera en que el Movimiento Indígena ha entrado a la disputa por la construcción de la soberanía alimentaria en base a la pequeña

producción campesina, una de las demandas más importantes que conforman los contornos de la cuestión agraria del siglo XXI en el Ecuador.

.

CAPITULO IV: POLÍTICAS PÚBLICAS, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LOS JÓVENES DEL MICC.

El cuarto y último capítulo está compuesto de tres partes interconectadas que responden a las últimas interrogantes planteadas en un inicio. En la primera veremos el proceso político por medio del cual se abrieron nuevas oportunidades de enfrentar la irresuelta cuestión agraria en el Ecuador, sobre todo a partir de los lineamientos estipulados por la constitución de Montecristi de 2008. Allí revisaremos algunas de las políticas públicas más importantes que muestran las particularidades del accionar estatal contemporáneo en la provincia de Cotopaxi y en el caso específico de Guangaje, tanto en el sector agrario como en otros sectores de la economía nacional. Luego pasaremos a analizar cómo se está enfrentando los problemas derivados de la fragmentación y jerarquización laboral de los campesinos/obreros de Cotopaxi desde las instancias organizativas parroquiales y provinciales del Movimiento Indígena ecuatoriano, sobre todo desde el MICC. Por último, se resalta la relevancia del Consejo de Jóvenes del MICC en su afán por enfrentar los problemas organizativos y la “crisis relativa” actual del Movimiento Indígena en la provincia de Cotopaxi. Finalmente se presentan las conclusiones generales del presente documento, iniciando con una relectura general de los hallazgos más importantes de cada capítulo, para pasar a responder las preguntas general y específicas del estudio y plantear hipótesis relacionadas que quedan aún por investigar.

Políticas Públicas en el gobierno de la Revolución Ciudadana: ¿hacia un nuevo intento de industrialización interna?

La nueva Constitución del Ecuador planteaba un nuevo Estado con una autoría predominante como agente económico nacional. También planteaba una nueva institucionalidad interesada por incentivar la participación social, una propuesta para de reordenamiento territorial, así como una serie de objetivos y estrategias económicas alternativas a aquellas promovidas por el neoliberalismo. A partir de las directrices constitucionales el gobierno central, con ayuda de la renovada y fortalecida Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, elaboró el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013 (PNDBV). La constitución política del Ecuador propone la

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su utilización como documento base para direccionar las actividades del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados:

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores (Constitución Política del Ecuador)

El proyecto económico alternativo planteado en el largo plazo por el PNDBV es la construcción de una “biopolis ecoturística” (SENPLADES, 2009: 11). En una primera etapa el PNDBV propone doce “estrategias de cambio” a aplicarse en el período 2009-2013:

I. Democratización de los medios de producción, (re)distribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de Organización; II. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir; III. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales; IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana; V. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación; VI. Conectividad y telecomunicaciones para, construir la sociedad de la información; VII. Cambio de la matriz energética; VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible; IX. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia; X. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario; XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización; XII. Poder ciudadano y protagonismo social (SENPLADES, 2009: 94).

Se podría hacer una evaluación muy detallada acerca de la forma en que el gobierno central ha respondido a las estrategias aquí descritas. Pero lo que resulta evidente es que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana la economía ecuatoriana ha tenido un despegue importante. Las grandes obras de infraestructura en vialidad y de generación

eléctrica, el crecimiento del gasto público en salud y educación, los estrictos controles sobre el sector privado respecto a la afiliación universal a la Seguridad Social, el crecimiento del sector público y sus servicios, el nuevo impulso a la educación superior, reformas positivas y progresivas sobre el Salario Mínimo Vital, la construcción de una “ciudad del conocimiento” en Imbabura como proyecto insigne de la promesa de transformación de la matriz productiva, entre otros factores, muestran solo una parte de diversos mecanismos redistributivos del ingreso y, sobre todo, del proyecto nacional del gobierno actual. Mecanismos que, vale decirlo, han requerido de nuevas vías de endeudamiento externo a pesar de los altos precios del petróleo ecuatoriano.

Sin embargo el gobierno de la Revolución Ciudadana ha tenido varios enfrentamientos tanto contra una oposición conservadora como contra una oposición de izquierda a la que se la ha tachado repetidas veces de “infantil” y poco realista/utopista. Uno de los actores sociales que ha estado dentro de estos últimos conflictos ha sido el Movimiento Indígena Ecuatoriano, alrededor de temas tales como las aún inciertas Leyes de Agua y Tierras y los proyectos de minería a gran escala promovidos por el gobierno central.

En medio de estos conflictos, las políticas públicas promovidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana en el agro tampoco han mostrado concordancia con las directrices constitucionales de Montecristi o con el Plan Nacional del Buen Vivir 2010-2013. Un estudio pormenorizado sobre dichas políticas a nivel nacional muestra que aunque el gasto público en agricultura ha aumentado en términos absolutos durante la presidencia de Rafael Correa, su peso relativo ha decrecido en el período 2005-2010, en paralelo con la desmovilización de los sectores sociales (ver Anexo 2). En términos generales el estudio concluye que las políticas de Estado han favorecido a los medianos y grandes productores agroindustriales del país, en detrimento de las pequeñas economías campesinas (Herrera y Carrión, 2012: 82-83). Una de las conclusiones de éste extenso estudio argumenta que:

[...] el gobierno no muestra la voluntad política para avanzar en cambios importantes. Su “deuda con el campo” se traduce en la continuidad y profundización del modelo primario agroexportador. La mayor diferencia con las tendencias heredadas de neoliberalismo, (reprimarización, contra reforma agraria y reducción del Estado), es la recuperación del rol del sector público y la ampliación de sus

servicios, tendencia que incrementa la popularidad del gobierno, pero refuerza la inmovilidad en la estructura productiva. (Herrera y Carrión, 2012: 166)

Sin embargo, a partir de la Constitución de Montecristi se da paso a un nuevo marco legal que abre posibilidades de afectación efectiva de la gran propiedad. Aunque a nivel legislativo el debate alrededor de las Leyes de Tierras y Agua ha sido postergado para el período electoral 2013-2017, principalmente por la movilización campesina-indígena en contra de ciertos proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo, es posible tener una idea de los términos de la discusión en lo concerniente a las posibilidades de reparto efectivo de tierras y recursos productivos en el agro.

Al momento han sido socializados tres proyectos de Ley de Tierras desde diferentes sectores organizados de la sociedad ecuatoriana. En primer lugar está el proyecto de ley elaborado por la Red Agraria y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA)³⁵, el cual fue elaborado de manera participativa a nivel nacional. También está en debate la propuesta del Consejo de Pueblos y Organizaciones Evangélicas del Ecuador (FEINE), así como una propuesta de ley del Movimiento Popular Democrático (MPD). Ninguno de los tres proyectos de ley considera mecanismos efectivos de afectación del latifundio, sus propuestas permitirían una mínima distribución de tierras por provincia y región y convierten la problemática agraria y de la concentración de la tierra en el país en un problema económico, no social ni político³⁶. Carrión (2012b) comenta que uno de los proyectos más interesante es el propuesto por el MPD, en la medida en que plantea un mínimo vital de tierras por familia, perspectiva que afectaría al latifundio de manera más pronunciada a favor de las pequeñas economías campesinas.

Habría también que añadir a este listado una problemática propuesta de Ley impulsada por un grupo de legisladores oficialistas en la Asamblea Nacional durante el 2012. Carrión (2012c) argumenta que la posición del bloque político de Alianza País en

³⁵ La Red Agraria está conformada por la FEI (Federación Ecuatoriana de Organizaciones Indígenas y Campesinas), CORMOLIT (Corporación de montubios del Litoral), Alianza Montubio Campesina, CONFEUNASSC (Confederación Unitaria de Afiliados al Seguro Social Campesino), CNC ELOY ALFARO (Confederación Nacional de Campesina Eloy Alfaro), FENACLE (Federación Nacional de Campesinos del Litoral) (Carrión, 2012a)

³⁶ Para un análisis crítico y comparado de los tres proyectos de ley, véase (Carrión, 2012b)

lo que respecta a la Ley de Tierras ha estado abiertamente a favor de los proyectos de ley propuestos por la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona, los cuales permitirían una mínima transferencia de tierras hacia familias y pequeños productores campesinos.

En el Ecuador, el tercer y último Censo Agropecuario se lo realizó en el año 2001. Arroyo y Gálvez (2012) han actualizado la información del censo con ayuda de las Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y encontraron que la estructura agraria en el Ecuador no ha mostrado cambios significativos en los primeros años del siglo XXI. Por el contrario, sus hallazgos muestran una estructura agraria inequitativa en la sierra ecuatoriana: el 92% de las provincias en esta región mantienen índices de Gini mayores a 0,7³⁷. Es en este sentido que llama la atención que el presidente Correa haya afirmado que el problema de Zumbahua (y por extensión el problema de las parroquias rurales de altura del occidente de Cotopaxi) ya no es el problema de la tierra, sino el del “subdesarrollo”, el cual necesita de los grandes proyectos viales manejados por el gobierno central para ser superado (haciendo alusión a la recientemente ampliada carretera que conecta Latacunga con La Maná) (enlace No. 275), a pesar de que en provincias como Cotopaxi la concentración de tierras sigue siendo alta. Por ejemplo, el III Censo agropecuario mostraba que Cotopaxi es la cuarta provincia con mayor índice de concentración de tierras de toda la sierra, en tanto el 1.97% de las unidades de producción agropecuarias (UPAS) controlan el 47,49% de la tierra (Brassel et. al, 2008: 24-25). Los datos de Arroyo y Glavez (2012) también muestran que el índice de Gini se ha mantenido constante en el período 2006-2009, en 0,8.

Tampoco las políticas públicas agrarias que el Estado ha promovido en las parroquias de la cordillera occidental de Cotopaxi han tenido los resultados esperados. Wilson Riera, ingeniero agrícola encargado de la promoción y aplicación de proyectos productivos del MAGAP en Guangaje argumentaba que el problema fundamental del sector es la mala calidad de los suelos, lo cual impide cualquier tipo de proyecto productivo a gran escala. Hasta el momento el Ministerio ha trabajado en la creación de tres “Escuelas de la Revolución Agraria” en las comunas de Tingo Pucará, Salamalag

³⁷ El índice de Gini mide la desigualdad en la concentración de recursos productivos. Mientras más cercano a 1, mayor el nivel de concentración. Mientras el índice sea más cercano a cero, habrá un menor nivel de concentración de recursos en pocas manos.

Chico y Comuna Guangaje, desde las cuales se imparten cursos de capacitación y se promueven pequeños proyectos de “biogranjas” familiares y de piscicultura. Según Riera los proyectos han tenido resultados favorables en la pequeña y “semiproletarizada” comunidad de Tingo Pucará, mientras que en las otras comunidades no han conseguido coordinar sus labores con efectividad, sobre todo por falta de apoyo de los mismos comuneros quienes, como acabamos de ver, se encuentran enfrentando un profundo conflicto entre las autoridades parroquiales y jóvenes dedicados al abigeato y la venta de motocicletas sin documentación (Entrevista W.R., 2012).

Una de las políticas gubernamentales más importantes y ambiguas promovidas en la provincia de Cotopaxi fue la inauguración de las operaciones de carga en el aeropuerto de Latacunga en Mayo de 2012, con un 40% de subsidios para los combustibles de avión. Correa señaló que el subsidio está destinado para mejorar los niveles de competitividad de la agroindustria de las flores y el brócoli en la provincia. Estas decisiones no fueron bien vistas por La Cámara de Comercio y el alcalde de Quito quienes se pusieron del lado de los floricultores del norte de Pichincha pues éstos no acceden a dichos subsidios sobre los combustibles en el aeropuerto de la capital (Ecuavisa. 2012-05-17). Casi de inmediato los floricultores y brocoleros de Cotopaxi respondieron con una “toma pacífica” del aeropuerto de Latacunga en defensa de las ayudas que habían recibido por parte del Estado.

No hay duda de que el Estado podría estar haciendo una lectura bastante radical de las condiciones de las pequeñas economías campesinas, en tanto su inviabilidad agrícola y la falta de presiones sociales sobre la tierra podría motivar a las autoridades locales y nacionales a concentrar esfuerzos y recursos en los nuevos agronegocios del valle interandino, en especial en la producción de brócoli y flores. Pero, ¿cómo está actuando el Estado en la promoción de nuevas actividades económicas (como el turismo) para superar los alarmantes niveles de pobreza e inequidad del occidente de Cotopaxi? Pensando en el caso particular de Guangaje aquí analizado ¿Qué está pasando en el sector de la construcción que, como hemos visto, emplea a más de la mitad de las familias indígenas residentes en esta parroquia en la actualidad? ¿El Estado está incentivando la dinamización de este sector? En efecto, más allá de las políticas focalizadas en el sector agrícola, las cuales se enfrentan a las serias limitaciones

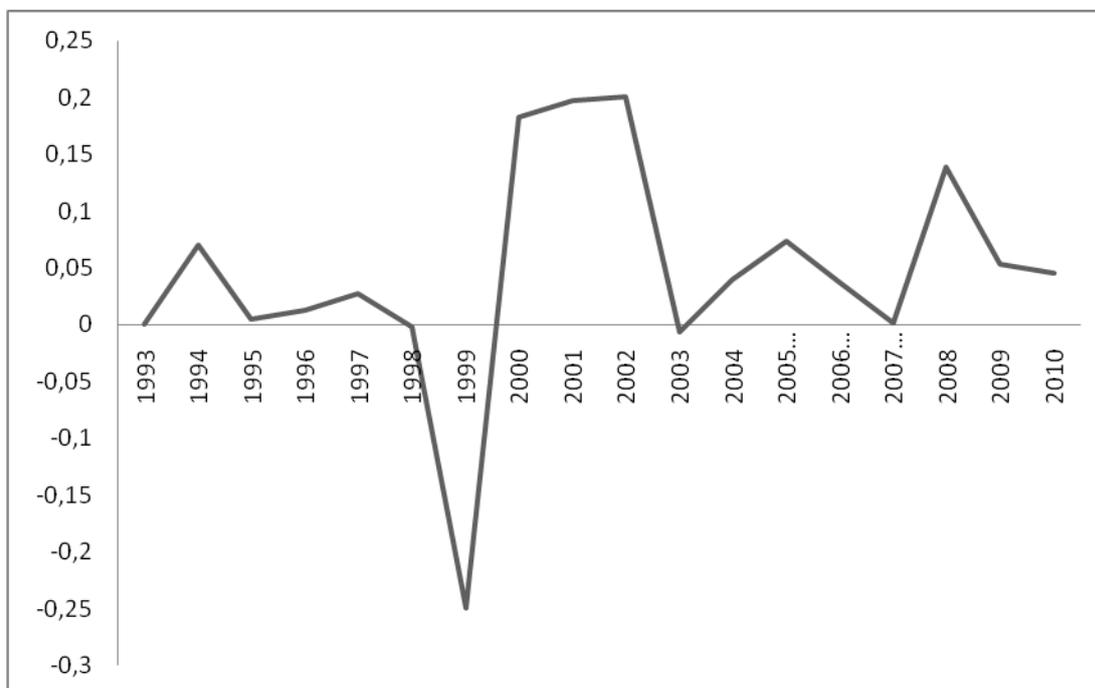
ambientales de los pisos de origen volcánico de los páramos occidentales, es importante revisar otros proyectos gubernamentales que, directa o indirectamente, estarían beneficiando a otros sectores de la economía.

Por una parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria están promoviendo el “Proyecto de Desarrollo Corredor Central”, un proyecto de turismo comunitario entre las parroquias de Guangaje y Agamarca, y cuyo centro de atractivo es el cráter del volcán Quilotoa. El proyecto plantea una inversión de \$ 490.678,12 dólares, financiados por el IEPS (en un 69.75%), el municipio de Pujilí (5.01) y las 21 comunidades beneficiadas (23.23%). En la parroquia de Guangaje solamente cuatro comunidades (Comunidad Guangaje Centro, Casa Quemada, Tingo Pucará y Pucará Grande), aproximadamente 370 familias, serían las beneficiarias directas del proyecto, aunque se espera que los efectos del turismo tengan un mayor efectivo redistributivo en el sector.

Paralelamente, el Estado también se ha ido convirtiendo en uno de los actores económicos más influyentes del sector de la construcción a nivel nacional. Por medio del incipiente Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Estado ha dirigido importantes líneas de créditos hipotecarios, a tal punto que para el 2010 el Estado ya ofrecía cerca del 40% del total de préstamos dirigidos hacia el sector de la construcción (Jiménez, 2011: 3). También ha sido notable el esfuerzo del gobierno central y otras entidades gubernamentales (como el MIESS y el INFA) por exigir la afiliación de los obreros de la construcción al IESS (la cual aumentó en un 21% durante el 2011 a nivel nacional) (El Comercio. 2012-05-01) y por tratar de eliminar el trabajo infantil en las bloqueras de Latacunga ofreciendo becas de estudio, durante los últimos cuatro años (La Gaceta. 2010-09-23). En términos general, se podría argumentar que el sector de la construcción en el Ecuador será uno de los más beneficiados con las políticas públicas, sociales y crediticias promovidas por el gobierno central en la actualidad. Así, es probable que las volátiles tasas de crecimiento de la industria mostradas en el gráfico 6 empiecen a estabilizarse y mantenerse a la alza durante los próximos años.³⁸

³⁸En la cadena sabatina del día sábado 1 de septiembre el presidente hizo alusión a la reunión que tuvo con un importante grupo de empresarios ecuatorianos. Allí comentó acerca de lo que el Estado plantea al sector empresarial. Correa indicó que su gobierno busca una estrategia de industrialización por sustitución selectiva de importaciones similar a la de los países asiáticos, estrategia que sería posible solamente con el apoyo del Estado y un grupo de empresarios comprometidos con el bienestar nacional. En ningún

Gráfico 6: Tasas de crecimiento del Valor Agregado de la Industria de la Construcción, 1993-2007.



Fuente: Estadísticas sectoriales del Banco Central del Ecuador y Jiménez (2011).

Esto podría explicar parcialmente las razones por las que no existe una oposición expresa de la población de Guanguaje frente al gobierno, a pesar de que las posturas opositoras del Movimiento indígena ecuatoriano sean constantemente socializadas en la parroquia. La pasividad de estos sectores en las movilizaciones por el agua en marzo de 2012 podría derivarse de estas respuestas estatales a ciertas necesidades locales. Y es que a pesar de que las demandas campesinas en el occidente de Cotopaxi no sean escuchadas por el gobierno, las políticas estatales sí estarían enfrentando demandas también presentes en la actualidad de varios espacios rurales de la provincia. Los proyectos turísticos, la renovada infraestructura vial entre Latacunga-La Maná que agiliza la movilización interna de la población, así como los diferentes intentos por mejorar las condiciones laborales en la construcción y en la fabricación de bloques

momento mencionó la necesidad de promover una verdadera reforma agraria como lo hicieron los estados asiáticos.

podrían estar funcionando como importantes y novedosas respuestas a las necesidades de ciertos sectores de las bases del Movimiento Indígena. Advertimos sin embargo que la lectura que hacen ciertos dirigentes de este mismo accionar estatal es muy diferente a la mostrada con anterioridad.

Pasemos ahora a revisar la manera en que el movimiento indígena ha tratado de enfrentar a dichas demandas en la provincia de Cotopaxi, a través de su órgano regional MICC. Como veremos, una nueva generación de dirigentes parecería estar más atenta a los problemas actuales de las parroquias rurales de Cotopaxi y, sobre todo, a las condiciones laborales de los migrantes internos de la construcción. Así como verificamos en Guangaje un conflicto intergeneracional relevante, el MICC estaría reflejando estas condiciones y, posiblemente, enfrentando orgánicamente los problemas de la “fragmentación” de sus bases producto del inconcluso período reformista.

Procesos de fortalecimiento del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Han sido varios y diversos los acercamientos que se han mantenido históricamente entre las instancias organizativas del MICC y los sectores rurales organizados de la provincia de Cotopaxi. Según José María Tipán, representante de Guangaje en el MICC y encargado del eje sobre la Soberanía Alimentaria, comenta que uno de los principales problemas de las comunidades es la división interna que promovida por la intervención del gobierno central. Argumenta que las grandes obras de infraestructura del gobierno, como la vía Latacunga-La Maná, tienden a “engañar” a los pobladores de las parroquias pues al interior de las mismas la pobreza es todavía preocupante. Al mismo tiempo, considera que el principal problema de Guangaje es la carencia de sistemas de riego suficientemente amplios como para mejorar las condiciones de las pequeñas economías campesinas, incluso de sistemas de agua potable para consumo humano.

Un ejemplo de tales niveles de pobreza y marginamiento de las políticas estatales es el caso de la comunidad de Tingo Pucara. A pesar de haberse conformado a fines de los 90s como organización reconocida por autoridades indígenas y estatales, no es sino hasta el 2012 que consiguen instalar un sistema de bombeo eléctrico de agua con

ayuda de ingenieros estadounidenses del grupo de EWBPPC³⁹. Con respecto a sus funciones en el MICC, José María aseguraba que se ha organizado varias reuniones y cursos de capacitación sobre prácticas agrícolas sustentables y emprendimientos comunitarios que han fortalecido ciertas organizaciones afiliadas, aunque se han conseguido menos avances de lo esperado. El problema mayor, señalaba, es el desinterés de los jóvenes por vincularse activamente a estos proyectos (Entrevista J.M.T., 2012).

Por su parte, Alberto Ugsha, ex presidente de la organización de Segundo Grado de Guangaje, la UNOIRG, comentaba que aunque es beneficioso mantener y fortalecer las estructuras organizativas en la parroquia es también evidente que muchos comuneros están “cansados” de participar en las mismas. Esto ha sido motivado por una serie de dirigentes que no valoraron la organización y prefirieron buscar oportunidades de ascenso social a través de lo que denominan despectivamente como “politiquería”. Alberto insistía, además, que este no es un problema particular de Guangaje sino que el cansancio organizativo puede ser visto a nivel cantonal, incluso provincial (Entrevista A.U., 2012).

De igual manera, durante el VIII Congreso de la UNOIRG celebrado en el mes de Agosto de 2012, se evidenciaron otros problemas que aquejan las estructuras organizativas de la parroquia. Primero, algo que todos los presentes del Congreso recalcaron es que la participación de los comuneros en los congresos de la UNOIRG ha ido disminuyendo de manera paulatina, sobre todo entre los jóvenes migrantes. A esto hay que añadir que según los reglamentos internos de la UNOIRG ningún migrante de la parroquia puede acceder a trabajar en la organización, pues existe la experiencia de que aquellos migrantes temporales de la parroquia no pueden desarrollar una labor de dirigencia y coordinación adecuada, dado su alto grado de movilidad. Este estatuto interno, sin embargo, nunca ha sido cumplido pues gran parte de las familias de la parroquia necesitan de las estrategias migratorias temporales para su propia subsistencia. El último presidente de la UNOIRG electo durante el VIII Congreso, sucesor de Alberto Ugsha, fue un migrante de la construcción y pasa más de la mitad

³⁹ Engineers Without Borders Pittsburg Professional Chapter, EEUU. Esta organización internacional trabaja en Tingo Pucará con ayuda de dos académicos de la Universidad San Francisco de Quito que llevan aproximadamente 8 años trabajando en el sector. Es el único trabajo importante de infraestructura de agua potable para consumo que se había realizado durante la última década en la parroquia, a pesar que varias comunidades aún carecen de las mismas.

del año fuera de la parroquia. El propio Alberto Ugsha, como vimos en el capítulo anterior, ascendió a maestro mayor poco antes de convertirse en dirigente de la UNOIRG. Asombra, sin embargo, que no existe en los estatutos internos de la UNOIRG una figura electa que se dedique a trabajar de cerca con los migrantes temporales que residen en la parroquia.

Durante el Congreso también se criticó continuamente la incapacidad de las autoridades locales (Teniente Político, Junta Parroquial y Organización de Segundo Grado) por coordinar actividades y priorizar inversiones necesarias para mejorar los niveles de vida de la parroquia, como servicios básicos (luz y agua potable), equipamiento para el centro de salud parroquial y plantas nativas para la reforestación del páramo erosionado. Algo interesante que se discutió durante el Congreso fue la fracasada iniciativa de comprar 2.700 hectáreas de tierras con oportunidades de riego en los valles interandinos del norte de la provincia de Cotopaxi, entre 55 socios interesados. El terreno ofrecido, que había sido encontrado por Alberto Ugsha durante un viaje a la ciudad de Quito, no fue del agrado de todos los interesados por su lejanía relativa con el centro de Latacunga (aproximadamente a una hora y treinta minutos de distancia en transporte público). Además algunos comuneros insistían en que el precio del terreno era muy alto si se consideraba el estado de los caminos de acceso y la distancia entre el mismo y el centro urbano más cercano.

Es importante señalar que a nivel parroquial los conflictos, como hemos visto, son enfrentados por las autoridades y los dirigentes de manera relativamente efectiva. A pesar de las quejas públicas y el cansancio organizativo de las bases, los conflictos siguen siendo enfrentados de manera interna y las organizaciones parroquiales, tanto estatales como “movimentistas”, a pesar de la falta de coordinación, son las instancias que resuelven parcialmente, monetariamente, dichos conflictos. Y el movimiento indígena, así como sus redes organizativas, no han estado completamente ausentes de estas dinámicas. De hecho es notable la gravitación política que todavía sostiene la UNOIRG al interior de la parroquia. A pesar de la mayor cantidad de fondos que se manejan en la Junta Parroquial. El mayor prestigio como dirigente lo siguen sosteniendo los representantes de la UNOIRG. Así, a pesar de la aparente pasividad actual de las bases de la parroquia vinculadas con el Movimiento Indígena Ecuatoriano, el MICC

guarda todavía una fuerza social organizada muy importante en estos territorios de altura.

A este respecto, una de las iniciativas más interesantes que se está generando al interior del MICC es la relacionada con el fortalecimiento de un Consejo de Jóvenes interesado en aumentar su capacidad de participación y vinculación con el Movimiento Indígena ecuatoriano. Entre sus objetivos principales está la creación de una escuela permanente de formación escolar y política para jóvenes, a realizarse dos veces por mes durante los días viernes en instalaciones particulares. Leonidas Iza, uno de los jóvenes comprometidos con el fortalecimiento del Consejo (de aproximadamente 15 jóvenes que participan de manera esporádica), indica que el propósito de la escuela de formación es la de convertir a los nuevos cuadros de dirigentes del MICC en interlocutores bien informados y críticos, capaces de afrontar los problemas organizativos directamente con las bases.

Aunque el Consejo está todavía en una etapa incipiente, algunos ejes de trabajo y acción ya han sido delimitados. Es interesante señalar que uno de estos ejes es el de promover un nuevo proceso organizativo en las ciudades, allí donde los comuneros de Cotopaxi pasan una buena parte del año y donde el MICC ha estado prácticamente ausente:

Ahorita lo que hemos asentado principalmente es el problema de la tierra y el agua [que obliga a muchos comuneros a migrar fuera de sus parroquias] por eso decimos: sí, el movimiento ha puesto mucha fuerza en sostener la organización rural, pero no estamos viendo el problema que ha hecho salir a la gente de las zonas rurales y que hay una necesidad de organizar en la zona urbana. Ese es el punto que como jóvenes queremos poner como una decisión colectiva de la organización, no sé, armando la organización de trabajadores bloqueros, hablamos con frente de trabajadores... no sé.... Pero la cuestión es que necesitamos organizar [... el problema es que muchos comuneros] salen a trabajar con toda la familia, y los compañeros cuantos años han pasado trabajando así? ¿En esos años los compañeros han tenido un sueldo básico? ¿Ha tenido un seguro de vida? La organización entonces debe por lo menos garantizar el sueldo básico... (Entrevista L.I, 2012).

Vale aclarar que el Consejo de Jóvenes del MICC no se está planteando la problemática organizativa urbana en detrimento de los problemas estructurales del campo y de la economía campesina. Por ejemplo, durante una de las reuniones del Consejo dos jóvenes mencionaron haber participado en una protesta pacífica contra una florícola en

el cantón Pujilí que, según denunciaban, se había adueñado de un camino necesario para ingresar a una comunidad aledaña a la plantación. El dueño de la hacienda llamó inmediatamente a la policía, la movilización preparada por los jóvenes y algunos comuneros involucrados fue efectivamente reprimida y dos de los levantados fueron acusados formalmente de “terroristas” en su intento por recuperar un antiguo camino vecinal.

Así mismo, las divergencias al interior del mismo MICC respecto a este tipo de posturas son variadas. El Consejo de Jóvenes no representa sino una de las instancias que compite por espacios al interior de la organización. Una de las posiciones divergentes al interior del MICC sobre las posibles consecuencias de promover la organización en las zonas urbanas es ejemplificada en el siguiente testimonio de una importante ex dirigente indígena. Aunque parecería algo contradictorio en sí mismo, este testimonio podría mostrar que hay una permanente tensión entre las demandas campesinas y las necesidades “semiproletarias” de una parte considerable de las bases del movimiento. Esta tensión aún no ha sido resuelta, y tal vez representa uno de los puntos de inflexión fundamentales de la historia organizativa del Movimiento Indígena ecuatoriano:

Yo tengo que decir, en territorios de Guangaje cómo se puede pedir que la pobre gente no migre, si las tierras son áridas, si la fuente de agua no tienen, si las vías de acceso no la has hecho. ¿Qué hace la gente? Migrar pues! Yo creía y creo todavía en la migración temporal, de eso que el papá, el esposo, camina, sale, busca y regresa a su territorio. Las mujeres siguen y seguiremos siendo buenas administradoras hasta de lo que no hay [...] no comparto yo con promociona que vengan los migrantes a la ciudad y aquí le ubiquemos a los migrantes. Las tierras se quedarían botadas, abandonadas, de pronto no encontraron fuente de trabajo y ¿Qué paso? Yo por ejemplo eso no apoyo [...]de lo que se trata] es como tratar de apoyar en los territorios y los cantones para reducir índices de migración y sobre todo de pobreza. Yo pregunto con una casa en la ciudad, donde queda la soberanía alimentaria? Alguien tiene que hacer el trabajo agrícola y ganadero (Entrevista B.G.: 2012).

Vemos, pues, que tanto el accionar estatal a favor de ciertos sectores agroindustriales y a favor de ciertas alternativas económicas para campesinos inviables (como el turismo e incluso la construcción), así como la manera en que el MICC y las autoridades locales han respondido a los conflictos sociales derivados de un proceso de modernización agraria inconcluso en Cotopaxi, se minimizan las posibilidades futuras de promover un nuevo proceso político y económico por un sector agrario más incluyente y que sostenga un proyecto de soberanía alimentaria nacional desde la pequeña producción campesina. Siguiendo a Tarrow (1997) podríamos argumentar que el contexto de oportunidades políticas por un nuevo proceso de reforma agraria “desde arriba” se encuentra cercado y, más preocupante aún, la capacidad de agencia “desde abajo” parecería, como indicaría Ospina (2011), no estar fijando sus ojos en la gran propiedad agraria.

CONCLUSIONES

En la revisión historiográfica de la lucha campesina de las tierras occidentales de Cotopaxi pudimos observar cómo las redes de relacionamiento social (formales e informales) fueron de fundamental importancia para la articulación política de los indígenas que buscaban acceder a la tierra. Los relatos de vida recogidos por Olaf Kaltmeier muestra cuán importante fueron los contactos personales para difundir la noticia de la toma de tierras en la comunidad Salamalag Chico en ferias y otros espacios de sociabilidad cotidiana. El grado de conflictividad determinó la mayor o menor intervención estatal durante la etapa reformista (décadas de los 60s y 70s), aunque hubo una conversión exitosa de ciertos hacendados asentados en tierras fértiles de los valles interandinos, mientras que los campesinos indígenas de la provincia accedieron a tierras marginales y de poco interés para el hacendado en vía de modernización en la producción lechera.

En definitiva, la cuestión agraria en el Ecuador, y en particular en la sierra centro-norte, se resolvió de manera parcial, al tiempo que los intentos de industrialización por sustitución de importaciones fracasaron, en gran medida por el desinterés de la burguesía nacional por liderar un proyecto económico modernizador e incluyente. Para las comunidades indígenas que acceden a tierras marginales en el occidente de la provincia de Cotopaxi esto significó la continua expulsión de la mano de obra campesina hacia las ciudades, en busca de trabajos de diversa índole y en condiciones precarias.

Durante el período neoliberal (décadas de los 80s, 90s y primeros años del siglo XXI) las inequidades del agro se profundizan. Siguiendo la tesis de Carola Lentz, es posible suponer que la fuerza cohesionadora y movilizadora del Movimiento Indígena Ecuatoriano se deba en parte a las oportunidades laborales y experiencias de los migrantes internos. La migración interna de las poblaciones indígenas en busca de oportunidades laborales en los centros urbanos del Ecuador, así como la ampliación de las redes de relacionamiento una vez extinto el régimen de hacienda, extienden los límites del parentesco y la comunidad y otorgan a la categoría “indígena” un nuevo significado común a partir del cual es posible la acción colectiva. Dicha acción colectiva promovida por el Movimiento Indígena, en la medida en que trascendió sus condiciones

de clase al posicionar la demanda por el Estado Plurinacional, fue clave para resistir el período de las reformas estructurales, empujar la deslegitimación del Estado Neoliberal a través de una alianza con otros sectores populares y permitir el regreso del Estado con la Revolución Ciudadana a partir del 2006.

Dado que la transición agraria en el Ecuador tuvo limitaciones, la estructura agraria presenta actualmente altos niveles de concentración de tierras en pocas manos, mientras que las presiones demográficas en los sectores rurales de la sierra aceleran los procesos de minifundización y expulsión de la mano de obra campesina en edad de trabajar desde el sector rural hacia el urbano. El caso de Guangaje es aún más alarmante, en el sentido en que los páramos que ocupa dicho territorio presentan difíciles condiciones ambientales (suelos erosionados y falta de recursos hídricos) que imposibilitan el fortalecimiento de la economía campesina para más de la mitad de las familias indígenas residentes.

En consecuencia, la crisis “relativa” del Movimiento Indígena y campesino en el Ecuador, que se materializa en una menor o nula presión política contra la gran propiedad, en el cansancio organizativo de las bases y en el recrudecimiento de los conflictos inter e intra comunitarios, debe ser comprendida desde diferentes niveles de análisis. Aunque en esta tesis se ha reflexionado alrededor de los factores sociológicos que explican parte de dicha crisis de articulación y movilización política de las bases sociales del movimiento, es importante tener en cuenta otros factores explicativos como la influencia de los programas de desarrollo en el fraccionamiento comunitario (algo evidente en Guangaje), las consecuencias de las alianzas trucas con el partido Sociedad Patriótica y las actitudes “politiqueras” de ciertos dirigentes parroquiales en la reducción de la legitimidad del movimiento a nivel de base, como han propuesto Víctor Bretón y Franklin Ramírez respectivamente.

El análisis de las redes sociales involucradas en los oficios de la industria de la construcción muestra dos cuestiones fundamentales. Primero, al observar cómo se han ido construyendo las redes en el tiempo, resulta evidente que ahora, a diferencia de la década de los 80s y 90s, hay un mayor grado de profesionalización y jerarquización vertical en los oficios de la construcción, pero con la misma prominencia masculina en dichos oficios. Existe, como diría Bourdieu, un enorme trabajo acumulado por parte de los primeros comuneros de Guangaje que lograron ascender a la posición de Maestro

Mayor, la más alta de las jerarquías laborales presentes en la parroquia. Esta posición dominante y diferenciada en las redes de la construcción otorgan, al mismo tiempo, un importante flujo de capital económico y simbólico a los maestros mayores, quienes hacen uso de sus lazos fuertes para movilizar mano de obra desde las parroquias hacia las obras de construcción, y desde las obras hacia la parroquia.

Paralelamente, los maestros mayores utilizan efectivamente los “lazos débiles” que han ido construyendo con diferentes arquitectos, ingenieros o fiscalizadores mestizos. Como mencionaba Mark Granovetter, la “fuerza de los lazos débiles” aumenta las posibilidades que tienen los maestros mayores de conseguir empleos para sí mismo y para sus familiares o amigos cercanos. Esto es particularmente cierto para las nuevas generaciones de obreros de la construcción, para quienes los lazos del compadrazgo y de parentesco han perdido paulatinamente sus funciones de vinculación entre los sectores rurales e indígenas con los sectores urbanos y blanco-mestizos. Por último, es interesante observar que los factores que determinan una mayor vinculación por parte de los semi-proletarios de Guangaje en las redes de la construcción son tanto el tiempo dedicado a trabajar en la construcción como su pertenencia a grupos familiares, de amistad o vecinales/comunitarios que estén bien posicionados en las jerarquías propias del oficio. Los casos de Alberto y Juan Julio demuestran cuán significativos pueden ser estos dos factores mencionados para una vinculación exitosa a las redes de la construcción.

En segundo lugar, hemos podido constatar que la tensión observada por Gemici en el concepto de *imbricación* propuesto por Karl Polanyi tiene implicaciones sociológicas de interés. El análisis de la consolidación de las redes de la construcción en el tiempo muestra que las relaciones sociales fuertes, de parentesco, de vecindad (informales, en términos de Claus Offe) van perdiendo espacios de coordinación económica, mientras que los lazos débiles los van ganando. La forma vertical característica de estas redes, desde mujeres dedicadas a la alimentación de las cuadrillas, pasando por los bloqueros, oficiales, albañiles y otras posiciones intermedias, hasta terminar en la posición del maestro mayor y el conjunto de profesionales de la construcción (arquitectos, ingenieros y fiscalizadores), así como los rituales que se han construido socialmente para la entrega de los salarios y el reforzamiento de la jerarquía del Maestro Mayor, muestran la existencia de espacios de poder, conflicto y

negociaciones entre comuneros, amigos y/o familiares que no comparten una misma posición social en un campo de interacción determinado. Aunque la actividad económica está efectivamente imbricada en una tupida red de relaciones sociales, las características de estos lazos han ido cambiando en el tiempo. Así, procesos de modernización o transformación económicas tienen efectos específicos sobre la naturaleza de los lazos sociales que permiten la actividad económica, los cuales podrían ir perdiendo fuerza y cercanía interpersonal en el tiempo.

El conflicto intraparroquial detallado al final del tercer capítulo también muestra ciertas problemáticas derivadas de la diferenciación interna de los habitantes de Guangaje. Como vimos, los comuneros más involucrados en prácticas de abigeato y venta de mercancías de dudosa procedencia son los descendientes directos de aquellas familias que, durante la etapa reformista, fueron nodos fundamentales de la articulación política durante la lucha por la tierra antes y durante el período reformista. A su vez, estas familias lograron asentarse en el sector de la parroquia con mayores posibilidades ambientales para las labores agrícolas, y son parte de la minoría de Guangaje que puede reproducirse en su condición de campesinos a través de la producción y venta de cebolla, papas y crianza de animales menores, dependiendo solo ocasionalmente de la migración para complementar el ingreso familiar.

Siguiéndola tesis de Polanyi según la cual el ser humano actúa para salvaguardar su posición, derechos y activos sociales, se podría sugerir la siguiente hipótesis: al tiempo que la economía campesina en Guangaje se encuentra estructural y ambientalmente limitada, nuevas jerarquías y fuentes de prestigio han aparecido en el paisaje social de la parroquia; esto implica que aquellas familias que jugaron roles protagónicos en la articulación política durante la etapa reformista, y que mantienen a la economía campesina como eje fundamental de su reproducción, han dejado de participar en espacios de socialización (como las obras de construcción) de suma importancia en la actualidad; así, mientras los maestros mayores, albañiles y oficiales van ganando espacios de prestigio social en la parroquia, a aquellos descendientes de las familias campesinas no les queda sino buscar otras estrategias económicas (legales o ilegales) que devuelvan parte de esta posición privilegiada que fue perdida paulatinamente. Dado que los descendientes de las familias “más campesinas” de la parroquia no podrían vincularse de manera favorable a las redes de la construcción

(debido fundamentalmente a la falta de lazos fuertes/familiares/comunales/de amistad en las redes de la construcción producto de su origen más campesino), el conflicto puede explicarse en términos de un *tránsito de protagonismos al interior de la parroquia: de las familias campesinas que lucharon por la tierra, a las familias semi-proletarias y, en particular, a aquellas relacionadas directa o indirectamente con la figura de los maestros mayores que, usando su nuevo y extenso acervo de capitales sociales, culturales, económicos y simbólicos, empiezan a ocupar espacios claves en las estructuras organizativas tanto del Movimiento Indígena como del aparato estatal a nivel local (Tenencia Política y Junta Parroquial).*

Las respuestas del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi con respecto a estas problemáticas han sido limitadas. Como vimos, las iniciativas del MICC en Guangaje han tenido menos éxito de lo esperado. Las acusaciones de intervención y división interna del gobierno sobre las organizaciones de base también podrían ser entendidas como afiliaciones informales de ciertos sectores de las mismas bases del movimiento hacia el gobierno, sectores que han visto transformaciones (aunque limitadas) de su difícil cotidianidad. Por ejemplo, las obras de vialidad del gobierno central en la vía La Maná-Latacunga son reconocidas y aplaudidas por todos los habitantes de Guangaje, mientras que los gobiernos seccionales y las autoridades locales han caído en el descrédito por su incapacidad de dignificar los caminos vecinales al interior de la parroquia.

Pero también es cierto que el Estado ha tenido iniciativas ambivalentes al momento de responder a las necesidades de los sectores rurales en Cotopaxi, en particular a las necesidades de la pequeña economía campesina. El apoyo tanto económico como simbólico dado por parte del Presidente de la República a los agroindustriales de la provincia y los nuevos proyectos turísticos promovidos por el MIESS en la cordillera occidental ejemplifican esta ambivalencia. A esto hay que sumar el hecho de que el Estado se ha convertido en un dinamizador fundamental de la industria de la construcción, lo cual permitirá mayores niveles de estabilidad laboral a futuro para una buena parte de las bases del MICC. Los esfuerzos estatales por mejorar las condiciones laborales en la construcción y en las bloqueras también son notables, aunque vale preguntarse a qué necesidades y demandas está respondiendo el Estado: ¿a aquellas provenientes de los obreros de la construcción por mejores salarios y

condiciones laborales, o a aquellas provenientes de sectores que a pesar de las limitaciones históricas, estructurales y ambientales de su entorno, defienden su elección personal y colectiva de pensarse como campesinos? ¿Se está dando paso a mejoras en las condiciones laborales en la industria al tiempo que se construye un régimen de soberanía alimentaria?

Parecería, más bien, que el Estado está intentado modernizar la economía nacional al tiempo que la vincula en clave primario-exportadora a la economía mundo. Así, se podría esperar que para el mediano y largo plazo, la pequeña economía campesina no encontrará espacios adecuados e interés político dentro del proyecto modernizador del Estado, a menos que rearticule su organización de base y aumente el impacto de las movilizaciones a nivel nacional. Esto tiene que estar evidentemente ligado a las condiciones laborales actuales de parte importante de las mismas bases de la organización. *Hacer presencia efectiva en espacios laborales y de relacionamiento relacionados con las actividades productivas de los migrantes internos de las parroquias rurales de Cotopaxi es, por lo tanto, el reto más importante que plantea la actual fragmentación laboral y la jerarquización de las redes de relacionamiento inter e intracomunitarias en el tiempo.*

Hemos visto que el Movimiento Indígena fue capaz de articular la acción colectiva en escenarios de fragmentación laboral, en la medida en que las migraciones internas y los procesos de semi-proletarización y diferenciación del campesino indígena en la Sierra centro norte del Ecuador fueron anteriores a la etapa neoliberal. Lo que se podría plantear como hipótesis es que el proceso de profesionalización de las bases fragmentadas del movimiento indígena, la consolidación de nuevas jerarquías internas en las comunidades, así como las nuevas formas de construir y sostener posiciones de prestigio social intraparroquial derivadas de las diferenciaciones de clase, son consecuencias históricas y sociales que están desestructurando paulatinamente al movimiento desde adentro. Quisiera añadir en mi argumento que otro de los retos políticos que plantean los procesos de diferenciación y fragmentación laboral para las estructuras organizativas del movimiento es la incorporación de las necesidades y demandas de estos sectores desde las organizaciones de Segundo Grado. Incorporar una autoridad parroquial específica que acompañe a los migrantes temporales e interceda en sus conflictos particulares (por ejemplo, presionando a ingenieros o arquitectos por el

pago de salarios atrasados) podría dar paso a un proceso efectivo de rearticulación política y lucha por mejorar las condiciones laborales del trabajo precario en la industria de la construcción. Lo importante de estas decisiones es que logren mantener un equilibrio tal, entre demandas campesinas y obreras, que les permita sostener la cohesión interna del movimiento al tiempo que mantengan la demanda y la presión política por un nuevo y real proceso de redistribución de tierra, agua y medios de producción en el agro, en beneficio de las economías campesinas. De hecho, este equilibrio es uno de los retos más importantes que se ha planteado ya desde el Consejo de Jóvenes del MICC en sus intenciones por fortalecer la organización indígena allí, donde el movimiento ha estado históricamente ausente.

Parroquias como Guangaje no pueden ser pensadas solamente desde perspectivas rurales o agrícolas, pues el mismo territorio de altura de origen volcánico lo imposibilita. Así las cosas, los proyectos económicos alternativos promovidos por el Estado en la zona (proyecto turístico alrededor del Quilotoa) pueden dar soluciones viables para mejorar el nivel de vida de varias familias de la parroquia de Guangaje. Pero la inequitativa estructura agraria en el Ecuador implica que ahora más que nunca la reforma agraria y el reparto de tierra y agua es de fundamental importancia, sobre todo si se pretende construir, como lo manda la Constitución de Montecristi, un régimen de soberanía alimentaria basado en la pequeña economía campesina. Lamentablemente las posturas del gobierno central y del presidente en particular, las problemáticas acusaciones de terrorismo hacia las dirigencias del movimiento que de una u otra forma fijan sus ojos en la gran propiedad, las políticas públicas pro-agronegocios, así como los proyectos de ley que ahora se debaten en el legislativo, demuestran pocas intenciones políticas por promover tales reformas. *Sin embargo, la experiencia trunca de compra de tierras de ciertos comuneros de la parroquia de Guangaje podría advertir que si un proceso de reforma agraria y afectación real de grandes propiedades es motivado “desde arriba”, presionando los precios de las tierras a la baja y movilizandolos recursos monetarios en condiciones favorables hacia las familias campesinas para la compra de tierras, sería posible e incluso deseable para muchos “semiproletarios” de la sierra ecuatoriana una estrategia de recampesinización, a pesar de su prolongada vinculación laboral en otros sectores de la economía nacional.*

Alejandra Santillana (2012: 135-141) ha argumentado que el Movimiento Indígena fue capaz de incorporar demandas cada vez más diversas y universales en un proceso de negociación hegemónica interna, proceso que no ha estado exento de sesgos y contradicciones. Su argumento trata de visibilizar cuán importantes han sido las mujeres y sus experiencias migratorias en este proceso de incorporación y negociación de nuevas formas de “ser indígena”. En paralelo con este argumento, la presente investigación intenta mostrar cuán importante resulta incorporar a los trabajadores de la industria de la construcción en el mismo escenario de negociación y consolidación de nuevas identidades políticas que sean capaces de re articular al movimiento y sus vínculos con los sectores populares de la sociedad ecuatoriana. Articulación que es necesaria y urgente para promover transformaciones estructurales profundas que destruyan, de una vez por todas, las herencias coloniales del Ecuador en su intento por construirse como un Estado Plurinacional y consolidar un régimen de Soberanía Alimentaria en base a la pequeña producción campesina. Los nuevos términos de discusión y resolución de la cuestión agraria del siglo XXI están por materializarse, y urge la rearticulación del movimiento campesino nacional. Caso contrario el Ecuador profundizará su matriz agro-extractiva, heredando nuevamente los problemas históricos de la periferia colonial a futuras generaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Acción Ecológica. (2012). Ecuador: criminalización de la protesta social en tiempos de “revolución ciudadana”. Página Web. Revisado el 30 de Agosto de 2013. Disponible en: <http://www.accioneologica.org/criminalizados/articulos/1487-ecuador-criminalizacion-de-la-protesta-social-en-tiempos-de-revolucion-ciudadana>
- Acosta, Alberto. (2006). Breve historia económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional. 406 p.
- Acosta, et al. (2008). Entre el quiebre y la realidad. Quito: Abya-Yala. 2008. 213 p.
- Akram-Lodhi, A. Haroon & Kay, Cristóbal. (2010a). “Surveying the agrarian question (part 1): current debates and beyond”. En Journal of Peasant Studies, Volume 37, Issue 2: 177-202
- Akram-Lodhi, A. Haroon & Kay, Cristóbal. (2010b). “Surveying the agrarian question (part 2): current debates and beyond”. En Journal of Peasant Studies, Volume 37, Issue 2: 255-284
- Almeida, Ileana et. al. Comp. (1992). Indios: una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990. Quito: ILDIS. 527 p.
- Alomía, Mercedes. (2005). Efectos de la producción agropecuaria en los suelos de los páramos. En: Ecuador Debate. Quito, Ecuador: CAAP. n.65. p. 175
- Amboya, Carlos. (1994). Relación de la espiritualidad indígena con las iglesias y el movimiento indígena. En: Búsquedas de espacios para la vida. Quito: Comisión Coordinadora Internacional: Abya-Yala. p. 97-105
- Arroyo, Víctor y Gálvez, Elena. (2012). La necesidad de una reforma agraria en el Ecuador del siglo XXI. Quito. Disponible en: <http://lalineadefuego.info/2012/07/09/la-necesidad-de-una-reforma-agraria-en-el-ecuador-del-siglo-xxi/>
- Auyero, Javier. (2003). “Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea”. En: Íconos: revista de Ciencias Sociales n.15. Quito, Ecuador: FLACSO - Sede Ecuador.
- Auyero, Javier. (2004). “¿Por qué grita esa gente? Los medios y los significados de la protesta popular en la Argentina de hoy. En América Latina Hoy, No. 36, pp. 161-185.
- Barba Bolaños, Oscar. (2006). Participación ciudadana en Cotopaxi: análisis crítico sobre su construcción en la última década. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 152 p.

- Barsky, Osvaldo. (1984). La reforma agraria ecuatoriana. Quito: Corporación Editora Nacional: FLACSO - Ecuador. 406 p.
- Bartra, Armando. (2010). “Campes indios: Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado”. En Revista Memora. No. 248. 4-13. Disponible en: <http://boliviaagraria.files.wordpress.com/2011/05/bartra-campesindios.pdf>
- Bernal, Fabián. (1996). La Economía de Etiquetación Ecológica en ECUADOR. Quito: FLACSO - Sede ECUADOR.
- Bernstein, Henry. (2004). “‘Changing Before Our Very Eyes’: Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today”. En Journal of Agrarian Change, Vol. 4 No. 1 y 2. pp. 190– 225.
- Bernstein, Henry. (2008).”Tierra rural y conflictos agrarios en el África subsahariana”. En Recuperando la tierra: el resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 79-116 p.
- Bernstein, Henry. (2011).”Is there an Agrarian Question of Labor in the 21st Century?”.En Canadian Journal of Development.27:4. 449-460
- Borras, Saturnino; Franco, Jennifer; Kay, Cristóbal y Max Spoor. (20 de octubre de 2011). El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia – versión preliminar. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Disponible en: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/borras_franco_kay__spoor_1_ac_land_grabs_spanish_nov_2011.pdf
- Bourdieu, Pierre. (2000 [1986]). “Formas de capital,” en Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer. Pp 131-164.
- Bourdieu, Pierre. (2000 [1986]). “Formas de capital,” en Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer. Pp 131-164.
- Bourdieu, Pierre. (2001 [2000]). “Principios de una antropología económica,” en Estructuras sociales de la economía. Buenos Aires: Ediciones Manantial. Pp 219-248.
- Bourdieu, Pierre. (2001 [2000]). “Principios de una antropología económica,” en Estructuras sociales de la economía. Buenos Aires: Ediciones Manantial. Pp 219-248.
- Brassel, Frank, Herrera, Stalin; Laforge, Michel, editores. (2008). ¿Reforma agraria en el Ecuador?: Viejos temas, nuevos argumentos. Quito: Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE). 248 p.

- Bravo Robles, Ana Lucía. (2009). Análisis de las políticas agrícolas aplicadas en el Ecuador en los noventa desde la perspectiva de la soberanía alimentaria. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 85 p.
- Bretón Solo de Zaldívar, Victor. (2001). Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos: ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 278 p.
- Bretón Solo de Zaldívar, Victor. (2011). “Reforma agraria, desarrollo rural y etnicidad en los Andes septentrionales”. En Estado, movimientos sociales y soberanía alimentaria en América Latina: ¿hacia un cambio de paradigma agrario?. Gascón y Montagut, coord. Quito: FLACSO – Sede Ecuador: 151-167
- Burgos Guevara, Hugo. (1977). Relaciones interétnicas en Riobamba: dominio y dependencia en una región indígena ecuatoriana. México: Instituto Indigenista Interamericano. Pp. 390
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo. (1971). Dependencia y desarrollo en América Latina: ensayo de interpretación sociológica. México D.F.: Siglo XXI Editores. 166 p
- Carrión, Diego y Herrera, Stalin. (2012). Ecuador Rural del Siglo XXI. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos. 182 p.
- Carrión Sánchez, Diego. (2012a). El cambio en la estructura de la propiedad de la tierra según la propuesta de ley orgánica de tierras y territorios de la COPISA. Quito. Disponible en: <http://lalineadefuego.info/2012/07/12/el-cambio-en-la-estructura-de-la-propiedad-de-la-tierra-segun-la-propuesta-de-ley-organica-de-tierras-y-territorios-de-la-copisa-por-diego-carrion-sanchez/>
- Carrión Sánchez, Diego. (2012b). Límites de Tenencia de la tierra y la necesidad de un proyecto rural con perspectiva social. Quito. Disponible en: <http://lalineadefuego.info/2012/07/04/limites-de-tenencia-de-la-tierra-y-la-necesidad-de-un-proyecto-rural-con-perspectiva-social-por-diego-carrion-sanche/>
- Carrión Sánchez, Diego. (2012c). Indicios sobre la posición de Alianza País en la discusión sobre la ley de tierras y territorios. Quito. Disponible en: <http://lalineadefuego.info/2012/06/18/indicios-sobre-la-posicion-de-alianza-pais-en-la-discusion-sobre-la-ley-de-tierras-y-territorios-por-diego-carrion-sanchez/>
- Chiriboga, Manuel. (1987). Movimiento campesino e indígena participación política en Ecuador, la construcción de identidades de una sociedad heterogénea. En: Ecuador Debate. Quito, Ecuador: CAAP. n.13 p. 87
- Chiriboga, Manuel Comp. (1988a). El problema Agrario en el Ecuador. Quito: ILDIS. 544 p.
- Chiriboga, Manuel. (1988b). “La reforma agraria en el Ecuador y en América Latina. En Nariz del Diablo: Publicación CIESE Bimestral. n.11: 30-38.

- Constitución Política del Ecuador. (2008). Disponible en: <http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf>
- Colloredo-Mansfeld, Rudi.(2009). *Fighting like a community: andean civil society in an era of indian uprisings*.Chicago: University of Chicago Press. xviii, 233 p.
- Coronel, Valeria. (2009). “Orígenes de una democracia corporativa”. En: *Historia social urbana: espacios y flujos*. Kingman, Eduardo coord. Quito: FLACSO - Sede Ecuador: Ministerio de Cultura del Ecuador. p. 323-364
- Coronel, Valeria. (2011). *A Revolution in Stages: Subaltern Politics, Nation-State Formation, and the Origins of Social Rights in Ecuador, 1834-1943*. (Ph.D. diss., New York University). Disponible en: <http://gradworks.umi.com/3445285.pdf>
- Ecuavisa. (2012, 05 17). Gasolina subsidiada en aeropuerto de Latacunga causa polémica. Noticias ECUAVISA. Disponible en <http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-regionales-sierra/49716-gasolina-subsidiada-en-el-aeropuerto-de-latacunga-causa-polemica.html>
- El Comercio. (2012-05-01). La afiliación al seguro social subió 21%. El Comercio Negocios. Disponible en:http://www.elcomercio.com/negocios/afiliacion-Seguro-Social-subio_0_621538073.html
- Ferrín Schettini, Rosa. (1980). *Transformación en las relaciones sociales de producción en el agro serrano: el caso Totorillas*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 1980. 261 p.
- Galarza, Jaime. (1973). *El Yugo Feudal*. Edit. Solitierra: Quito.
- Gemici, Kurtulus. (2008). “Karl Polanyi and the antinomies of embeddedness”. En *Socio-economic Review* No. 6.Los Ángeles: UCLA. pp. 5-33
- Giarraca, Norma Comp. (2000)¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires: CLACSO.382 p.
- Gondard, Pierre. Mazurek, Hubert. (2001). “30 años de reforma agraria y colonización en el Ecuador (1964 - 1994)”. En: *Dinámicas territoriales: políticas nacionales, presiones externas, mercado y movimientos sociales: los territorios cambian y su fisonomía revela los nuevos equilibrios*. Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela. Quito: Colegio de Geógrafos del Ecuador: Corporación Editora Nacional: Instituto de Recherche pour le développement: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Departamento de Geografía. 2001. p. 15
- Gould, Roger. (1991), “Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune”, 1871, *American Sociological Review*, Vol. 56, No. 6 (Dec., 1991), pp. 716-729
- Guerrero Cazar, Fernando; Ospina, Pablo. (2003). *El poder de la comunidad: ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*. Buenos Aires: CLACSO. 302p.

- Guerrero Cazar, Fernando; Ospina, Pablo. (2003a). "Capítulo 1: El giro histórico: entre la larga y la corta duración". En *El poder de la comunidad: ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*. Buenos Aires: CLACSO. 302p. disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/guerrero/cap1.rtf>
- Guerrero, Andres. (1991). "Determinaciones del pasado y mentalidades del presente: un conflicto entre comuneros. Quinchuquí-Otavalo". En *De la economía a las mentalidades*. Quito: El Conejo. 149-192
- Guerrero, Andrés. (1997). "Se acabaron las formas ventrílocuas de representación". En: *Íconos: revista de Ciencias Sociales*. Quito, Ecuador: FLACSO - Sede Ecuador. n.01 p. 60
- Guerrero, Andrés. (2000). "El proceso de identificación". En *Etnicidades*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. p. 9-77
- Guerrero, Andrés. (2010). *Administración de poblaciones, ventriloquía y transescritura: análisis históricos: estudios teóricos*. Lima: IEP, FLACSO - Sede Ecuador. 2010. 456 p.
- Gould, Roger. (1991), "Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune, 1871", en *American Sociological Review*, Vol. 56, No. 6 (Dec., 1991): pp. 716-729
- Harvey, David. (2005). *Breve Historia del Neoliberalismo*. Madrid: Ediciones Akal. Disponible en: <http://www.economia.unam.mx/academia/inae/inae4/u115.pdf>
- Heredia, Mariana y Roig, Alexandre. (2008). "¿Franceses contra anglosajones? La problemática recepción de la sociología económica en Francia". En *Apuntes de investigación del CECYP No. 14*. Disponible en: <http://apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/299>
- Herrera, Stalin y Carrión, Diego. (2012). *Ecuador rural del siglo XXI. Soberanía Alimentaria, inversión pública y política agraria*. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos. 182 pp.
- Herrera, Stalin. "Percepciones de la Reforma agraria: análisis del discurso de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas. Quito: SIPAE. 2007. 133 p.
- Hobsbawn, Eric. (1994). *The Age of Extremes: a history of the world, 1914-1991*. Nueva York: Pantheon Books.
- Hylton, Forrest y Sinclair Thomson, (2006): "The Chequered Rainbow". *New Left Review*, No. 35.
- Ibarra, Hernan y Ospina, Pablo. (1994). *Cambios Agrarios y Tenencia de la Tierra en Cotopaxi*. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos. 188 pp.

- Ibarra, P., R. Gomá y S. Martí, (2002), “Los nuevos movimientos sociales. El Estado de la cuestión”, en P. Ibarra, R. Gomá y S. Martí (eds.), *Creadores de democracia radical*, Barcelona: Icaria, pp. 23-56.
- Ilaquiche Licta, Raúl. (2004). *La administración de justicia indígena en Tigua, su evolución y práctica actual*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 2004. 129 p.
- Jaramillo, Carlos Felipe. (2000). “El mercado rural de tierras en América Latina: hacia una nueva estrategia”. En *Políticas Agrícolas*. Bogotá: Red de Instituciones vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas. 1994 – 2001. No. Especial. p. 61
- Jiménez, Wilson y Lizárraga, Susana. (2009). “Pluriactividad e ingresos familiares en el área rural de Bolivia”. En: *La pluriactividad en el campo latinoamericano*. Grammont y Martínez comp. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. Pp. 243-271
- Jiménez, Wladimir. (2011). Informe sectorial. Ecuador: sector construcción. PacificCredit Rating. Disponible en: http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_CONSTRUCCION_201103.pdf
- Kalmeier, Olaf. (2007). “La Universidad terrateniente. Biopolítica, poder soberano y resistencia indígena-campesina en las haciendas de la Universidad Central en la provincia de Cotopaxi, 1930-1980”. En: *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar; Corporación Editora Nacional. n.26 p.73
- Kaltmeier, Olaf. (2008). *Jatarishun: testimonios de la lucha indígena de Saquisilí (1930-2006)*. Quito: Corporación Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 329 p.
- Kay, Cristóbal. (2002). “Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialization and Development”. En *Third World Quarterly*. Vol. 23, No. 6. pp. 1073-1102
- Kay, Cristóbal. (2007). “Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina”. En *Revista Íconos* No. 29. Quito: FLACSO Sede Ecuador. Pp. 31-50
- Knight, Alan. (2001). “The Modern Mexican State: Theory and Practice”, en Centeno y López- Alves, *The Other Mirror*, págs. 177-218
- Kingman Garcés, Eduardo. (2009). “Apuntes para una historia del gremio de albañiles de Quito”. En: *Historia social urbana: espacios y flujos* Quito: FLACSO - Sede Ecuador: Ministerio de Cultura del Ecuador. p. 365-382
- La Gaceta. (2010-09-23). MIES e INFA controlan trabajo prematuro: niños y adolescentes dejan bloqueras y se reinsertan en los estudios. Disponible en: http://www.lagaceta.com.ec/site/html/pagina.php?sc_id=1&c_id=68&pg_id=65134

- Lander, Edgardo. (2004). "Venezuela: la búsqueda de un proyecto contra hegemónico". En: *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO. p. 197-223
- Larrea, Carlos, et al. (2011). "Mapas de pobreza, consumo por habitante y desigualdad social en el Ecuador (1995-2006)". En: *El territorio de senderos que se bifurcan: Tungurahua: economía, sociedad y desarrollo*. Quito: Corporación Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 2011. p. 17-46
- Lentz, Carola. (2000). "La construcción de la alteridad cultural como respuesta a la discriminación étnica". En: *Etnicidades*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. p. 201-233
- Llovet, Ignacio. (1980). *Procesos agrarios e innovaciones tecnológicas: el caso de la producción de papa en la sierra ecuatoriana*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 1980. 223 p.
- Mariátegui, José Carlos. (1928). *7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*. Lima: Biblioteca Amauta.
- Marrero, Adriana. (2006). "La teoría del capital social. Una crítica en perspectiva latinoamericana". En *Arxius* 14: 73-90.
- Martínez Abarca, Juan Mateo. (2010). *El cascabel del gatopardo: la orientación política del proyecto de la revolución ciudadana a través de una lectura de su relación con el movimiento indígena*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. 136 p.
- Martínez V., Luciano. (1988 [1985]). "Migración y cambios en las estrategias familiares de las comunidades indígenas de la sierra". En: *Población, migración y empleo en el Ecuador*. Quito: ILDIS. p. 147-165
- Martínez Valle, Luciano. (2007). *Siete aportes de la investigación sociológica de Bourdieu*. En: *Ecuador Debate* n.72. Quito, Ecuador: CAAP.
- Martínez Valle, Luciano. (2009). *La pluriactividad entre los pequeños productores rurales*. En: *La pluriactividad en el campo latinoamericano*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. p. 81-101
- Martínez, Luciano. (1999). *La nueva ruralidad en el Ecuador*. *Revista Iconos*, (8), 12-19.
- Martínez, Luciano. (2009). "La pluriactividad entre los pequeños productores rurales: el caso ecuatoriano". En: *La pluriactividad en el campo latinoamericano*. Grammont y Martinez comp. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. Pp. 81-102
- Mauro, Amalia. (1986). *Albañiles campesinos: migración temporal de los obreros de la construcción*. Quito: CIUDAD. 136 p.

- McMichael, Philip. (1997). "Rethinking Globalization: The Agrarian Question Revisited". En: *Review of International Political Economy*, Vol. 4, No. 4: pp. 630-662
- Michel Callon. (2008). "Los mercados y la performatividad de las ciencias económicas". En *Apuntes de investigación del CECYP* 12(14): 11-68.
- Moore, Barrington Jr. (1966). *Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world*. Boston: Beacon Press: 559p.
- Moyo, Sam y Yeros, Paris. (2005). *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. Londres: ZedBooks. 400p.
- Muñoz, Jose Pablo. (2011). "Constituyente, gobierno de transición y Soberanía Alimentaria en Ecuador". En *Estado, movimientos sociales y soberanía alimentaria en América Latina: ¿hacia un cambio de paradigma agrario?* Gascón y Montagut, coord. Quito: FLACSO – Sede Ecuador: 151-167
- Murmis, Miguel. (2006). "Is There an Agrarian Question in the 21st Century?" A Commentary. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*. Volume 27, Issue 4: pp. 467-470
- Negreiros, Janaina. (2009). "La FENACLE y la organización de los asalariados rurales en la provincia del Guayas". En: *Ecuador Debate*. Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP, (no. 78, diciembre 2009): pp. 125–140.
- North, Liisa. (1985). "Implementación de la política económica y la estructura del poder político en el Ecuador". En: *La economía política del Ecuador: campo, región, nación*. Quito: Corporación Editora Nacional. p. 425-458
- North, Liisa. (1997). *Qué pasó en Taiwan?* En: Martínez V., Luciano, comp. *El desarrollo sostenible en el medio rural*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. p. 89-113
- North, Liisa. (2008) "Neoliberalismo versus programa rural". En: *Desarrollo rural y neoliberalismo: Ecuador desde una perspectiva comparativa*. Quito: Corporación Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar. 2008. p. 13-37
- Núñez, Jorge. (2011). "Despojo agrario". En: *Tierra urgente*. Quito: SIPAE: Ediciones La Tierra: OXFAM. p. 15-31
- Offe, Claus. (1992a). "Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional". En *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Colección Politeia. Madrid, España
- Offe, Claus. (1992b). "La institucionalización de la influencia de las asociaciones. Un atolladero de la política de la ordenación", en *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, Colección Politeia, Madrid – España.

- Ospina Peralta, Pablo. (2009). "El naufragio de una promesa. La redistribución agraria en la Revolución Ciudadana". En: Tierra urgente. Quito: SIPAE: Ediciones La Tierra: OXFAM. p. 43-4
- Ospina, Pablo, coord. (2011). El territorio de senderos que se bifurcan: Tungurahua: economía, sociedad y desarrollo. Quito: Corporación Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 351 p.
- Ospina, Pablo. (16 de diciembre, 2011). Cinco Tesis sobre la coyuntura agraria. Publicado en Línea de Fuego, disponible en: <http://lalineadefuego.info/2011/12/16/cinco-tesis-sobre-la-coyuntura-agraria-por-pablo-ospina-peralta/>
- Ospina, Pablo. (2006). "La crisis del clientelismo en el Ecuador". En Ecuador Debate No. 69. Quito: CAAP. Pp. 57-75
- Ospina, Pablo. (2008). "Ecuador al ritmo de la iniciativa política del gobierno de la revolución ciudadana". En Entre el quiebre y la realidad. Alberto Quito: Abya-Yala: p. 125-141
- Ospina, Pablo. (2009). "Nos vino un huracán político": la crisis de la CONAIE". En Los Andes en Movimiento: Identidad y poder en el nuevo paisaje político. Ospina, Kaltmeier y Busches coordinadores. Quito: Corporación Editora Nacional: 123-149
- Pérez, Edelmira, Almeida, María y Hubert C. de Grammont coordinadores. (2008). La nueva ruralidad en América Latina: avances teóricos y evidencias empíricas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: CLACSO. 380 p.
- McMichael, Philip. (1997). "Rethinking Globalization: The Agrarian Question Revisited". En Review of International Political Economy, Vol. 4, No. 4: pp. 630-662
- Philip Mc. Michael, (2005). "Globalization". En The Handbook of Political Sociology. Editado por Thomas Janoski, Robert Alford, Alexandre Hick y Mildred Schartz. Cambridge University Press. Pgs. 587-606.
- Polanyi, Karl. (2001 [1944]). La Gran Transformación: Crítica del liberalismo económico. Ediciones La Piqueta. Madrid: pp. 425. Disponible en <http://www.omega.es/autores.php?letra=p#>
- Pozas, María de los Ángeles. (2004). "Aportes y limitaciones de la sociología económica". En Cuaderno de Ciencias Sociales 134. FLACSO, sede Costa Rica. Pp. 9-36.
- Ramírez, Franklin y Ramírez, Jaques. (2005). La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales y repertorios de acción migratoria Quito: Centros de Investigaciones CIUDAD. 2005. 239 p.

- Ramírez Gallegos, Franklin. (2006). “Mucho más que dos izquierdas”. En: Nueva Sociedad. Buenos Aires, Argentina: Friedrich-Ebert-Stiftung. 1973. n.205 p.30-45. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3379_1.pdf
- Ramírez, Franklin. (2009). “El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador: el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK) “. En Los Andes en Movimiento. Ospina, Kaltmeier y Buschges editores. Quito: Corporación Editora Nacional: pp 65-94.
- Ramón V., Galo. (2005). Cotopaxi debate. En: Aprendiendo sobre la biodiversidad. Quito: Ecociencia. v.1 p. 157-197
- Razeto Migliaro, Luis. (2007). “La economía de solidaridad”. En: La economía social desde la periferia: contribuciones latinoamericanas. Buenos Aires: Altamira. p. 317
- Roseberry, William. (1993). “Beyond the agrarian question in Latin America”. En Confronting Historical Paradigms. Madison: The University of Wisconsin Press: 318-361
- Rubio, Blanca. (2009). Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. México: Plaza y Valdés editores: Universidad Autónoma de Chapingo. 251 p.
- Sacher, William y Acosta, Alberto. (2012). La minería a gran escala en Ecuador: análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador. Quito: Abya-Yala. 197 p.
- Saad, Pedro. (1975). La realidad Agropecuaria del Ecuador. Editorial Universidad: Guayaquil.
- Sánchez Parga, (1984). José. Estructuras espaciales del parentesco en los andes. En: Estrategias de supervivencia en la comunidad andina. Quito: CAAP. p. 154-
- Sánchez-Parga, José. (2002). Crisis en torno al Quilotoa: mujer, cultura y comunidad estudios y análisis. Quito: Centro Andino de Acción Popular. 208p.
- Santillana, Alejandra. Herrera, Stalin. (2009). Génesis, experiencia, transformación y crisis del Movimiento Indígena Ecuatoriano. En: América Latina desde abajo: experiencias de luchas cotidianas. Quito: Abya-Yala: p.330-352
- Sañay, Juan Ramiro. (2010). Plan de Desarrollo de la parroquia de Guangaje, ejes: salud, nutrición, vivienda y servicios básicos, trabajo y migración. Universidad Central del Ecuador. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas. Inédito.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: construyendo un Estado plurinacional e intercultural. Quito.

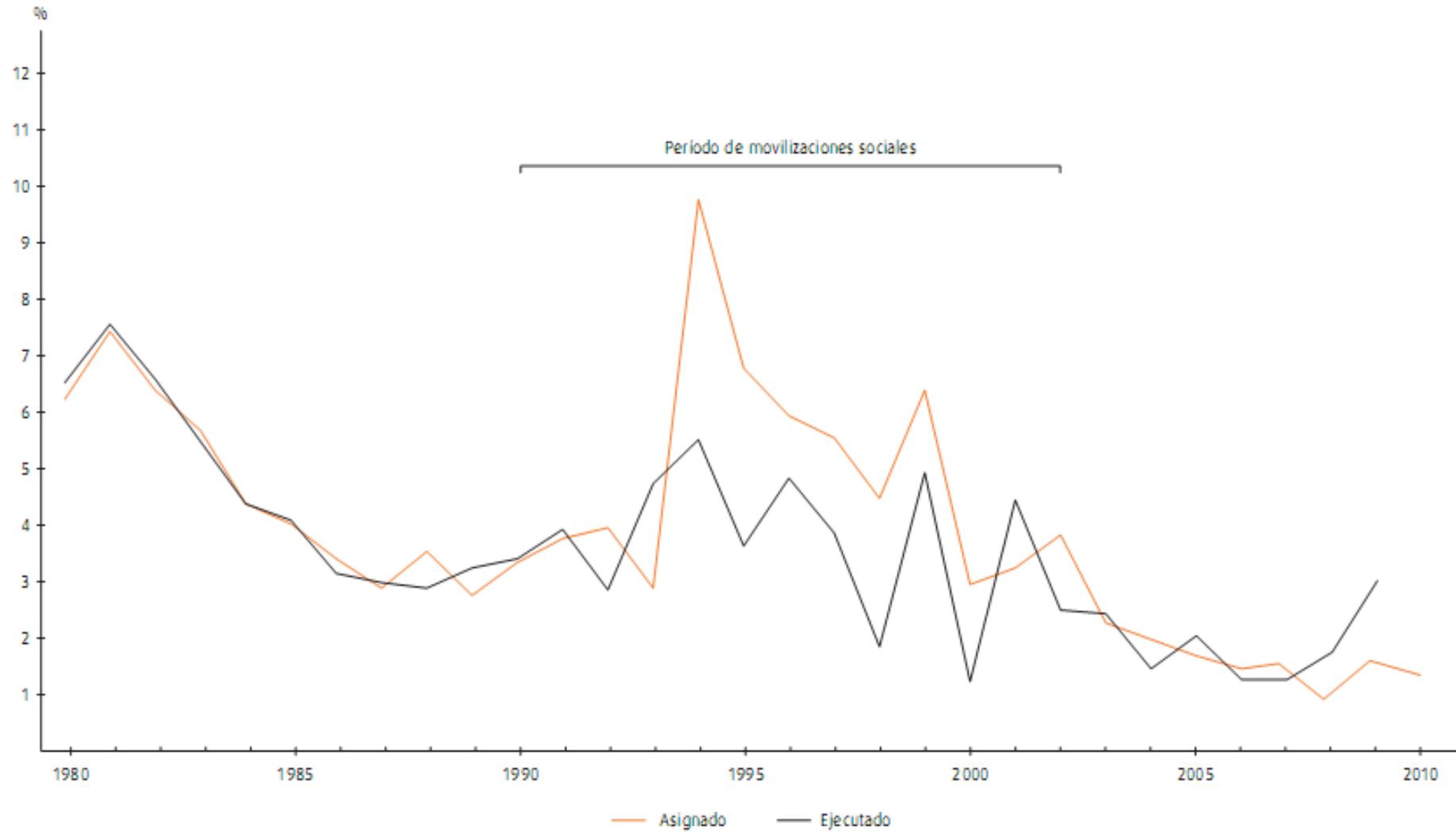
- Tapia, Ángeles. (2006). Plan de Desarrollo Parroquial, Guangaje, Pujilí. SENPLADES, HCPC, Asociación de Juntas Parroquiales Rurales de Cotopaxi, auspiciantes. Inédito.
- Tarrow, Sydney. (1997). “Estructuras de movilización y acción política colectiva”. En Poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de masas en el estado moderno, Madrid: Alianza. Pp. 177-197
- Tuaza Castro, Luis Alberto. (2011). Runakunakaashkashaikushkashinamirikurinkuna, ña mana tandanakunatumankunachu: reflexiones sobre la crisis del Movimiento Indígena Ecuatoriano desde las bases comunitarias. Quito: FLACSO-Sede Ecuador. 338 p.
- Universidad Andina Simón Bolívar. (2012). Mapas de incidencia de la pobreza (2001-2006). Quito. Disponible en: <http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/MAPAS%20SOCIOECONOMICOS/POBREZA%20Y%20DESIGUALDAD/Ecuador/POBREZA.pdf>
- Velasco Abad, Fernando. (1981). Ecuador: subdesarrollo y dependencia. Quito: Editorial El Conejo. 239 p., tablas
- Wallerstein, Immanuel. (1974). The modern world – system. Berkeley: University of California Press.
- Wolf, Eric R. (1973). Las luchas campesinas del siglo XX. Madrid: Siglo XXI Editores. 438 p.
- Zamosc, León. (1990). “Luchas campesinas y reforma agraria: la sierra ecuatoriana y la costa atlántica colombiana en perspectiva comparativa”. En Revista Mexicana de Sociología. México D.F, México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
- Zelizer, Viviana. (2007). “Pasados y futuros de la sociología económica”. En Apuntes de investigación del CECYP 12(14): pp.94-112
- Zevallos, José Vicente. (1990). “Reforma agraria y cambio estructural”. En: Ecuador Debate. Quito, Ecuador: CAAP. n.20 p. 23

ANEXOS:

Anexo 1: Preguntas realizadas en encuestas.

PARTE 1										
EDAD	SEXO		RAMA DE ACTIVIDAD	CARGO OCUPADO	INGRESOS	HORARIO DE TRABAJO				
	M	F								
PARTE 2										
HECTÁREAS DE CULTIVO		CULTIVOS MÁS IMPORTANTES		TIENE RIEGO	ANIMALES				DESTINO DE PRODUCCION AGRICOLA Y ANIMALES	
					VACAS	BORREGOS	POLLOS	OTROS	VENTA	AUTOCONSUMO
PARTE 3										
EN QUE TRABAJA FUERA DE GUANGAJE	QUIEN LE OFRECIO EL TRABAJO, CUAL ES SU CARGO	DONDE TRABAJA CUANDO SALE DE GUANGAJE	EDAD A LA QUE EMPEZÓ A TRABAJAR FUERA	CON CUANTOS MAESTROS MAYORES/BLOQUERAS TRABAJA	QUE PORCENTAJE DEL AÑO PASA FUERA DE GUANGAJE					POR QUÉ REGRESA A GUANGAJE
					0-15%	15-30%	30-50%	50-70%	70-100%	
PARTE 4		PREGUNTAS ABIERTAS								
QUÉ CONFLICITOS LABORALES SON LOS MÁS COMUNES		EXPECTATIVAS EN TRABAJO A FUTURO		EXPECTATIVAS PARA GUANGAJE		AFILIADO A ALGUN SEGURO (IESS, SEGURO SOCIAL CAMPESINO, SEGURO PRIVADO)	OPINION SOBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	OPINION SOBRE AUTORIDADES LOCALES	OPINION SOBRE MICC Y PACHAKUTIK	OPINION SOBRE GOBIERNO

Anexo 2: Gasto Público en Agricultura como porcentaje del gasto total del Gobierno Central, 1980-2010.



Elaboración y Fuente: Herrera y Carrión, 2012: 51